

**Sociología
y
política**

**ESTUDIOS SOBRE
LOS ORÍGENES
DEL PERONISMO**

por
Miguel Murmis
y
Juan Carlos Portantiero





Siglo veintiuno editores Argentina s.a.

TUCUMÁN 1621 7° N (C1048AAN), BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA

Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D. F.

CDD Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos.
306.2 Estudios sobre los orígenes del peronismo. -1ª. ed.-
Buenos Aires : Siglo XXI Editores Argentina, 2004.
XXX p. ; 13,5x21 cm. (Sociología y política)

ISBN 987-1105-62-2

1. Sociología política.

Primera edición: 1971, Siglo XXI de Argentina Editores

Portada de Peter Tjebbes

1ª edición argentina: 2.500 ejemplares

© 2004, Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos

© 2004, Siglo XXI Editores Argentina S.A.

ISBN 987-1105-62-2

Impreso en Idea Gráfica
Pte. Perón 3785, El Palomar,
en el mes de mayo de 2004

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina – Made in Argentina

Índice

Claves para la relectura de un clásico	9
Prólogo	45
Advertencia	49
Primera parte	
CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y ALIANZA DE CLASES EN LA ARGENTINA (1930-1940)	
1. Introducción	53
2. Las condiciones de la alianza de clases	60
3. La diferenciación interna en el sector agropecuario y los grupos de oposición	78
4. Agrarios e industriales frente al “Plan Pinedo”	86
5. El papel del Estado: alianza de clases y hegemonía	97
Segunda parte	
EL MOVIMIENTO OBRERO EN LOS ORÍGENES DEL PERONISMO	
1. Heterogeneidad obrera	113
2. Clase obrera y sindicatos en la génesis del peronismo	130
3. Desarrollo industrial y orientaciones obreras	165

Claves para la relectura de un clásico.

Una introducción a *Estudios sobre los orígenes del peronismo*

Las numerosas reediciones que alcanzó en los últimos treinta años. La recurrencia con la que fue referenciado por casi todos los que se ocuparon de las características y la evolución de la burguesía argentina durante la primera mitad del siglo XX, por los que incursionaron en la historia de la clase obrera organizada hasta 1945 o por los que examinaron las causas sociales del surgimiento del fenómeno peronista. Su permanente utilización como bibliografía en las cátedras universitarias. He aquí tan sólo algunas de las evidencias que sugieren que *Estudios sobre los orígenes del peronismo* de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero es un libro clásico en la Argentina. Una obra pionera, que abrió surcos nuevos y que señaló los caminos sin salida a los que llevaban ciertas interpretaciones establecidas, y que por esto se constituyó así, en un punto de referencia insoslayable. Tanta continuidad y centralidad de un escrito invita a ensayar una reflexión que explore el contexto y los propósitos con los que fue diseñado, señale las ideas y teorías en las que abrevó o con las que intentó confrontar, evalúe el aporte que el texto representó en el conocimiento de los temas considerados y analice el modo en que ese aporte fue procesado por obras posteriores. Hacia esos aspectos se dirigen las siguientes páginas.

1

Estudios sobre los orígenes del peronismo reconoce múltiples influjos, determinaciones y contextos, que recorren y entrelazan el campo de las ciencias sociales, las vicisitudes del compromiso político y la historia intelectual del país de los años sesenta. La ubicación disciplinaria y académica del texto y de sus dos autores es un modo de introducirse en esos cruces. Posicionada en un enfoque sociológico atento al análisis de las estructuras económico sociales y de las formas de la acción colectiva, la obra también privilegia la dinámica del devenir histórico. Ejercicio de sociología histórica, oxigenado por ciertos aportes de una nueva historia social, interesado en recobrar la dimensión histórica de la economía e influenciado por la mirada totalizadora del marxismo. He allí nomenclaturas posibles para identificar, inicialmente, las marcas del escrito.

Esta clasificación reconoce bien la formación profesional de los autores, partícipes activos en la experiencia de la Universidad de Buenos Aires posperonista. En disonancia con las tendencias regresivas que se expresaban en los aspectos económicos, sociales y políticos del período, caracterizados por los intentos de revertir la anterior distribución del ingreso, mermar el peso sociopolítico de la clase obrera y edificar un sistema semidemocrático basado en la proscripción de la representación política mayoritaria, desde 1955 aquella casa de estudios quedó inmersa en un proceso de modernización y excelencia académica, que respiró en un clima cultural dinámico y renovador. Esas transformaciones se hicieron sentir fuertemente en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí, precisamente, los estudios de historia social y de sociología lograban creciente espacio e institucionalización a través de la orientación de los recién arribados o reingresados José Luis Romero y Gino Germani. Portando una explícita vocación interdisciplinaria, ellos introdujeron categorías, formas de análisis y métodos de trabajo

rigurosos e innovadores, que buscaron reemplazar lo que predominaba en muchos abordajes de la realidad argentina: positivismo, ensayismo e intuicionismo. En el marco de una estrategia explícitamente desperonizadora, no pocos de estos esfuerzos heurísticos, teóricos y epistemológicos se pusieron en función de la tarea de explicar (y condenar) al peronismo, como una condición para lograr extirparlo definitivamente. En ese entonces, interrogarse por el peronismo era hacerlo, esencialmente, por la sociedad y la política argentina toda.

Para 1966, Murmis y Portantiero ya eran dos graduados de aquella facultad: el primero, de la carrera de Filosofía; el segundo, de Sociología. Ambos, con un perfil politizado y crítico de la neutralidad científicista, término este último con el que en la época se solía impugnar los objetivos de los maestros de las disciplinas, quienes, por otra parte, también eran discutidos por su adscripción democrático liberal (recusada como una tradición limitada). Por cierto, desde fines de los años cincuenta, Murmis, dentro de aquella facultad, había colaborado con Germani en la creación de la carrera de Sociología (y de su departamento), y con Romero en la constitución de la cátedra y el Centro de Estudios de Historia Social, para luego emprender estudios de doctorado en Sociología en la Universidad de California, Berkeley. A su vuelta, se había convertido en un renovador de la estratégica cátedra de Sociología Sistemática y, desde 1966, en uno de los impulsores —junto a Juan Carlos Marín, Silvia Sigal y otros— del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), del que fue su primer director entre 1967-1975. El CICSO, en el que Portantiero también realizaría algunas actividades, surgió como un ámbito generador de investigaciones acerca de la estructura de clases y los conflictos sociales, elaboradas a partir de una perspectiva marxista, con el fin de superar la orientación estructural funcionalista recibida en la carrera fundada por Germani.

Toda esta herencia intelectual impregnaría las páginas de

Estudios... Sin embargo, la exacta coyuntura política y académica en la que la obra fue elaborada y escrita se hallaba signada por la adversidad. Promediaba la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Por aquella época, debajo de la aparente solidez del estado burocrático autoritario que habían intentado instaurar los militares y sectores del *establishment* —que buscaba imponer, al mismo tiempo, la “normalización” económica requerida por el gran empresariado y un disciplinamiento global de la sociedad en clave contrainsurgente—, fermentaban las tendencias que conducirían al acrecentamiento de la conflictividad social y de la radicalización ideológico política. Como parte de su orientación autoritaria, el gobierno de Onganía había dispuesto la intervención de las universidades públicas, lo que en julio de 1966 derivó en la “noche de los bastones largos”. En esa oportunidad, centenares de docentes, graduados y estudiantes fueron apaleados y desalojados de algunas facultades de la UBA, lo que inició un ciclo de cercenamiento de la autonomía universitaria y de hostigamiento al pensamiento crítico. La hiperpoliticizada Facultad de Filosofía y Letras, y en particular la carrera de Sociología, fueron unidades académicas muy afectadas por esas medidas.

Como resultado de ello, se produjo una emigración de investigadores hacia el exterior, pero también hacia ámbitos privados nacionales, algunos de los cuales eran preexistentes al golpe. El más importante de ellos fue el Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), que se había configurado, desde su fundación en 1958, en un verdadero ente propulsor y renovador de la ciencia social, el arte y la cultura. Entre otros espacios, allí se había creado, también con la dirección de Germani, el Centro de Sociología Comparada. Tras su partida a Harvard, dicha entidad se convirtió en 1967 en el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), un espacio aglutinante de estudiosos interesados en el escrutamiento de las estructuras y los cambios sociales, que continuó editando la prestigiosa *Revista La-*

tinoamericana de Sociología (bajo la supervisión de Torcuato S. Di Tella y Eliseo Verón), varios libros y una colección de *papers*. En el CIS, cuyo primer director fue Jorge García Bouza, se desempeñaba como investigador exclusivo Darío Cantón, dedicado en ese entonces a un sondeo, desde la sociología política, de los procesos electorales y los comportamientos parlamentarios argentinos. Fueron Cantón y García Bouza los que ayudaron a Murmis y a Portantiero (quienes también desarrollarían en el CIS tareas de investigación y docencia) a encontrar allí las condiciones para desarrollar un plan de trabajo que tenía un ambicioso pero aún poco definido propósito: indagar, desde una perspectiva histórico sociológica, en la génesis del peronismo, elaborando, para ello, un ajuste de cuentas con las visiones existentes (particularmente, con la de Germani). Murmis fue el inspirador del proyecto y el que invitó a Portantiero a colaborar en éste.

El primer resultado al que arribaron ambos intelectuales fue un escrito de unas cuarenta páginas, publicado en 1968 como Documento de Trabajo del CIS N° 49, con el título “Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940)”. En abril de 1969 —un mes antes de que el regreso de la protesta proletaria y la radicalización popular eclosionaran definitivamente con el estallido del Cordobazo— fue editado, en el N° 57 de la misma serie, el segundo y más extenso producto de ese trabajo en colaboración: “El movimiento obrero en los orígenes del peronismo”. Finalmente, surgió la idea de compilar ambos textos autónomos y publicarlos, sin cambio alguno, en un libro de la colección “Sociología y política” de Siglo XXI, que estaba configurándose en aquellos años en una editorial clave en el campo de las ciencias sociales y del pensamiento de izquierda en Hispanoamérica. Así, en diciembre de 1971, apareció lo que constituiría la primera de las múltiples ediciones de *Estudios...*

2

El texto no fue un producto exclusivamente académico, a pesar de que cumpliera con todos los requisitos de la escritura propia de ese ámbito y de que, con expresa objetividad, buscara capturar la racionalidad en las acciones de los sujetos colectivos analizados. Detrás de una arquitectura expositiva cuidada y prudente, en la obra puede descubrirse una dimensión política, tanto en el momento de la elaboración de las preguntas e inquietudes que organizaron sus páginas como en el de su recepción por parte de los lectores. Ese carácter político del libro respondía a razones bastante evidentes: se trataba de una reflexión sobre asuntos históricos de candente actualidad, realizada por dos intelectuales moldeados en la militancia. Sus trayectorias revelaban una rica experiencia en el campo de la izquierda. Murmis, desde sus épocas estudiantiles en la segunda mitad de los años cincuenta, había actuado en la juventud del Partido Socialista. Igual que Marín y Ernesto Laclau (entre otros miembros de la Facultad de Filosofía y Letras), se había ubicado en el sector de izquierda del PS y, en ese proceso, había establecido relación con J. L. Romero, el historiador social que no sólo ocuparía cargos clave en la UBA y en dicha facultad (como rector y decano), sino que se convertiría en una figura emblemática para los grupos más críticos pertenecientes al viejo partido fundado por Juan B. Justo.

Aún más activa y pública había sido la intervención política de Portantiero. Miembro de la juventud del Partido Comunista desde mediados de los años cincuenta, a fines de esa década ya era uno de los intelectuales reconocidos de la organización, y participaba en la redacción de la revista partidaria *Cuadernos de cultura*. Durante esa década —y a partir de los emprendimientos teóricos y editoriales impulsados por Héctor P. Agosti— se había ido produciendo su contacto con los recién traducidos escritos de la cárcel del pensador y diri-

gente comunista italiano Antonio Gramsci, que tanta incidencia tuvo en su derrotero posterior y que impregnaría algunos de los planteos de *Estudios...* En 1963 sería expulsado del PC, junto con un puñado de intelectuales y estudiantes, por sus posiciones renovadoras heterodoxas, opuestas a las del codovillismo dirigente. Ese grupo escindido sería el que hasta fines de 1965 editaría *Pasado y Presente* [primera etapa], la ya mítica revista cordobesa de ideología y cultura orientada por uno de los más firmes representantes del gramscismo argentino, José Aricó. Todo se enmarcaba en la crisis que el PC venía sufriendo en el campo cultural y juvenil, como resultado del impacto ejercido por los nuevos fenómenos de la realidad mundial (revolución cubana, conflicto chino-soviético), en las nuevas generaciones partidarias; las mismas que en 1964 protagonizaron otra ruptura, la de los creadores de la revista *La Rosa Blindada*. Durante el gobierno de Illia, mientras decantaba, por el momento, ese proceso de desgranamiento comunista, Portantiero animaría una de las tantas y efímeras agrupaciones de la nueva izquierda y algunas publicaciones que la caracterizaron (como las revistas *Táctica* y *Nueva política*). Si bien al momento de emprender *Estudios...* Portantiero ya había concluido con esas experiencias, las preocupaciones que lo habían caracterizado seguirían perdurando y constituyendo un eco en sus páginas.

Esos motivos y urgencias eran los que recorrían el universo de toda la nueva izquierda. En ella se advertía una agenda configurada por una serie de fenómenos y diagnósticos de diverso orden: la crisis crónica que se divisaba en el capitalismo argentino, tanto en sus formas de acumulación económica como en sus modos de articulación social y de representación política; la evidente persistencia del peronismo como identidad fundamental de las clases populares (a pesar de todos los ensayos de represión e integración formulados desde el poder), así como la creciente seducción que ese movimiento

ejercía en los sectores medios; la extensión de la gravitación cultural de las izquierdas, corrientes que, al mismo tiempo, advertían el mantenimiento de su divorcio con los componentes mayoritarios de la clase trabajadora; la progresiva extensión continental de las guerrillas castroguerrillas. De modo más específico, no hay que soslayar en este listado el peso de dos influencias teóricas que iban ganando cada vez más espacio en aquellos años: el marxismo estructural (propagado a partir de las inmediatas traducciones de las obras de Louis Althusser y Nicos Poulantzas) y el pensamiento abierto, iconoclasta y más historicista de Gramsci. Para los que provenían del PC, este último operó como uno de los estímulos para intentar romper con los toscos mecanicismos de la doctrina estalinista.

Que muchas de estas temáticas, perspectivas analíticas y categorías conceptuales propias de la nueva izquierda estuvieron presentes a la hora de realizar *Estudios...* puede entreverse en algunas evidencias. Detrás del examen de las relaciones de clase que permitieron el proceso de industrialización en la Argentina de los años treinta, se intenta realizar una genealogía del carácter retardatario y frágil de la burguesía nacional autóctona. En la indagación acerca del movimiento obrero en los años treinta y cuarenta hay una expresa voluntad por encontrar la racionalidad en la emergencia del peronismo, tratando de superar las visiones tanto adversas como favorables a dicho fenómeno. Esto implicaba revisar el cerrado antiperonismo de gran parte de la clase política, la intelectualidad y la izquierda tradicional, pero también superar la posición apologética que del movimiento irrumpido en 1945 tenía otro sector. Nos referimos al heterogéneo espacio ensayístico nacional populista, acepción en la que puede englobarse a representantes del revisionismo histórico, del nacionalismo popular revolucionario, del peronismo de izquierda y de la llamada izquierda nacional (Arturo Jauretche, Raúl

Scalabrini Ortiz, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós, Eduardo Astesano, Alberto Belloni, Jorge Abelardo Ramos, entre muchos otros), cuya producción ya había alcanzado una enorme difusión para los años sesenta. Finalmente, en ambos ensayos se observa tanto el influjo de un marxismo estructural —orientado al estudio de las posiciones objetivas de los sujetos sociales—, como un interés por reproducir la capacidad analítica para comprender procesos históricos concretos que era propia del enfoque de Gramsci. Hay en ellos un vocabulario que abreva, una y otra vez, en la cantera del marxista italiano, especialmente en el momento en que se identifica, para los años treinta, el “control hegemónico” que ciertas fracciones ejercieron dentro de una “alianza de clases” propietarias y en el modo que se constituyó un “bloque de poder” para el impulso de determinadas políticas de “ampliación del Estado”; al mismo tiempo, también se advierte esa misma impronta en el modo en que se intentaba redefinir el concepto de “movimiento nacional popular”.

3

El primero de los ensayos del libro, “Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940)”, significó un cuestionamiento a las concepciones hasta entonces vigentes respecto de aquella crucial y hasta ese momento poco (o mal) explorada década; más específicamente, de los problemas que estuvieron detrás de los principales fenómenos que la recorrieron: el verdadero significado de la industrialización por sustitución de importaciones; el papel que las distintas fracciones sociales dominantes y los diferentes partidos políticos cumplieron en dicho proceso y el lugar que le cupo al Estado en aquél. Hasta el momento de elaboración de este escrito, el desarrollo industrial ocurrido entre la crisis de 1930 y la segunda guerra mundial había sido parcialmente cuantificado en una

obra de Alejandro Bunge (1940), pero sólo había conocido una descripción específica a través de la pionera obra del ingeniero Dorfman (1942) y a partir de los textos que procedían del propio espacio de la UIA (Guerrero, 1944), mientras comenzaba a ser problematizado por algunos economistas y sociólogos del ITDT (como Javier Villanueva, Carlos Díaz Alejandro, Jorge Katz, David Félix y Ruth Sautu). También estaba la producción de Milcíades Peña, referida más adelante. En términos globales, los académicos apenas habían incursionado en el ciclo 1930-1943, destacándose sólo un par de trabajos que describían y esbozaban algunos análisis sobre la historia socio-política de aquellos años (Ciria, 1964; Halperin Donghi, 1964). Lo que sí existía era un extendido sentido común, implantado por las corrientes nacional populistas, que presentaban a ese período como un regreso de esa vieja dominación de la elite terrateniente y el imperialismo inglés que el país supuestamente ya había experimentado hasta la llegada del yrigoyenismo al poder. Al mismo tiempo, si aquella “Década Infame” había sido vista por esas tendencias como una etapa de plena restauración oligárquica y colonial, para Germani había tenido también un carácter obstaculizador en el proceso de modernización política del país. En efecto, según este último sociólogo, el período 1930-1943, con su cuestionado régimen político y sus distorsiones a la participación popular, constituía una regresión frente a la “democracia representativa con participación ampliada” propia de la etapa radical. Así, en estas dos interpretaciones portadoras de una carga valorativa negativa hacia aquellos años, quedaban vedados o incomprendidos los núcleos problemáticos antes enunciados: industrialización, recomposición de la clase dominante, cambios en la función del Estado.

Por otra parte, aquellas visiones habían contribuido a configurar un “modelo clásico” acerca de la clase dominante argentina, que la entendían como escindida en dos grupos con intereses orgánicamente contradictorios: un sector terrate-

niente poderoso, arcaico, antiindustrial y cautivo de sus beneficios en la tierra; y otro industrial, más débil, subordinado e instrumento de los auténticos valores “nacionales” o “modernos”. Según este análisis, fue la pugna entre ambas alas la que caracterizó la evolución del país desde inicios del siglo XX. Y fue un Estado sirviente de los intereses rurales el garante del mantenimiento del modelo agroexportador y de la postergación del desarrollo industrial. La mayor parte de las argumentaciones sobre el tema hasta ese momento orbitaban en torno a esos planteos convencionales. Ni siquiera los dos más sólidos y contemporáneos aportes académicos al estudio de la evolución histórica global de la economía argentina, ponían en jaque la idea de identidades claramente diferenciadas entre sectores agrarios e industriales (Ferrer, 1963; Di Tella-Zymelman, 1967).

Sin embargo, Murmis y Portantiero partieron de formular una paradoja que resultaba incomprensible en aquel modelo: la mayor expansión manufacturera en la Argentina, sostenían, se produjo en la década de 1930, la misma década que había sido definida como de restauración de los sectores económico sociales predominantes antes del período radical y en la que se suponía que existía un Estado al servicio de los intereses terratenientes y del imperialismo inglés. Para resolver este dilema, los autores empezaron por contextualizar el período como de quiebre objetivo del modelo de crecimiento hacia fuera, producto de la crisis y la gran depresión económica mundial iniciada en 1929. Adelantaron aquí varias orientaciones temáticas que fueron posteriormente profundizadas por otros autores (Fodor-O’Connell, 1973; O’Connell, 1984). Esta fractura exigía la puesta en práctica de dos estrategias, que fueron puntualmente examinadas en *Estudios...* La primera de ellas fue la de garantizar la venta de las carnes argentinas, especialmente las enfriadas. Su resultado: el acuerdo bilateral con Gran Bretaña, llamado Pacto Roca-Runciman. Según Murmis y

Portantiero, este convenio, al tiempo que significó amplias concesiones para las importaciones manufactureras británicas, aseguró al sector de los ganaderos invernadores argentinos la conservación del mercado de exportación hacia aquel país, permitiéndoles sobreponerse, en cierta medida, a la crisis. Matizando este planteo, recientemente se hizo hincapié en que los beneficios de los grandes invernadores no dejaron de caer sustancialmente durante los años anteriores y posteriores a dicho pacto (Hora, 2002). Por otro lado, *Estudios...* también caracterizó a este último como ampliamente desfavorable para el sector de los ganaderos criadores (agrupados en la CARBAP), interesados no en un acuerdo bilateral con el Reino Unido, sino en la apertura a un comercio multilateral que ampliase las perspectivas para su producto, la carne congelada. Según esta visión, no fue sino la fracción invernadora, que ya se hallaba con el dominio de la Sociedad Rural Argentina, la que controló el poder del Estado durante aquellos años, impuso la salida bilateral y, en función del mantenimiento del sistema económico en su conjunto, impulsó la política industrialista.

Esta segunda estrategia, expresada en el Plan de Reestructuración Económica promovido por el ministro Federico Pinedo entre 1933-1935, significó el fomento a una industria local liviana y basada en un crecimiento de naturaleza extensiva, es decir, por masiva incorporación de mano de obra antes que por inversión de capital. Para ello, según los autores, resultaron decisivas las políticas públicas que impulsaron la ampliación de algunas potestades del Estado. La explicación que en el texto se encontró para la adopción de estas políticas intervencionistas fue algo general: en pos de mantener el funcionamiento global de la economía, puntualmente el equilibrio de su balanza de pagos, se hacía necesario reducir las importaciones en la misma medida en que la depresión mundial había obligado a reducir las exportaciones nacionales. Eso condujo a los invernadores a estructurar una alianza

de clases con los industriales, en la que los primeros retenían el control hegemónico y conformaban un nuevo bloque de poder, lo que explicaría ciertas y coyunturales definiciones comunes adoptadas por la SRA y la UIA. Este frente social se confrontó con otro, defensivo, motorizado por los criadores —hostiles a toda política industrialista y proteccionista, en aras de ampliar las perspectivas comerciales para sus productos— y por los sectores medios favorables a políticas librecambistas. Su traducción política: las posiciones coincidentes levantadas por la CARBAP, la UCR y el PDP de Lisandro de la Torre.

Varios de los planteos de los autores tuvieron un antecedente y una inspiración innegable en los ensayos que hasta su temprana muerte ocurrida en 1965 dejó Milcíades Peña, especialmente en sus revistas *Estrategia* y *Fichas de investigación económica y social*. Sus libros, con los que llegaría al conocimiento del gran público, fueron publicados póstumamente; los que estuvieron abocados a las cuestiones de la industrialización y la clase dominante en la primera mitad del siglo XX, aparecieron luego de *Estudios...* (Peña, 1973, 1974). Pero la trayectoria de este intelectual marxista, y sus escritos referidos a los temas antes analizados, eran bien conocidos por Murmis y Portantiero. Especialmente por este último, quien, cuando aún pertenecía a las filas del PC, había polemizado con Peña acerca del carácter de la revolución y el papel de los sujetos sociales en ésta. Desde los años cincuenta —profundizando ideas de la corriente trotskista orientada por Nahuel Moreno en la que estaba encuadrado—, Peña se había constituido en uno de los estudiosos más originales de la formación, evolución y estructura de la clase dominante argentina, y, más específicamente, en un impugnador de la idea de una burguesía dividida por una conflictividad esencial entre sectores agrarios e industriales. Para este acérrimo adversario de las interpretaciones historiográficas tanto liberales como

nacional populistas, había existido desde siempre una unidad y complementariedad de intereses entre ambos grupos burgueses, una suerte de fusión.

Murmis y Portantiero se emparentaron con esta pionera concepción, en lo que hacía a la ausencia de conflictos orgánicos entre propietarios del agro y la industria. Pero se distanciaron de Peña en la idea de fusión. Ellos entendieron que el proceso de industrialización no fue indiscutido (aunque sí fue el más progresivo, pues los que se opusieron lo hicieron por su carácter avanzado y no por su alcance moderado) y que no todos los sectores rurales participaron del acuerdo con los industriales, sino sólo su fracción más poderosa. Es decir, allí donde Peña vio a una clase dominante homogeneizada en un proyecto de “caricatura” de industrialización o de “psdeudoindustrialización”, Murmis y Portantiero encontraron a una clase propietaria escindida transversalmente en dos alianzas de clases: una a favor de una industrialización limitada; otra en contra de cualquiera de ellas. Donde el intelectual trotskista encontró a una burguesía dividida en dos alas separadas por fronteras más bien tenues, aquellos autores hallaron a una alianza entre dos componentes burgueses diferenciados, coyunturalmente unidos por la comunidad de sus intereses y ordenados en torno al control hegemónico de uno de ellos.

Con posterioridad a la aparición de *Estudios...*, varios trabajos continuaron iluminando cuestiones a las que globalmente aludía este libro. Durante la segunda mitad de los setenta y los ochenta, la tesis de Jorge F. Sabato sobre el surgimiento de la clase dominante en la Argentina moderna volvió a recordar que no debía asociarse a esa clase con una oligarquía terrateniente irracional y precapitalista, pues, para el autor, se trató de un actor basado en un comportamiento racional y dotado de una lógica comercial especulativa, adaptados al particular capitalismo agrario vernáculo (Sabato, 1988). Si bien Sabato se ocupaba de un período anterior al abordado por Murmis y

Portantiero, confirmaba, retrospectivamente, que lejos de verificarse un antagonismo estructural entre intereses agrarios e industriales, la clase dominante moderna ya había emergido a fines del siglo XIX como un solo actor con intereses diversificados y multiimplantado en la tierra, la manufactura, el comercio y las finanzas, intentando aprovechar su disponibilidad de capital líquido para ganar con las oportunidades de cada coyuntura. Era, por cierto, una posición que retomaba en buena medida la perspectiva de Peña, pues antes que hacer hincapié en la sectorización interna de dicha burguesía, sólo reconocía una estratificación pero no por rama de actividad. Otro tanto ocurrió con los estudios que un discípulo intelectual de Peña, Jorge Schvarzer, emprendió desde los años sesenta acerca de la historia de la industria y de su empresariado en la Argentina del siglo XX. Allí se postuló el carácter atrasado y dislocado del desarrollo manufacturero, dada su dependencia de los intereses terratenientes y del capital extranjero (Schvarzer, 1996). Desde una posición favorable al peronismo, esto también se planteó en un libro de Eduardo Jorge (1971). Por otra parte, discutiendo, implícitamente, con el diagnóstico de *Estudios...* que ubicaba el despegue de la industria durante la restauración conservadora, Villanueva (1972) vino a replantear esos orígenes, situándolos en los años veinte; esto introducía la novedad interpretativa de identificar dicho proceso industrial como más compatible con una economía abierta y agroexportadora de lo que se había pensado.

4

La segunda parte de *Estudios...* es la que cobraría aún más trascendencia. En efecto, “El movimiento obrero en los orígenes del peronismo”, además de ser el escrito cuyo título guardaba mayor cercanía con el del libro que lo compilaba, fue el que alcanzó mayor impacto en la historiografía y socio-

logía contemporáneas y en el propio campo político. Después de la versión consagrada de Germani, se trató de uno de los primeros intentos sistemáticos hechos desde la producción académica en elaborar una reinterpretación más sociológica y menos ideológica del surgimiento del peronismo. Para el momento en que esta tarea fue encarada se llevaba más de una década de áspera reflexión en el ensayo y la literatura políticos. Ya se había desarrollado una camada de intelectuales y ensayistas (los hermanos Viñas, Juan José Sebrelli, Oscar Masotta, entre muchos otros) que habían esbozado un cuestionamiento al sentido común antiperonista. La preocupación, incluso, no era nueva en los autores: desde *Táctica*, Portantiero sostenía en 1964 que era la incompreensión absoluta del peronismo lo que ocasionaba la imposibilidad de la izquierda de insertarse en la clase obrera, argumento que retomaría en diciembre de 1965 en *Nueva política*. Precisamente, como prueba del modo insistente en que el tema ocupaba una y otra vez el centro del debate público de aquella época, hacia fines de 1967, muy poco antes de la elaboración de *Estudios...*, se publicaba y ganaba amplia circulación *La naturaleza del peronismo*, obra colectiva en la que se recogía medio centenar de intervenciones provenientes de un arco extenso de intelectuales, políticos, sindicalistas y personalidades diversas (Fayt, 1967). La obra de Murmis y Portantiero, pues, vino a intervenir en una polémica global y de creciente interés, pero apelando a una lógica argumentativa y a una tecnología retórica de la ciencia social.

Para abrirse paso con sus hipótesis, los autores, como en la primera parte del libro, sometieron a crítica a las interpretaciones vigentes. La que mereció un tratamiento especial fue la de Germani, que había ganado consenso en los ámbitos académicos y en ciertos niveles del discurso público, fundamentalmente a partir de la publicación del artículo “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”

(1956) y del libro que compiló a ése y a otros trabajos, titulado *Política y sociedad en una época de transición* (1962).

El investigador italiano, tan marcado por la experiencia fascista de la que había sido víctima, presentaba a una sociedad argentina alterada por un corte abrupto entre una vieja y una nueva clase obrera, que se había producido a partir de los años treinta, mientras se desplegaba la rápida industrialización sustitutiva. La división se expresaba tanto en las orientaciones como en las condiciones objetivas de los trabajadores. El viejo sector aparecía, a los ojos de este autor, como naturalmente inclinado a ideologías de clase; mayoritariamente descendiente de una inmigración extranjera, portaba un carácter autónomo, poseía una extensa tradición político sindical y tenía una relación de larga data con el mundo urbano y la producción industrial. En cambio, los nuevos trabajadores, provenientes de una migración interna desde las provincias rurales, se mostraban carentes de aquellas experiencias. Contrariando el modelo clásico de actitudes obreras, aparecían condicionados por la inmediatez de sus reclamos, portando valores de heteronomía y adoptando una conciencia de movilidad antes que una de clase. Por esas razones, para Germani estos contingentes laborales recientemente desplazados habían sido esquivos a las organizaciones de clase y se habían convertido en masa en disponibilidad para el ejercicio de proyectos autoritarios y demagógicos, como el que practicaría Perón desde su llegada al gobierno de facto surgido en 1943. Según el autor, el movimiento nacional popular articulado alrededor del liderazgo de este caudillo carismático y paternalista constituyó un espécimen propio en la tardía transición de una sociedad tradicional a otra moderna e industrial que estaba experimentando el país: era un tipo anómalo de movilización e integración de alienadas masas populares a la vida política, que oficiaba de canal sustituto y bizarro ante el fracaso de las instituciones, partidos y sindi-

catos existentes para alcanzar tal objetivo. Los nuevos trabajadores pudieron satisfacer importantes necesidades materiales y subjetivas —derechos reconocidos, adquisición de un principio de identidad, efectiva participación en la esfera política—, pero a costa de su subordinación y de su complicidad con la construcción de un régimen totalitario y hostil a la democracia liberal representativa.

Desde principios de los años sesenta, Torcuato S. Di Tella, desde su doble pertenencia al Instituto de Sociología/U-BA y al ITDT, continuó con muchos de estos planteos para explicar los orígenes del peronismo. También entendió a éste como un fenómeno de integración política de masas obreras disponibles y heterónomas en el marco de una sociedad en proceso de modernización, pero hizo hincapié en el análisis de las características de la elite transformista y anómala (conformada por sectores militares y empresariales) que había estado dispuesta a encarar la movilización populista de las masas. En todos sus trabajos (incluido el voluminoso libro referido al tema de reciente publicación), Di Tella nunca dejó de señalar el carácter mayoritariamente refractario de las viejas representaciones sindicales respecto del peronismo (Di Tella, 1964, 1988, 2003). Asimismo, durante la década del sesenta, las elaboraciones germanianas tuvieron un correlato con las investigaciones sociológicas de Alain Touraine, Daniel Pécaud y Octavio Ianni, entre otros, referidas al proletariado brasileño y a su vínculo con el varguismo. Ellos también encontraron una estrecha relación causal entre la heterogeneidad de la clase trabajadora y la germinación de dicho movimiento populista, y realizaron observaciones muy agudas sobre la heteronomía obrera.

En verdad, algunas de las clásicas historias del movimiento obrero argentino escritas por los militantes gremiales enrolados en el campo más firmemente antiperonista, sin contar con el refinado sustento empírico ni la densidad teórica de un Ger-

mani, ya habían prefigurado la idea de la ruptura y el corte social, pues descifraban a 1945 como un cataclismo inesperado, como una derrota de las tradicionales fuerzas representativas de los trabajadores, en manos de masas laborales descarriadas, inexpertas y clientelizadas por un coronel demagogo (Oddone, 1949). Precisamente, ésa había sido la lectura oficial del PS (Ghioldi, 1946). La visión del PC no se había diferenciado mucho de este planteo, no sólo durante aquella misma coyuntura histórica, sino también mucho tiempo después de ella (Codovilla, 1945; Marianetti, 1964).

En *Estudios...* se logró identificar los puntos de convergencia entre las concepciones antes expuestas, provenientes de la sociología científica y del arco militante socialista comunista, que asociaban los orígenes y la evolución del peronismo a la existencia de obreros recientes, súbitamente arrancados de su pasividad. Pero, además, se advirtió el modo en que esta idea era reciclada en las versiones nacional populistas, a partir de una inversión en la carga valorativa. Según estos míticos relatos, también fueron los proletarios noveles los cimientos sociales del peronismo emergente y los que pudieron encarnar las potencialidades transformadoras que éste había traído; todo esto, merced a la incontaminación que esos sectores, beneficiosamente inmaduros, tuvieron del espíritu burocrático y conservador que afectó a las antiguas representaciones de los trabajadores (Ramos, 1957; Belloni, 1960).

Murmis y Portantiero no vinieron a negar la existencia de un cambio en la composición social de la clase obrera desde los años treinta, ni a ignorar el creciente peso que iban adquiriendo los nuevos actores del mercado laboral industrial. Lo que hicieron fue desarmar las argumentaciones que se habían construido acerca de la relación entre esos nuevos sectores y la gestación del populismo. El punto fuerte del planteo estuvo, sin duda, en relativizar la importancia crucial y unívoca que se había otorgado a esa vinculación y en focali-

zar la mirada sobre los comportamientos del movimiento obrero preperonista. De este modo, los autores se propusieron, otra vez, replantear la década de 1930, en especial, lo que hacía a los resultados sociales del crecimiento de la industrialización sustitutiva. Dicho proceso fue entendido como una intensa explotación laboral, producto de una acumulación capitalista sin políticas públicas de redistribución social, que dejó un monto creciente de reivindicaciones obreras insatisfechas.

Desde el punto de vista de la historiografía dedicada al mundo de los trabajadores, *Estudios...* significó un aporte indudable. Incidió, decisivamente, en crear consenso para una reformulación global en el análisis de la evolución y las características del movimiento obrero entre 1930-1943/45, una indagación que había quedado subestimada o desnaturalizada en las interpretaciones vigentes. En el último cuarto de siglo, toda la vasta y consistente producción académica, hecha por una serie de historiadores y sociólogos (tanto nacionales como extranjeros), que vino a reconsiderar esa temática, en ningún caso pudo dejar de considerar a *Estudios...* como un punto de referencia ineludible. Las problemáticas que habían sido adelantadas en el texto fueron profundizadas, replanteadas o discutidas, pero nunca ignoradas, como puede advertirse en las obras de Juan Carlos Torre (1988, 1989, 1990), Hugo del Campo (1983), Hiroschi Matsushita (1983), Joel Horowitz (1984, 1988, 1990), Isidoro Cheresky (1984), David Tamarin (1985), Julio Godio (1989) y Roberto Korzeniewicz (1993), entre otras. Si bien el relato de Murmis y Portantiero privilegia un enfoque analítico antes que histórico, de su recorrido pueden extraerse los rasgos esenciales de la evolución del movimiento obrero preperonista. La apuesta fue procurar un entrelazamiento explicativo entre las condiciones socioeconómicas, los niveles de conflictividad y organización y las orientaciones ideológicas de los trabajadores. Sin duda, la

obra carece aquí de un sondeo de fuentes provenientes de las bases obreras. Se apoya, en cambio, en una, hasta ese momento, poca utilizada documentación estadística del Dirección Nacional del Trabajo y de otros organismos públicos.

En el texto se observa la delimitación de un primer período, situado entre 1930 y 1935. Para ese ciclo se señaló a una clase obrera enfrentada a una situación adversa, en la que los altos niveles de desocupación se acompañaban de una caída en el poder adquisitivo de los salarios y un deterioro en las condiciones laborales. Así, dicha etapa se definió por la existencia de una débil organización gremial y por el desarrollo de luchas proletarias escasas, aisladas y defensivas. Otros autores encontrarían luego que esta situación estaría en consonancia con el espíritu neutralista, corporativista y apolítico del *sindicalismo*, la otrora poderosa corriente que, aunque en decadencia, todavía ejercía entonces el dominio de la flamante CGT. Murmis y Portantiero ubicaron el corte durante 1935-1936, cuando la fuerte recuperación de las tasas de empleo industrial y el mantenimiento de las precarias condiciones laborales y salariales fueron vistos como generadores de las posibilidades y las necesidades para una reanimación del conflicto. Hoy está más constatado lo que tácitamente adelantaba *Estudios...*: que el extenso paro de los obreros de la construcción y la huelga general en su apoyo, ocurridos en el tránsito entre aquellos dos años (acontecimientos específicamente investigados por Iñigo Carrera, 2000), inició una década de constantes protestas y de fortalecimiento de la organización gremial. Esta evidencia había quedado ocluida en el anterior análisis sociológico y nacional populista, que tendía a mostrar a un viejo proletariado debilitado, derrotado e impotente para representar al nuevo.

Pero si esto no retrataba a un movimiento obrero inerte tampoco dibujaba a un actor victorioso en sus demandas, pues *Estudios...* también quiso demostrar que hasta 1943 esas

luchas —dado que en su mayoría adoptaron el carácter de huelgas transigidas—, habían dejado muchos motivos para la insatisfacción sindical y la prosecución de la búsqueda de beneficios concretos, que recién serían alcanzados a partir de la inédita política laboral de Perón. Años después, algunos investigadores retomaron estos temas, divisando ya desde la década del 30 una relativamente exitosa política de intervencionismo social por parte del Estado (a través del DNT), en pos de intermediar en el conflicto obrero-patronal (Gaudio-Pilone, 1983, 1984). Por cierto, el consenso hoy aparece volcado a favor de estos planteos, que tienden a diluir la novedad de las políticas socio laborales adoptadas a partir de 1943-1945.

Por otra parte, Murmis y Portantiero también dibujaron la alteración de las orientaciones políticas dominantes en el movimiento obrero. Su libro sugiere una imagen que varios de los textos más dedicados al análisis de la estructura y evolución del gremialismo (como los de del Campo, Matsushita, Horowitz y Tamarin) confirmarían luego con precisión y profundidad. En ella se divisa a los socialistas ejerciendo la hegemonía sindical desde mediados de los años treinta, cuando pasan a controlar la central obrera y las principales organizaciones en las ramas del transporte y los servicios (ferroviarios, empleados de comercio, municipales); pero también se observa cómo éstos debieron cada vez más, disputar el terreno a los comunistas, quienes tuvieron un notable crecimiento en el sector industrial (Metalurgia, Madera, Construcción, Carne, Textil). Dado que en los gremios de estos últimos rubros comenzaba a incidir la presencia de los nuevos obreros, implícitamente quedaban así recusadas las tesis sociológicas y del nacional populismo que presuponían la imposibilidad de los partidos de clase para insertarse en estos contingentes laborales.

Este redescubrimiento del papel protagónico cumplido por los comunistas ya venía siendo advertido en algunos escritos aún más antiguos, que parecían aún no poder torcer las visiones im-

perantes. Además de ser convenientemente evocado por la literatura oficial del PC (Iscaro, 1958; Peter, 1968) había sido examinado por Celia Durruty. Hasta su inesperado fallecimiento en 1967, esta joven socióloga, vinculada a la experiencia del grupo Pasado y Presente, había acumulado una serie de borradores acerca de los temas aquí analizados, que fueron publicados póstumamente (1969); entre ellos, se destacaba su investigación sobre la FONC, el gremio comunista de la construcción que había logrado un extraordinario desarrollo durante los años 1936-1943. *Estudios...* no vino a explorar puntualmente este crecimiento del PC entre el proletariado fabril, pero sí a ratificarlo y consolidarlo como diagnóstico en su relato general. Habilitó así la posibilidad de una línea de investigación específica sobre el tema. En forma reciente, continuando la senda reabierto por un artículo de Aricó, esta penetración del PC en el movimiento obrero está siendo nuevamente indagada en una serie de trabajos, que buscan las razones de dicha inserción en decisiones estratégicas adoptadas por el partido desde los años veinte y en determinaciones del propio medio ambiente proletario, y que también intentan explicar las causas por las cuales el PC fue derrotado con la emergencia del peronismo (Aricó, 1979; Camarero, 2001, 2002; Lobato, 2002).

Al mismo tiempo, en el texto de Murmis y Portantiero puede advertirse el embrión de otra idea iluminadora: la vigencia de las tradicionales posturas *sindicalistas* no cesó con la hegemonía socialista comunista al frente de la CGT, pues las prácticas y las concepciones que habían dado vida a dichas posturas no sólo pervivieron en una débil organización (la USA, resurgida en 1937) sino que acabaron inficionando las propias filas del espacio socialista e influenciando a no pocos gremialistas independientes. Así, se consolidó un numeroso y experimentado elenco de dirigentes y cuadros medios obreros, independizados del PS o históricamente libres de toda tutela partidaria, que, imbuido del espíritu apolítico, refor-

mista y pragmático del viejo *sindicalismo*, y presionado por las bases de sus sindicatos para obtener reivindicaciones inmediatas y postergadas, fue el puntal organizativo de la CGT N° 1, en 1943, y de la CGT que participara del 17 de octubre de 1945. Frente a este sector, sólo quedó una franja gremial más reducida, conformada por los comunistas y los socialistas más leales a su pertenencia partidaria, que actuó como polo opositor a la empresa laborista peronista. Esta tesis de la continuidad entre *sindicalismo* y peronismo, que con diversos matices aparece demostrada, entre otras, en las obras antes señaladas de Torre y del Campo, fue abonada por la línea interpretativa de *Estudios...*

¿Cómo hizo el texto de Murmis y Portantiero para trazar un puente explicativo entre las orientaciones político ideológicas del movimiento sindical que precedió a Perón y la composición social de la clase obrera? Al pretender demostrar que entre 1943-1945 no se verificó un aumento exponencial de la estructura gremial, buscó quitar apoyatura a la idea de que el fenómeno populista sólo se pudiese comprender a partir de un aluvión de nuevos trabajadores incorporados abruptamente a la vida sindical desde el Estado. Por el contrario, quiso presentar a ese fenómeno como expresión genuina y mayoritaria de un movimiento obrero preexistente. Así, esta “vieja guardia sindical” —término posteriormente popularizado por Torre—, quedó inéditamente rehabilitada y reintroducida como partícipe clave de aquella escena histórica, liberada ya del papel exclusivamente opositor que le habían adjudicado las versiones ortodoxas. Donde la sociología científica tradicional y el nacional populismo habían visto una clara cesura, con la irrupción de multitudinarios actores nuevos que rebasaban a representaciones socio políticas presuntamente agotadas, Murmis y Portantiero advertían una continuidad, en la dirección del proceso, de una parte de los mismos protagonistas, que habían sido capaces de po-

der convocar a los recién llegados al mundo del trabajo. De este modo, toda la dinámica que derivó en el 17 de octubre y en el triunfo electoral de Perón, pasaba a ser categorizada como menos rupturista e imprevisible de lo que se había señalado. Dichos acontecimientos ya no eran pensados como producto de actitudes anómicas y patológicas de sectores laborales inmaduros y carentes de conciencia de clase, que contrariaban su potencial autonomía; por el contrario, eran expuestos como el corolario de una acción y deliberación racional de muchos activistas obreros —habitados a la vida urbana, adaptados a la lógica del trabajo industrial y experimentados en la lucha colectiva—, que heredaban toda una trayectoria de comportamientos gremiales y se mostraba atentos a aprovechar las promesas de mejora social hechas desde el Estado.

Estudios..., entonces, vino a horadar la aguda contraposición entre nueva y vieja clase obrera propia de las miradas dominantes para explicar la gestación del peronismo, avisando que esta alternativa política, en verdad, había logrado encarnar en ambos sectores, según los moldes organizativos de las antiguas representaciones. Con lo cual, si antes se hacía hincapié en la fractura de esa clase, ahora se ponía el acento en su tendencia a la homogeneidad. ¿Cómo fue observada dicha soldadura entre los viejos trabajadores extranjeros, sus descendientes nativos y el nuevo proletariado originario de migraciones internas? A partir de la común experiencia que todos ellos venían sosteniendo ante la explotación industrial. Eso era lo que predisponía a unir a las fracciones detrás de las demandas insatisfechas y, llegado el caso, quedar seducidos, en su mayoría, por la oferta de Perón.

Al mismo tiempo, con objeto de teorizar de una manera más general acerca de la llegada del peronismo, Murmis y Portantiero retomaron la noción de alianza de clases, para informar que la irrupción del fenómeno populista expresaba

una alteración de fuerzas en el interior de aquel acuerdo entre sectores agrarios e industriales estructurado en los años treinta. Es que el progresivo desarrollo manufacturero y las divisiones interpatronales verificadas en esa rama, la creciente movilización de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato estatal-militar, inclinaron la balanza a favor del sector industrial, y ocasionaron el repliegue terrateniente. Según esta sugerente hipótesis, hacia principios de los años cuarenta ya se había consolidado un arco de industriales interesados en un mayor desarrollo del mercado interno (notablemente expandido durante la guerra mundial) y, por ello, mejor predispuestos a considerar la legitimidad de los reclamos obreros. Esto posibilitó una confluencia objetiva entre los empresarios y obreros más proclives a la negociación e intervención del Estado, con el fin de mantener la expansión de ese mercado, avanzando, para ello, en políticas redistributivas. El peronismo emergente es, pues, en esta interpretación, una alianza interclase forjada entre ambos actores para cumplir con dichos objetivos, y no una movilización e integración a la vida política de masas obreras heterónomas por parte de una elite populista.

Es de destacar, por otra parte, que los autores intentaron descifrar las características específicas del peronismo que lo diferenciaron de otras experiencias de regímenes nacional populares, particularmente de otra muy relevante y estudiada, la del varguismo brasileño. Según ellos, esta última sincronizó tres procesos: el de la llegada del nacionalismo popular al poder, el de la industrialización y el del intervencionismo social; así, dada la ausencia de un gran sindicalismo autónomo reformista, el resultado no pudo ser otro que la subordinación inmediata y total del proletariado al Estado populista. En la Argentina, en cambio, la industrialización fue previa y carente de políticas redistributivas; así, la intervención estatal que luego desarrolló el peronismo

operó sobre un fuerte sindicalismo que venía de presentar una tenaz lucha reivindicativa. Es decir, en el caso del varguismo, fue el Estado el que de modo inmediato y directo integró a la clase obrera, sin pasar por la instancia de tener que “estatizar” o disciplinar organizaciones existentes (más bien, creó los sindicatos “desde arriba”). El peronismo, en cambio, expresó un caso distinto. En la Argentina, dado que los sindicatos eran aparatos poderosos ya antes de la llegada del régimen populista, este último debió aceptar la ubicación de aquéllos (y, fugazmente, del partido que habían creado) como mediadores entre los trabajadores y el poder político. De este modo, *Estudios...* (más allá de que algunos de los presupuestos de este planteo fueron cuestionados por posteriores investigaciones), también constituyó un aporte puntual e inicial para una reflexión global de las distintas tipologías de populismos latinoamericanos, un campo de análisis que luego tendría un gran desarrollo en las ciencias sociales del continente.

El aspecto más débil e inconsistente que planteaba la interpretación de Murmis y Portantiero era la subordinación de las dimensiones ideológicas, políticas y culturales que estaban detrás de la emergencia del fenómeno peronista al exclusivo plano del conflicto social y el interés de clase. De manera equívoca o no, la sociología científica tradicional había recorrido la dimensión política del acontecimiento populista, jerarquizando el análisis sobre el carácter de la inédita convocatoria que allí aparecía, la emergencia de una nueva identidad y de valores políticos, las anómalas formas de participación que se creaban y el régimen autoritario de masas que quedaba como producto. Estos aspectos quedaron más desatendidos en *Estudios...* Posteriores investigaciones, a pesar de reconocer la crítica superadora que este libro aportaba frente a la visión primigenia del corte vieja/nueva clase obrera, se propusieron recuperar aquella dimensión política

y completar esos vacíos. Quizás la mayor contribución en ese sentido fue la del sociólogo J. C. Torre, quien rescató varios enfoques de Germani y Touraine. A través de sus distintos escritos, se dirigió a auscultar las peripecias de la autonomía obrera (encarnada por aquella vieja guardia sindical y su Partido Laborista), en el contexto de las transformaciones promovidas por el Estado populista emergente, que acabaría, finalmente, por imponerse en forma autoritaria a aquélla. Donde Murmis y Portantiero sólo vieron movilización obrera e interés de clase, Torre encontró también representación y conciencia políticas heterónomas. El autor logró privilegiar un aspecto diluido en *Estudios...*: el modo en que se conformó una nueva identidad política colectiva, a partir de mecanismos que fueron más allá del interés clasista, pues remitieron a una ambiciosa operación por la cual, en lucha contra el orden excluyente que imperó entre 1930 y 1943, se logró un gesto de reconocimiento que convirtió a los trabajadores en miembros de pleno derecho de la comunidad política nacional.

También hubo un aporte sustancioso en la obra de Daniel James (1990), un inglés formado en la rica tradición de la historiografía y la crítica cultural marxista de ese país, especialmente, la representada por E. P. Thompson y Raymond Williams. Si bien priorizó en su mirada la relación entre clase trabajadora y peronismo luego de 1955 (las épocas de la resistencia pero también de la integración al sistema), dedicó algún espacio a descifrar los novedosos elementos discursivos, simbólicos e ideológicos (la “estructura de sensibilidad”) que permiten entender la ventaja de Perón para captar la adhesión de los trabajadores (nuevos y viejos) a su proyecto político entre 1943-1945. Un proyecto entendido como claramente rupturista con el pasado. Desde un marco teórico disímil, que recurría a ciertas categorías del estructuralismo althusseriano, Ernesto Laclau (1978) ya se había dirigido a un examen

específico de otro registro, el de la interpelación y constitución de identidades políticas, para arribar a la conclusión de que el peronismo debía definirse como un fenómeno de naturaleza esencialmente ideológica. Se completa, así, el análisis del amplio abanico de interpretaciones en el cual puede cotejarse al precursor texto de Murmis y Portantiero.

5

Publicado *Estudios...*, su impacto en el mundo de las ciencias sociales, como se ha visto, fue inmediato y a la vez prolongado, influyendo en todos los debates que allí se dieron acerca de los núcleos temáticos apuntados. Su incidencia en el terreno político, aunque mucho menor, tampoco careció de relevancia, especialmente durante la primera mitad de los años setenta. La lectura que entonces se hizo acerca de esta reinterpretación del surgimiento del peronismo no fue unívoca. Para algunos pudo constituir una empresa de reivindicación de las tradiciones obreras previas a 1945. Muchos otros, en cambio, la entendieron como un proyecto de justificación histórica del movimiento fundado por Perón, que permitía legitimar a las nuevas fuerzas revolucionarias que se engendraban en él a partir del ciclo de movilización popular abierto por el Cordobazo. En verdad, la obra había sido elaborada antes de aquel acontecimiento y no dejaba de precisar ni el reformismo obrero ni la hegemonía burguesa dentro de una alianza policlasista que expresaba el peronismo desde sus inicios. Pero aquella última lectura no parecía descabellada si se advierten las expectativas que Portantiero y los demás impulsores de la segunda etapa de *Pasado y presente*, desarrollada durante 1973, depositaban entonces sobre ciertas expresiones de aquel movimiento político. Eso, en el preciso momento en que el libro ganaba amplia difusión. Por cierto, confirmando el interés que despertaba la problemática, inmediatamente después se pro-

yectó una colección de obras con el mismo título por parte de distintos autores, aunque sólo alcanzó a cobrar cuerpo un volumen más. En él se profundizaron algunas cuestiones contenidas en el primer tomo, como el deterioro de la hegemonía británica sobre la economía argentina de entreguerras y el fracaso de las estrategias militares por dotar de una mayor base la industrialización ocurrida hacia el fin del conflicto bélico (Panaia-Lesser-Skupch, 1973).

La circulación que el texto de Murmis y Portantiero tuvo en esos convulsionados años —que fueron los del retorno y los del derrumbe del justicialismo en el poder, en una coyuntura bien distinta de la de tres décadas atrás, examinada en aquellas páginas—, fue abortada con el golpe militar de 1976. Prohibido y desaparecido de las librerías y bibliotecas públicas, como tantas personas y como tantos libros durante esa etapa de terror y oprobio, con la llegada de la democracia la obra fue reeditada, y volvió a convertirse, durante los últimos veinte años, en un artefacto de consulta recurrente. Pero ahora esta vigencia se centró en los claustros universitarios y los ámbitos de investigación. Es que el debate acerca de los orígenes del peronismo se tornó menos relevante en la opinión pública, quizás más interesada en develar las razones de la perdurabilidad y de la disposición a las mutaciones que esta fuerza política exhibió tras su ciclo inicial de desarrollo.

Los autores no volvieron a considerar los problemas específicos allí tratados. Con el tiempo, y en el marco de otras circunstancias profesionales, académicas y políticas, los intereses temáticos y los abordajes teóricos de ambos intelectuales fueron variando. Murmis profundizaría en sus estudios sobre la estructura social en el campo argentino, las características de la renta agraria y la evolución del terrateniente capitalista pampeano; también incursionaría en análisis referidos a la marginalidad, el desempleo y la pobreza. Las elaboraciones de Portantiero se dirigieron hacia la teoría social, el análisis

político y ocasionales abordajes historiográficos. Sólo en un breve artículo (1979) volvió a reconsiderar las transformaciones sociales y políticas de los años treinta. De este modo, los autores no tuvieron la oportunidad de subsanar u operar sobre las aporías y las debilidades del texto, que dificultaban que pudiera convertirse en una reflexión y reconstrucción aún más global sobre la emergencia del peronismo. Muchos de esos límites respondían al acotado respaldo empírico de las hipótesis propuestas y, de un modo más general, a la inevitable fragilidad de una visión que, al querer privilegiar sólo las determinaciones socioeconómicas y políticas de los fenómenos, apenas pudo incursionar en otros planos del examen histórico y sociológico.

Sin embargo, allí estaban los méritos y aciertos analíticos, metodológicos y teóricos de *Estudios...* El intento de reconstrucción de la acción racional de las clases, las fracciones de clase y los partidos durante coyunturas y tiempos más largos. El modo conciso y eficazmente articulado con el que fueron formuladas concepciones originales y rigurosas sobre problemas histórico concretos, que desbarataron anteriores visiones y establecieron nuevos puntos de partida para el análisis. La utilización de herramientas conceptuales escasamente empleadas hasta ese momento, que aportaron otras formas de indagación. Todo eso explica por qué el texto de Murmis y Portantiero se convirtió en un clásico, de permanente actualidad. A 35 años de su elaboración, volver la mirada sobre este escrito permite observar una de las principales estaciones en el periplo de la sociología histórica y dotarse de uno de los mapas que permitieron avanzar sobre algunos problemas clave de la Argentina contemporánea.

HERNÁN CAMARERO
Febrero de 2004

Bibliografía citada

- Aricó, José (1979), “Los comunistas en los años treinta”, *Controversia*, N° 2-3 (suplemento N° 1), México, diciembre. Luego publicado como “Los comunistas y el movimiento obrero”, *La Ciudad Futura. Revista de Cultura Socialista*, N° 4, marzo de 1987.
- Belloni, Alberto (1960), *Del anarquismo al peronismo. Historia del movimiento obrero argentino*, Buenos Aires, A. Peña Lillo.
- Bunge, Alejandro E. (1940), *Una nueva Argentina*, Buenos Aires, G. Kraft.
- Camarero, Hernán (2001), “El Partido Comunista argentino en el mundo del trabajo, 1925-1943. Reflexiones historiográficas e hipótesis exploratorias”, *Ciclos en la historia, la economía y la sociedad*, XI, 22, 2° semestre.
- (2002), “La experiencia comunista en el mundo de los trabajadores, 1925-1935”, *Prismas. Revista de historia intelectual*, 6, Universidad Nacional de Quilmes.
- Ciria, Alberto (1964), *Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946)*, Buenos Aires, Jorge Álvarez.
- Codovilla, Victorio (1945), *Batir al naziperonismo*, Buenos Aires, Anteo.
- Cheresky, Isidoro (1984), “Sindicatos y fuerzas políticas en la Argentina preperonista (1930-1943)”, González Casanova, Pablo (coord.), *Historia del movimiento obrero en América latina*, vol. 4. México, Siglo XXI, pp. 147-199.
- Del Campo, Hugo (1983), *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires, CLACSO.
- Di Tella, Guido y Manuel Zymelman (1967): *Las etapas del desarrollo económico argentino*. Buenos Aires, Eudeba.
- Di Tella, Torcuato S. (1964), *El sistema político argentino y la clase obrera*, Buenos Aires, Eudeba.
- (1988), *Sociología de los procesos políticos*, Buenos Aires, Eudeba.
- (2003), *Perón y los sindicatos. El inicio de una relación conflictiva*, Buenos Aires, Ariel.
- Dorfman, Adolfo (1942), *Evolución industrial argentina*, Buenos Aires, Losada.
- Durruty, Celia (1969), *Clase obrera y peronismo*, Buenos Aires, Pasado y Presente.
- Fayt, Carlos S. (1967), *La naturaleza del peronismo*, Buenos Aires, Viracocha.
- Ferrer, Aldo (1963), *La economía argentina*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Fodor, Jorge G. y Arturo O’Connell (1973), “La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX”, *Desarrollo Económico*, XIII, 49, abril-junio.
- Gaudio, Ricardo y Jorge Pilone (1983), “El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina, 1935-1943”, en *Desarrollo Económico*, XXIII, 90, julio-septiembre.
- (1984), “Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo, 1935-1943”, *Desarrollo Económico*, XXIV, 94, julio-septiembre.
- Germani, Gino (1956), “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, *Cursos y Conferencias*, N° 272, Buenos Aires.
- (1962), *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós.
- (1973), “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”, *Desarrollo Económico*, XIII, 51, octubre-diciembre.
- Ghioldi, Américo (1946), *Alpargatas y libros en la historia argentina*, Buenos Aires, La Vanguardia.

- Godio, Julio (1989), *El movimiento obrero argentino (1930-1943). Socialismo, comunismo y nacionalismo obrero*, Buenos Aires, Legasa.
- Guerrero, Américo R. (1944), *La industria argentina. Su origen, organización y desarrollo*, Buenos Aires, Establecimiento Plantié.
- Halperin Donghi, Tulio (1964), *Argentina en el callejón*, Montevideo, Arca.
- Hora, Roy (2002), *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno de Argentina Editores.
- Horowitz, Joel (1984), "Ideologías sindicales y políticas estatales en la Argentina, 1930-1943", *Desarrollo Económico*, XXIV, 94, julio-septiembre.
- (1988), "El impacto de las tradiciones sindicales anteriores a 1943 en el peronismo", Torre, Juan Carlos (comp.), *La formación del sindicalismo peronista*, Buenos Aires, Legasa.
- (1990), *Argentine unions, the State & the rise of Peron, 1930-1945*, Berkeley, University of California.
- Iñigo Carrera, Nicolás (2000), *La estrategia de la clase obrera, 1936*, Buenos Aires, La Rosa Blindada-PIMSA.
- Iscaro, Rubens (1958), *Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino*, Buenos Aires, Anteo.
- James, Daniel (1990), *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Jorge, Eduardo F. (1971), *Industria y concentración económica. Desde principios de siglo hasta el peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Korzeniewicz, Roberto P. (1993), "Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 y 1943", *Desarrollo Económico*, XXXIII, 131, octubre-diciembre.
- Laclau, Ernesto (1978), *Política e ideología en la teoría marxista*, Madrid, Siglo XXI.

- Lobato, Mirta Z. (2002), "Rojos. Algunas reflexiones sobre las relaciones entre los comunistas y el mundo del trabajo en la década de 1930", *Prismas. Revista de historia intelectual*, 6, Universidad Nacional de Quilmes.
- Marianetti, Benito (1964), *Argentina, realidad y perspectivas*, Buenos Aires, Platina.
- Matsushita, Hiroshi (1983), *Movimiento obrero argentino, 1930-1945. Sus proyecciones en los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo Veinte.
- O'Connell, Arturo (1984), "La Argentina en la depresión: los problemas de una economía abierta", en *Desarrollo Económico*, XXIII, 92, enero-marzo.
- Oddone, Jacinto (1949), *Gremialismo proletario argentino*, Buenos Aires, La Vanguardia.
- Panaia, Marta, Lesser, Ricardo y Skupch, Pedro (1973), *Estudios sobre los orígenes del peronismo/2*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Peña, Milcíades (1973), *Masas, caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón*, Buenos Aires, Fichas.
- (1973), *La clase dirigente argentina frente al imperialismo*, Buenos Aires, Fichas.
- (1974), *Industria, burguesía industrial y liberación nacional*, Buenos Aires, Fichas.
- Peralta Ramos, Mónica (1972), *Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina (1930-1970)*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Peter, José (1968), *Crónicas proletarias*, Buenos Aires, Esfera.
- Portantiero, Juan Carlos (1979), "Argentina: los años de la crisis" y "Transformación social y crisis de la política", *Controversia*, N° 2-3 (suplemento N° 1), México, diciembre.
- Ramos, Jorge Abelardo (1957), *Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Las masas en nuestra historia*, Buenos Aires, Amerindia.
- Sabato, Jorge F. (1988), *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*, Buenos Aires, CISEA/GEL.

- Schvarzer, Jorge (1996), *La industria que supimos conseguir. Una historia político social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta.
- Tamarin, David (1985), *The Argentine Labor Movement, 1930-1945. A study in the origins of peronism*, Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Torre, Juan Carlos, comp. (1988), *La formación del sindicalismo peronista*, Buenos Aires, Legasa.
- (1989), “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”, *Desarrollo Económico*, XXVIII, 112, febrero-marzo.
- (1990), *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Villanueva, Javier (1972), “El origen de la industrialización argentina”, *Desarrollo Económico*, XII, 47, octubre-diciembre.

Prólogo

Hace ya más de treinta años que los trabajos que forman este libro fueron pensados y escritos y el sentimiento que provoca el releerlos a propósito de su reedición es grato, en tanto queda mostrada su vigencia pese al paso del tiempo. Los textos fueron discutidos, redactados y publicados como documentos de trabajo en el ámbito del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella en cuya fundación tuvo una participación decisiva Gino Germani, una figura consular que sobrevuela muchas de las páginas de este libro.

Cuando decimos que han pasado más de tres décadas, nos remontamos a un tiempo en que las ciencias sociales en todo el continente se abrían a nuevos vientos de discusión y nuestras sociedades entraban, a su vez, en un agitado período de movilización colectiva que en casi todas partes concluyó finalmente en tragedia. Y estos textos, pese a su formato académico, no escapan de ninguna manera a esa marca del tiempo que nos envolvía a cada uno de nosotros. Era la Argentina del general Onganía, del “Cordobazo”, del secuestro y muerte de Aramburu y de los primeros escarceos rotundos de las organizaciones armadas, del fortalecimiento de la vigencia interna del Perón del exilio y de la emergencia de la CGT de los Argentinos. Las universidades habían sido intervenidas en 1966 y muchos profesores habían renunciado a sus cargos como protesta por la represión y la arbitrariedad, algunos se quedaron a resistir hasta ser pronto expulsados, mientras que otros —ya a principios de los setenta— intentaban desde adentro de las facultades recuperar los valores avasallados. En

tanto, la “Revolución Argentina” comenzaba su repliegue frente a la creciente presión de las demandas de democratización política y social.

En ese marco de cambios, antes que todo estallara en muertes y exilios externos e internos, la iniciativa del querido José Aricó, aquel *Pancho* que se había hecho cargo de las ediciones de Siglo XXI que, desde México, había traído a Buenos Aires don Arnaldo Orfila Reynal, nos propuso editar como libro los dos documentos de trabajo originales, agrupados bajo el título de *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Tiempo después, en 1973, como resultado de un seminario —en el que procuramos continuar la tarea de investigación interrumpida por quién sabe qué razones en el Di Tella— y que habíamos organizado en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), baluarte de resistencia intelectual fundado después de la intervención a las universidades, Siglo XXI publicó un segundo tomo de los *Estudios...* en el que distintos autores analizaban otros aspectos de la época del primer peronismo (“El deterioro y fin de la hegemonía británica sobre la economía argentina, 1914-1917”, de Pedro Skupch y “Las estrategias militares frente al proceso de industrialización, 1943-1947”, de Marta Panaia y Ricardo Lesser).

Volver a asomarse a estos textos hoy podría dar lugar a una sensación de preocupación o distanciamiento, frente a algo que uno no quiere ya reconocer como propio. En este caso no nos ha sucedido eso: seguimos creyendo que aquellos, además de ser un sólido punto de referencia para nuestro desarrollo posterior, aún significan una contribución al conocimiento de los procesos que analizan.

¿Qué razones nos permiten pensar en su perdurabilidad?

En primer lugar la actitud con que el texto se acerca a las interpretaciones preexistentes. Quisimos discutir con respeto miradas de matices ideológicos y ámbitos intelectuales muy

diferentes. Este libro convoca tanto a los textos de la sociología universitaria, nacional y extranjera, como a otros más ligados a la preocupación de escritores políticos, muchas veces llamados —con algún matiz peyorativo— ensayistas. La decisión de dialogar y polemizar con ambos tipos de textos fue explícita y se basó en convicciones acerca de la necesidad de construir un conocimiento de lo social capaz de recoger esfuerzos tanto de la vertiente disciplinar como de la política. Creíamos que había que evitar un divorcio entre la sociología llamada científica y otras formas de comprensión de lo social, contribuyendo así a superar los enfrentamientos que habían tenido lugar al iniciarse la institucionalización de la disciplina.

En segundo lugar, ese acercamiento a ambos tipos de enfoques fue desde el comienzo un enfoque crítico, casi desconfiado. Nuestra empresa tuvo un fuerte componente de evaluación de estereotipos que estaban presentes tanto en los temas referentes a la industrialización en la década de 1930, como en los ligados a las características del apoyo obrero al peronismo. Ni grandes terratenientes cerrilmente opuestos a la industria ni medianos y pequeños productores apoyándola. Tampoco aceptábamos la idea de un corte en la clase obrera, con trabajadores nuevos e incautos que adherían al peronismo y otros “viejos” que expresaban la racionalidad.

En tercer lugar, tanto la referencia a textos de variado origen como la puesta en cuestión de estereotipos se hizo sobre la base de un trabajo con fuentes documentales y estadísticas, sin pretender instaurar nuevos criterios de autoridad. Buscamos probar, simplemente, que la realidad social había resultado distinta de lo pensado. En esa prueba, en ese manejo de datos, nos orientó un enfoque conceptual.

Y éste es el cuarto punto que queremos destacar. El marco teórico con el que trabajamos nos llevó a buscar en los procesos analizados la actuación de clases y fracciones de clases,

sus alianzas y enfrentamientos. Ese primer momento, que podríamos llamar estructural, sirvió de base para incursionar en las orientaciones de los sujetos y en los procesos políticos de construcción de hegemonía.

Trabajar de esa forma fue resultado de la confluencia entre la formación marxista que ambos poseíamos y los aportes de la sociología que se practicaba en el Departamento y el Instituto de Sociología, entonces en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la que ambos habíamos egresado.

Fueron —creemos— estos cuatro puntos no sólo fundamentales para la estructuración del texto, sino también para que fuera recibido por tantos estudiantes, docentes e investigadores de aquí y de otros países del continente quienes, a pesar del paso de los años, siguieron considerándolo significativo y útil.

Estamos agradecidos por haber encontrado oídos que querían escuchar. Entre ellos, los de Hernán Camarero, un investigador en quien nos gusta mirar nuestro pasado, que ha preparado la inteligente y generosa introducción de esta reedición. Y, por cierto, muy especialmente debemos saludar, también, la atención de Carlos Díaz y de Siglo Veintiuno Editores Argentina, por su interés en volver a presentar nuestro texto.

MIGUEL MURMIS
JUAN CARLOS PORTANTIERO
Buenos Aires, marzo de 2004

Advertencia

Este tomo incluye dos trabajos, redactados en diferentes épocas, que enfocan aspectos significativos para el análisis de los orígenes del peronismo.

Creemos firmemente que el análisis de un movimiento social de tanta importancia no puede ser el resultado de una suma de enfoques parciales. Ellos, en todo caso, podrán incorporar información útil, pero no se librarán de las limitaciones inherentes a la carencia de una visión de conjunto, que ilumine el fenómeno a analizar como una totalidad estructurada.

El libro no debe ser leído, pues, ni como una historia de los orígenes ni como una visión integradora del peronismo, sino como un intento de plantear y discutir algunas de las condicionantes económicas, sociales y políticas que facilitaron, a comienzos de la década del 40, su surgimiento como alternativa de poder.

Los artículos incluidos en este primer tomo buscan enfocar, desde el punto de vista de las relaciones de clase, las consecuencias sociales del proceso de industrialización abierto, bajo control de las elites conservadoras, durante la década de 1930 en la Argentina. Dichas consecuencias son, sucesivamente, analizadas en dos niveles: el de la alianza de clases dominantes, por un lado, y el del movimiento sindical, por el otro, durante el período preperonista. La hipótesis básica es que, tanto en uno como en otro nivel, el proceso social argentino asumió en los años posteriores a la crisis de 1929 características diferenciales con respecto a otras sociedades latinoamericanas dependientes del imperialismo y que ellas iban a te-

ner una fuerte significación para la definición del peronismo como un caso peculiar dentro de la genérica categoría de “populismo” a la que suele adscribirlo, indiferenciadamente, la literatura sociológica y política más corriente.

Ambos artículos no son inéditos. En tiradas reducidas fueron ya publicados como documentos de trabajo por el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, en los años 1968 y 1969, e inicialmente fueron concebidos como parte de un proyecto más vasto, que debió interrumpirse bruscamente. La actual reedición reproduce, sin modificaciones, la versión original. Ambos trabajos, pese a estar desde hace tiempo agotados, han sido utilizados como material bibliográfico en cursos dictados en distintas facultades y ese hecho es el que motiva, básicamente, su reproducción textual: es interés especial de los autores incorporar más ampliamente los dos estudios al debate sociológico y político, como un estímulo importante para una reelaboración de ciertos aspectos parciales, actualmente en proceso de discusión.

M. M. y J. C. P.
Buenos Aires, diciembre de 1971

Primera parte

CRECIMIENTO INDUSTRIAL
Y ALIANZA DE CLASES
EN LA ARGENTINA (1930-1940)

1. Introducción*

Durante la década del 30 tienen vigencia en la Argentina políticas y reagrupamientos de fuerzas sociales centrados en el intento de dar respuesta a ese hecho nuevo que es el acelerado crecimiento industrial y sus consecuencias sociales.¹ Examinar estos reagrupamientos, sus alcances y sus limitaciones constituye un marco central, a nuestro entender, para analizar la fórmula alternativa que el peronismo y los gobiernos que sucedieron a este movimiento fueron poniendo en práctica.

El supuesto de nivel más general es que todo proceso de industrialización por sustitución de importaciones o de “industrialización sin revolución industrial”, como el que se dio en la Argentina, del mismo modo que plantea características diferentes de las de los modelos clásicos en la estructura económica, promueve también alternativas particulares en la dimensión sociopolítica, sea en el tipo de estratificación, en los reagrupamientos y alianzas de las clases propietarias, en la forma de movilización de las clases no propietarias, en el papel del Estado y de los grupos políticos, etcétera.

* Este trabajo forma parte de una investigación más vasta, referida a los orígenes del peronismo. En tanto este movimiento puede ser categorizado como una respuesta a los problemas que plantea una estructura económico social en la que ya existe un significativo peso de la industria, pensamos que el estudio de la década del 30 resultará pertinente, pues puede servir para mostrar cuál fue la primera respuesta al proceso, en el momento en que éste comienza a tomar caracteres significativos.

Afirmar, por lo tanto, que el período abierto en 1930 representa una primera respuesta a ese proceso puede tener consecuencias tanto para el análisis específico de la situación argentina, cuanto para la aplicación de modelos teóricos para el análisis de los procesos sociales durante el crecimiento industrial.

La teoría más habitual propone, en este sentido, un presunto modelo clásico descriptivo de la orientación de las clases y los grupos sociales frente al crecimiento industrial, cuyos componentes polares serían éstos:

1. los propietarios agropecuarios, genéricamente calificados como la “oligarquía”, terratenientes latifundistas cuyo interés objetivo y subjetivo está en el mantenimiento de la preeminencia de la tierra como fuente de ingresos, estatus y poder, con actitudes tradicionales y opuestos al fortalecimiento de nuevas actividades productivas y al afianzamiento de nuevos grupos vinculados a ellas, sus posibles contendores en lo económico, lo político y lo social;
2. los propietarios industriales, cuyo interés objetivo y subjetivo reside en el crecimiento de las nuevas actividades y en la conquista del poder político y el establecimiento de su hegemonía social, con orientaciones modernas y rechazando las situaciones “feudales” improductivas.

En un primer paso, retengamos de esta caracterización sólo la aceptación o el rechazo de las actividades industriales. Diversas modificaciones de este modelo simplificado aparecen en la literatura:

- a) Se mantiene el modelo en cuanto a la identificación de las oposiciones de estos dos contendores, pero se

supone que el sector industrial no tiene conciencia clara de sus intereses. Se mantendría en este caso a los terratenientes como enemigos de la industria y a los industriales como “objetivamente” opuestos a los terratenientes.² El desarrollo de la oposición exige la actuación de otros grupos, unos, poseedores de esa conciencia de la que carecen los propios industriales —el Ejército—, y otros, más dispuestos a la lucha que el propio grupo en cuestión, la clase obrera.

Aparecen también nuevos grupos aliados a los terratenientes: sectores de la clase media, que categorizaríamos como “terciarios” de los propietarios latifundistas. Puede incluso, en el modelo, darse una discontinuidad en el sector industrial, pero la oposición básica de intereses y la línea de tendencia del desarrollo histórico se mantiene: la contradicción principal sigue siendo la que separa la economía agraria de la economía industrial. Jorge Abelardo Ramos representaría casi literalmente esta posición, aunque su examen no se agota en las relaciones internas de las clases, sino que incorpora la ligazón con el exterior de la economía agroexportadora.³

- b) Otra versión mantiene el modelo en cuanto a la identificación de los contendores y sus orientaciones, pero en este caso serían los terratenientes quienes, inadvertidamente, habrían favorecido al sector industrial. En este caso parecería suponerse una coincidencia transitoria de intereses muy específicos en medidas tales como el control de cambios, pero una oposición de fondo, tanto en intereses como en actitudes. El tratamiento de Guido Di Tella y Manuel Zymelman y el de Walter Beveraggi Allende se acercan a esta posición, así como la interpretación dada por Aldo Ferrer al período.⁴ No obstante, a veces, dentro de esta va-

riante, se supone también bajo grado de conciencia de los industriales.

- c) Más nos alejamos del modelo clásico cuando, aun manteniendo la imagen del corte, se postulan ciertas discontinuidades dentro de cada uno de los sectores. Así, se admite que el sector terrateniente pasa ya a aceptar cierto tipo de industrialización limitada, liviana y dependiente y que en esa medida consigue aliarse con el sector más concentrado de los industriales, pero que subsisten dentro de los propietarios de industria grupos no monopolistas que aspiran a un desarrollo manufacturero independiente, con crecimiento de industrias de base y expandido en el mercado interno. Esta posición podríamos encontrarla en los trabajos de Jaime Fuchs, en los que se enfatiza la oposición entre un grupo dominante formado por los terratenientes y los grandes industriales, ambos unidos a través de su común dependencia con el capital financiero internacional, y otro formado por los industriales y propietarios rurales medianos y pequeños, cuyo aliado natural, aunque transitorio, sería la clase obrera.⁵
- d) El alejamiento del modelo inicial es más neto cuando se postula que, en efecto, la oposición se ha redefinido, en cuanto a su contenido, en la forma que el enfoque anterior señala, pero que tanto los terratenientes como los industriales en bloque se benefician con el mantenimiento del desarrollo dependiente de la industrialización, no quedando ningún grupo de origen manufacturero enfrentando la posición del bloque dominante. Lo que se postula en este modelo es una virtual fusión de intereses y de orientaciones entre sectores terratenientes e industriales, sólo enfrentados por la clase obrera. Ésta sería la posición desarrollada por Milcíades Peña.⁶

Nuestro examen de la actuación de entidades corporativo gremiales, partidos políticos y gobierno durante el período que analizamos, nos lleva a presentar una imagen del proceso que rechaza todas las versiones del modelo que se centran sobre una oposición más o menos expresa entre grandes terratenientes y burguesía industrial, incluyendo aquella según la cual no se daría una alianza sino una coincidencia coyuntural entre ambos grupos.

Con los enfoques c) y d) compartiríamos, en cambio, la imagen de una comunidad de intereses entre ambos sectores en esta etapa y también la suposición acerca de las limitaciones que presentaba su propuesta de industrialización.

Nos acercaremos a d) en lo que se refiere a la ausencia de un proyecto alternativo de industrialización más profundo dentro de las clases dominantes, pero diferiremos de este enfoque en tanto señalaremos que, incluso este proyecto limitado, no era percibido desde un comienzo como el proyecto hegemónico indiscutido de la clase dominante,⁷ enfrentado sólo por proyectos de mayor alcance y en manos de la clase dominada, sino que por el contrario, en la propia clase dominante se daba una oposición y un choque. El proceso no podría, por lo tanto, conceptualizarse como de fusión de intereses, sino de alianza entre fracciones de clase.

En ese sentido, a diferencia de ciertos supuestos acerca de la propensión hacia el desarrollo del mercado interno que sería propia de los terratenientes no incluidos en el sector hegemónico de la clase, encontraremos, precisamente, la oposición más decidida al proyecto industrializador en un sector subordinado de los terratenientes y una clara expresión de esta actitud en un grupo político considerado representante de la clase media y la burguesía productiva: la Unión Cívica Radical.

Nuestra imagen es, entonces, la de un proyecto que, si bien concita apoyo dentro de la clase dominante, no es el pro-

yecto indiscutido de ésta. Su puesta en marcha y su posterior mantenimiento exige la constitución de alianzas entre sectores de la clase dominante y podrá, incluso, requerir la alianza de sectores ajenos a ella. No se trataría, entonces, de una situación en la que la clase dominante, unificada, quiere comprar la pasividad de la clase dominada, sino de una situación en la cual la preeminencia de uno u otro proyecto está aún en cuestión y puede dar lugar a un corte transversal dentro de la misma clase dominante.

En definitiva, lo que nos parece importante explorar es una línea que, tomando como punto de partida un proceso económico de crecimiento ligado a la sustitución de importaciones, al proyectarlo al plano de los intereses y orientaciones de las clases, nos permita conceptualizar sus características en ese nivel como disímiles de las formas “puras” de enfrentamiento propias del modelo clásico, en tanto el tipo de crecimiento tardío parece requerir la configuración de alianzas entre sectores de propietarios agrarios e industriales, más que su enfrentamiento global.

En nuestro examen nos encontraremos con que los terratenientes no sólo no evidencian el rechazo absoluto de las actividades industriales que el modelo clásico les atribuye, sino que incluso aceptan ciertas formas de industrialización. Pero como señalamos al presentar el modelo clásico, este último supone, además, que la orientación hacia la industria es solidaria de un conjunto de orientaciones sociales en general valoradas también como “progresistas”. Lo que el análisis de esta década pone de manifiesto es, precisamente, que el apoyo a la industria no puede identificarse ingenuamente con la adopción simultánea de orientaciones sociales y políticas también “progresistas”, negadoras de privilegios tradicionales y partidarias, por lo tanto, de un mayor igualitarismo y de una extensión de la participación política. O sea que, en los procesos de crecimiento tardío, el corte en cuanto a apoyo o rechazo a la

industria no coincide necesariamente con el corte entre fuerzas representantes de un orden nuevo, globalmente “progresista” y un viejo orden globalmente retardatario, sino que dentro de los partidarios de la industrialización y dentro de los sectores favorecidos por ella se darán cortes fundamentales en cuanto a orientaciones sociopolíticas, cortes que obligan a complicar el modelo simple de enfrentamiento social mediante la introducción del concepto de alianza de clases, como condición para hacer posible el estudio de las relaciones de fuerza en la sociedad y de la hegemonía en el Estado.

Desde el punto de vista de la teoría, este concepto de alianza de clases, que nos parece productivo para el análisis de las relaciones entre estructura económico social y poder político, surge como central en la tradición marxista, aunque no siempre se lo encuentra suficientemente precisado en su estatus teórico sino más bien referido al análisis de situaciones concretas.⁸

En la teoría sociológica más corriente, por su parte, aquél no tiene virtualmente vigencia: tal como en lo habitual es conceptualizada la relación entre estratificación y poder, surge como central la discriminación detallada de sectores de clase, pero no el estudio de las condiciones que hacen posible su alianza.

El caso argentino, a partir de los años treinta, nos servirá como ejemplo de configuración temprana de esta línea de alianzas de clase. En lo que sigue, pues, trataremos de mostrar:

1. La existencia de un proceso de alianza de clases en la Argentina durante la década del 30, y su contenido;
2. las condiciones que lo hicieron posible y los pasos paulatinos de su configuración;
3. los alcances y las limitaciones de esa alianza, vinculadas a las limitaciones propias de un proyecto de crecimiento basado en la sustitución de importaciones.

El análisis del intento de aceptación y canalización de este proceso de industrialización constituirá el marco dentro del cual analizaremos, en trabajos posteriores, las nuevas formas de respuesta al proceso configuradas por el peronismo, como estructuración distinta de la alianza de clases, cuyo rasgo más peculiar está dado por la participación de un sector de las clases dominadas dentro de ésta.

2. Las condiciones de la alianza de clases

En la década del 30, más concretamente a partir de 1933, la industria argentina entra en una etapa de crecimiento durante la cual, de una situación postergada, se transformará, en un decenio, en sector líder de la economía. Rostow en su difundido trabajo ubica el “despegue” de la industrialización en 1935 y los datos censales, por su parte, indican que el crecimiento de la manufactura en la Argentina, entre 1935 y 1937, iguala aproximadamente las cifras comprendidas entre 1914 y 1935.⁹

Este objetivo crecimiento de las fuerzas productivas no podría haberse producido de haber mediado la oposición de políticas gubernamentales. En el análisis del desarrollo económico de los países de América latina ya se ha señalado va muchas veces la coincidencia entre orientaciones del Estado y crecimiento industrial a partir de 1930, explicándola como un producto del ascenso de las capas medias que, al participar aunque fuera de forma compartida en la estructura de poder, tienden a superar la política conservadora de los sectores “oligárquicos”.¹⁰

Dentro de esa tónica aparentemente común para América latina, la “originalidad” del caso argentino consiste en que, precisamente a partir de 1930, quienes controlan el aparato del Estado son, indiscutiblemente, las fuerzas conservadoras

“oligárquicas”, tras el intervalo abierto en 1916 por el radicalismo y a ellas deben atribuirse, por lo tanto, las medidas y propuestas estatales que favorecieron, de hecho, el progreso de la industria. Esas fuerzas conservadoras no variaron, por ello, su contenido de clase: siguieron siendo representativas de los hacendados más poderosos, tradicionales beneficiarios de la economía agroexportadora.

Una alternativa para esta constatación sería que, aun controlando el aparato administrativo las fuerzas conservadoras, éstas no hubiesen podido resistir las presiones de una oposición marcadamente favorable a los cambios de dirección industrialista. Como nos proponemos demostrar en el trabajo, ello no sucedió en el período comprendido entre 1933 y 1943; durante esos años, ningún grupo social o político poderoso agitó un programa de crecimiento industrial más radical que el de la elite oficialista.¹¹

La consideración de estos hechos que a primera vista relacionan a una elite conservadora, vinculada con intereses ganaderos, con el progreso de la industrialización operado en esa década en la sociedad argentina, abre un interrogante acerca de si el crecimiento industrial fue conscientemente impulsado por la elite conservadora o si se desarrolló a pesar de ella, como consecuencia no deseada de medidas que buscaban otro fin.

Suponiendo la primera de las dos alternativas, es decir, la existencia de una orientación clara de sus fines —al menos en parte de la elite política— cabe preguntarse cuál fue, entonces, el contenido de la industrialización promovida, a fin de determinar si ésta afectaba de por sí privilegios fundamentales de los propietarios terratenientes. En este caso se hubiera planteado una contradicción entre orientaciones de la elite política e intereses de la clase dominante, posibilidad no descartable a priori, pero que no parece corresponder al desarrollo real del proceso, teniendo en cuenta que

la única fuente de legitimidad para el poder político de esa elite estuvo en el consentimiento expreso de la “oligarquía” tradicional.

El núcleo de este trabajo tiende a presentar el supuesto de que no hubo en el período contradicción entre una orientación pro crecimiento industrial expresada en el Estado, y los intereses de la fracción más poderosa de los terratenientes, aunque sí la hubo con los de un grupo subordinado de propietarios rurales.

Por el contrario, consideramos que esa fracción, la más poderosa dentro de la “oligarquía”, es la que mantuvo el control hegemónico¹² dentro de una alianza de clases propietarias en la que se incluían, por primera vez, los intereses de los grupos industriales, y la que orientó la implantación de políticas de gobierno tendientes a armonizar intereses particulares hasta hacía poco antagónicos, con el objeto de asegurar el equilibrio del sistema en su conjunto. La posibilidad de esa articulación de intereses, para una sociedad más compleja y para un Estado más heterogéneo, requería ciertas formas limitadas de industrialización y ellas fueron promovidas a través de una coherente política oficial que hizo crecer enormemente las esferas de actividad del Estado en la estructura social.

El marco que hace posible la integración de los sectores industriales a la alianza de clases estructurada con hegemonía “oligárquicas” está dado por las propias propuestas de la elite dominante que permiten la consolidación y expansión del grupo manufacturero. Ese marco limitado es el del “crecimiento industrial sin revolución industrial”. A partir de la abundante literatura que la CEPAL ha dedicado al tema existe consenso en los economistas en señalar que el proyecto de industrialización promovido en la Argentina durante la década del 30 es un ejemplo claro de crecimiento a partir de la sustitución de importaciones. Su resultado será una econo-

mía industrial, pero “no integrada”, basada en una industria liviana, productora de bienes de consumo no durables. Durante el período no aparecen propuestas orgánicas, ni por parte del gobierno ni por parte de los industriales mismos, que profundicen esa orientación hacia la sustitución de importaciones de bienes de consumo y productos intermedios, exigiendo, además, el desarrollo de una industria de base o la ruptura de la subordinación económica a los centros internacionales.

El proceso se basará, especialmente, en la expansión de una industria preexistente más que en el fomento deliberado de una diversificación que hubiera debido apoyarse sobre una coherente política de inversiones.¹³ Éstas, además, se orientaron a la producción de bienes de consumo. “La principal característica de la inversión durante el período de crecimiento autogenerado fue un cambio de composición más que de magnitud” [...] “Dentro del sector industrial [...] las inversiones se volcaron principalmente hacia las textiles, metalúrgicas, productos alimenticios y bebidas”.¹⁴ Las transformaciones, además, se operarán sólo en el sector industrial, manteniéndose inmodificada la estructura agraria, rasgo señalado como característico de la industrialización sustitutiva de importaciones.¹⁵

En síntesis, el crecimiento industrial, como proyecto controlado por la “oligarquía”, se limitará a cubrir un vacío llenado anteriormente por bienes de consumo importados, sobre todo en los rubros alimentación y textiles.

Estas características reseñadas implicaron, como límite para el proceso, el escaso interés en ampliar y diversificar el mercado interno de consumo en tanto se partía de la preexistencia de éste, al cual sólo se buscaba devolverle la capacidad adquisitiva anterior a la crisis de 1929; la posibilidad de hacer rendir al máximo la capacidad ya instalada, sin necesidad de grandes inversiones en maquinarias y equipos, aumen-

tando solamente la ocupación de mano de obra; y la concentración del crecimiento en aquellas ramas que elaboraban materias primas nacionales.

Durante el período, además se intensificaron las inversiones extranjeras, especialmente norteamericanas, en actividades de transformación, lo que aseguró a los grupos industriales locales, al menos en principio, una “protección” especial de sus intereses frente a eventuales medidas de gobierno que pudieran tender a frenar el proceso de crecimiento.¹⁶

Ahora bien, ese tipo de industrialización ¿debe necesariamente entrar en conflicto con los intereses de las clases propietarias rurales? Nuestra hipótesis es que en los países exportadores de materias primas, como la Argentina, el crecimiento industrial limitado no perjudica necesariamente a los grupos agropecuarios en su totalidad, en especial cuando el esquema clásico de división del trabajo deja de funcionar ajustadamente.

Como se ha señalado muchas veces la crisis de 1929 marcará para la Argentina un cambio trascendental en su situación económica, al afectar su privilegiado estatus de país agroexportador, desnudando las ilusiones del crecimiento ilimitado hacia afuera forjadas a partir del 80. El modelo dejará ya de tener vigencia frente a las respuestas proteccionistas que los países centrales pondrán en práctica como alternativa a la crisis. Un ciclo parecía concluido: el de la economía primaria exportadora como excluyente núcleo dinámico de la economía argentina.

Es entonces, cuando esos mecanismos se quiebran, que el mercado interno debe comenzar a cumplir un papel más central en el crecimiento. En medio de una crisis que ilumina crudamente la vulnerabilidad extrema de la economía argentina frente al exterior, las elites tradicionales, que han recuperado el control del Estado, se ven favorecidas por la posibilidad de una limitada industrialización, en tanto el desarrollo de ciertas ramas de la manufactura es capaz de per-

mitir —sin modificaciones profundas en la estructura económica— un reajuste del sistema a los nuevos términos en que se plantea el comercio mundial. En la medida en que descien- de la participación de las economías agroexportadoras en el mercado mundial, se hace necesario, para nivelar la situación a los nuevos términos, que las importaciones desciendan a la altura de las exportaciones.

Éste es el primer signo para la nueva alianza que se estructurará; su limitada condición. La oposición principal que enfrentaba a agrarios e industriales alrededor de las políticas de libre cambio o de proteccionismo, pasa a tener una importancia secundaria para la fracción dominante de los terratenientes que no rechazará las medidas tendientes a controlar las importaciones, favoreciendo así el crecimiento de ciertas ramas de la manufactura. En un punto en el que anteriormente se ubicaba el centro del conflicto se establece una posibilidad de coincidencia.

Hasta la crisis del comercio mundial esa contradicción entre intereses de grupos de propietarios agrarios e industriales aparecía como central en la relación de fuerzas entre las clases dominantes y daba lugar a situaciones de tensión y enfrentamiento. Frente a un modelo de crecimiento basado en las exportaciones de artículos primarios, toda tentativa de llevar más allá el proceso de industrialización ya existente significaba un inconveniente contra la fluidez de un comercio internacional basado en los costos comparativos.

Pero la crisis, al quebrar ese modelo, sólo abría dos alternativas: 1) reducir la participación de la oferta global y condenar a la economía a una paralización virtual en espera de una coyuntura más favorable para aumentar en ese momento su coeficiente de integración en el mercado mundial; 2) modificar en parte la estructura productiva, reduciendo ciertos ítem de las importaciones y sustituyéndolos por medio de la producción local.

Este último camino, que fue el finalmente impulsado por las políticas gubernamentales, es el de la industrialización sustitutiva de importaciones.

Pero los cambios en las orientaciones de la elite dominante no serán, sin embargo, súbitos, y necesitarán un período de adecuamiento: la primera respuesta a la crisis, en efecto, se planteó en términos de la alternativa recesionista.

El desarrollo más o menos sostenido de una nueva política sólo puede ubicarse hacia finales de 1933, con el ascenso al poder de un equipo político, encabezado por Federico Pinedo, que influirá decisivamente hasta 1943 y que prolongará, incluso, su gravitación, en los primeros actos del gobierno militar surgido del movimiento del 4 de junio.¹⁷

El derrocamiento del radicalismo significó el ascenso al poder de los grupos económicos, sociales y políticos más estrechamente ligados con lo que se conoce como la “oligarquía”. La primera respuesta de esos grupos repuestos en el poder a la situación de crisis no diferirá de la visión tradicional: equilibrar las finanzas, aun a costa de la recesión económica, cumplir con las deudas en el exterior y aguardar momentos mejores. La situación era percibida como transitoria y el supuesto básico indicaba que tras un período de ajuste la economía argentina volvería naturalmente a la coyuntura anterior. Ésta es la orientación predominante en la política económica bajo el gobierno provisional de Uriburu y bajo el Ministerio de Alberto Hueyo, ya durante la Presidencia de Justo, hasta agosto de 1933.

El propio Hueyo, titular de Hacienda, trazará la síntesis de los objetivos de su política: “el equilibrio del presupuesto —dice— y el pago puntual de los compromisos externos e internos forman las bases en que descansó la política financiera del gobierno”.¹⁸ Por su parte, un ideólogo del sector industrial, Alejandro Bunge, recapitulará así la política económica de ese primer período: “El remedio aplicado a la contracción

económica fue, alrededor de 1933, la reducción interna de los consumos, de las inversiones y del personal obrero y comercial empleado. Y esas economías agravaron la contracción arrastrando al país al círculo vicioso que originaba la desocupación, agotando la capacidad de resistencia y desvaneciendo las esperanzas de la reacción por los medios legales y normales. Pero hay —agrega— una economía que no se hizo y que es, quizás, la única realmente deseable: la supresión de aquellas importaciones a que nos obliga un bloqueo que ha sido el impulso inicial de esta estrangulación progresiva”.¹⁹ Bunge define la primera alternativa gráficamente como “reajuste hacia abajo”.

Esta orientación comenzará a ser abandonada desde agosto de 1933, cuando Federico Pinedo y Luis Duhaou ocupan, respectivamente, los Ministerios de Hacienda y de Agricultura. Su gestión marcará las pautas iniciales para cambios en la política que el Estado propone a las clases dominantes y abrirá, específicamente, un período en el que, aunque no sin dificultades, habrán de articularse nuevas orientaciones que superarán los marcos de un enfrentamiento simple entre sectores rurales y sectores industriales, estableciendo nuevas bases para un reagrupamiento de fuerzas.

El propio Bunge, a quien tomamos como buen testimonio de las orientaciones de los grupos industriales por sus funciones de asesor e ideólogo de la Unión Industrial Argentina reconocerá, en el ya citado trabajo de 1940, que “se ha hecho más en estos últimos diez años que en los treinta precedentes, con un balance muy favorable entre los aciertos y los errores”. “El momento de mayor acción —agrega— con actos fundamentales, corresponde al período en que desempeñó el ministerio de Hacienda el Dr. Federico Pinedo, del 24 de agosto de 1933 al 30 de diciembre de 1935.”²⁰

Para la definición de esta nueva política el llamado Pacto Roca-Runciman, suscripto por el gobierno argentino con el

de Gran Bretaña en 1933, adquirirá una influencia determinante como nudo central que condicionará la posibilidad del cambio en las orientaciones de una fracción de los propietarios terratenientes, a la vez que provocará un clivaje profundo en los grupos rurales.

A partir de su firma, el sector agrario más poderoso por ser el más ligado al comercio mundial, definirá su nuevo ajuste frente a la irreversible situación creada por el Tratado de Ottawa, que firmaron Inglaterra y sus dominios y que amenazaba perjudicar gravemente las exportaciones de carnes argentinas, y podrá, como consecuencia de ello, aceptar una política de mayores alcances y más articulada que la trazada hasta entonces. Comenzará así a definirse un nuevo bloque de poder, a partir de nuevas formas de alianza entre las clases propietarias, en las que el sector industrial comenzará a tomar participación, casi siempre a través del rol equilibrador que en la estructura económica comienza a jugar el capital financiero, como mediador de las inversiones en el agro y en la industria. Esta nueva situación hará que el papel del Estado sea, a la vez, más importante y también más complejo.

El pacto Roca-Runciman se firma en mayo de 1933. Brevemente, éste garantiza que “el Reino Unido no impondrá restricciones a la importación de carne vacuna enfriada procedente de la Argentina, que reduzcan esas importaciones a una cantidad inferior a la importada en el trimestre correspondiente del año 1932”. Esta concesión inglesa a los productores de carne enfriada (“chilled”), el sector más importante de los hacendados, comportaba una serie de obligaciones paralelas para la Argentina. En primer lugar, que el 85% de las licencias de importación de la carne argentina en Inglaterra debía ser distribuida por el gobierno británico, lo que significaba consolidar el trust frigorífico y a los ganaderos ligados a él. Nada más que el 15% de esa cuota quedaba a disposición del gobierno argentino, pero sólo en caso de que éste o los ganaderos tuvie-

ran la “propiedad, control o administración de empresas (frigoríficos) que no persigan fines de beneficio privado”.

Además, el gobierno argentino se comprometía, entre otras obligaciones: 1) a mantener libres de derechos el carbón y todas las otras mercancías que entonces se importaban libres de derechos; 2) respecto de las importaciones de productos ingleses sobre cuyos derechos aduaneros Gran Bretaña gestionaba una reducción, volver a las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose el gobierno argentino a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes.²¹

El convenio significaba la aceptación, por parte del Estado argentino, de las reglas de juego impuestas por los ingleses para mantener en funcionamiento el intercambio bilateral. Esas nuevas reglas obligarían a una adaptación de la política económica de las clases dominantes argentinas, a fin de mantener la prosperidad del sector ganadero más privilegiado, no sin que otros grupos rurales menos poderosos sufrieran intensamente ese reajuste. Comenta Halperin Donghi: “En la ganadería, sobre todo, esa situación estaba destinada a provocar vivas protestas, pues era un sector de nuestros grupos dirigentes tradicionales el brutalmente apartado del núcleo privilegiado por la nueva política económica. Esta diferenciación entre los hacendados [...] se transformaría en el resultado deliberado de una política económica oficial”.²²

Analizaremos más adelante las diferenciaciones que se producen en la clase ganadera como consecuencia de la implantación de las medidas estipuladas en el Pacto Roca-Runciman, diferenciaciones que marcarán el clivaje más importante dentro de las clases propietarias durante el período considerado, desplazando del eje del conflicto el enfrentamiento “puro” entre agrarios e industriales.

El convenio Roca-Runciman traía aparejado el predominio del grupo ganadero más privilegiado en la orientación de

la economía argentina. Se trataba de la consolidación de la supremacía del grupo social que había sido desplazado del poder político en 1916.

Esta situación suscitó, en un principio, grandes recelos en la Unión Industrial. El temor más serio derivaba de los compromisos acerca de rebaja de aranceles para la importación de manufacturas inglesas, que amenazaban echar por tierra con el aumento del 10% de impuesto a las importaciones, establecido por el gobierno de Uriburu.

Entre mayo y diciembre de 1933 la UIA desarrolló una agitada campaña en defensa de los intereses de los industriales que culminó con una suerte de pacto tácito con el gobierno.

En mayo, un manifiesto de la UIA advertía, alarmado, sobre una “tendencia económica que sólo contempla los intereses agropecuarios” (y que llega) “al arbitrio de proponer y prestigiar el sacrificio de la industria manufacturera como único medio de mejoramiento del comercio de ganados y cereales argentinos”.²³

Un mes después, organiza un acto público intentando ampliar las bases para un frente en defensa de la industria. Entre los oradores, además de Luis Colombo, presidente de la UIA y del asesor Bunge, figuran representantes “de los obreros y de los empleados”. Es la última vez —y creemos que la única— en que la UIA postula una alianza con los sectores subordinados del área industrial para oponerla a los intereses agropecuarios en conjunto, y que efectúa sus reclamos no en nombre exclusivo de los intereses empresarios, sino del sector industrial de la sociedad, considerado como un todo.

Los reclamos son sintetizados así por Colombo: “Queremos que la salvedad que se hiciera en el protocolo firmado en Londres por el eminente ciudadano Dr. Roca sea cumplida con toda fidelidad por los que han de concertar el acuerdo definitivo, en cuanto aquél estableció que la reduc-

ción de los derechos aduaneros alcanzará hasta donde lo permitan las necesidades fiscales y el interés de las industrias nacionales”.²⁴

Las argumentaciones desarrolladas en el mismo acto por el ingeniero Bunge tienen especial interés por su carácter programático y porque ellas reaparecerán, casi textualmente, en boca de Pinedo y Duhau pocos meses después.

“La Argentina —manifestó— es una nación deudora con obligaciones públicas y privadas por valor de 500 millones de pesos al año. Es para nosotros una cuestión de honor procurar que el saldo del comercio externo no sea inferior a esa suma a fin de que podamos cumplir con nuestros sagrados compromisos. Mientras descienden los precios de nuestros productos y disminuye fuertemente el valor de lo que el mundo nos compra, como ahora ocurre, nosotros estamos aumentando nuestras importaciones, con lo cual el saldo del intercambio declina rápidamente a menos de la mitad. Es un deber de honradez nacional reducir las compras que no podríamos pagar sino a riesgo de una moratoria, a riesgo de la suspensión del pago de nuestras obligaciones privadas con aquellos miles de ciudadanos ingleses y de otras naciones, que invirtieron sus ahorros y depositaron su confianza en este país y en sus hombres.”²⁵

La ofensiva de la UIA provoca una respuesta del presidente Justo. No se trata de perjudicar a la industria —dice— que “ha adquirido ya en algunos de sus aspectos una importancia evidente”. Pero —agrega— “si queremos vender no podemos negarnos a ser, razonablemente, compradores de lo que pueda adquirirse con ventaja”. Y concluye: “El problema de esta difícil materia de gobierno y, sobre todo, en momentos tan turbios de la economía universal, está en encontrar el necesario equilibrio, la justa medida”.²⁶

Las demandas de la UIA eran limitadas y esa limitación era uno de los puntos centrales que haría posible el acuerdo.

En efecto, frente a las consecuencias que podía acarrear el convenio Roca-Runciman, ¿qué se reclamaba? “Se pide solamente —responde una nota de la UIA a Justo— que no se disminuyan los aranceles aduaneros en todo lo que pueda afectar al trabajo industrial. No hablamos ya del porvenir de las industrias, no estamos defendiendo su progreso —agrega el memorial— estamos sólo defendiendo su existencia actual.”²⁷

Hacia fines de 1933, un esbozo de política orgánica comienza a ser elaborado por el nuevo equipo económico que reemplazó a Hueyo. En diciembre se anuncia un Plan de Reestructuración Económica, el primero posterior al replanteo obligado por el Pacto Roca-Runciman. Éste incluye, básicamente, el control de cambios, la creación de Juntas Reguladoras de la Producción y el desarrollo de un plan de obras públicas. Las medidas propuestas motivan de la UIA “su más cordial apoyo y auspicio a esa política, en cuanto trasunta significativamente el decidido propósito de defender y estimular el trabajo del país”.²⁸

El Plan traía aparejada una devaluación del peso argentino, pero junto a esa medida se instrumentaba un control de las divisas para la importación. La devaluación —una medida que favorece exclusivamente a los exportadores— no impidió la adhesión de la UIA. Ésta “defraudaría las finalidades que fueron propósito de su constitución... si por considerar que estas medidas no atañen directamente a la industria fabril se mostrara indiferente. Muy lejos de ello y aunque para muchos industriales que deben adquirir materias primas en el extranjero la reducción que ya se ha insinuado en el valor de nuestra insignia monetaria puede serles perjudicial, entendemos que se trata de salvar las actividades vitales para el país y que el relativo sacrificio que ellas pueden demandar es, no sólo una contribución indispensable para el beneficio de la colectividad, sino, además, para los propios intereses fabriles, cuyo desarrollo sería utópico con un mercado interno

agotado en su capacidad de adquisición y en sus recursos”.²⁹ Aquí, como en el texto de Bunge ya citado, aparece clara una caracterización de la necesidad de la industria, a la que no se postula como enfrentada a la hegemonía “oligárquica”: antes bien, el papel de la industria aparece justificado —en opinión de los propios industriales— como funcional al equilibrio del sistema en su conjunto.

Durante todo el período que arranca a fines de 1933 y culmina con el derrocamiento de los conservadores diez años después, esta solidaridad de orientaciones entre los industriales y el Estado, sometido a la hegemonía del sector ganadero más privilegiado, se mantiene. Los grandes hacendados, obligados por la situación externa, modifican su orientación librecambista tradicional y avalan —a menudo a través de representantes directos de sus intereses que ocupan importantes funciones de gobierno— las medidas oficiales que, indirectamente, tienen consecuencias industrialistas como el control de cambios o el aumento de gravámenes: achicadas las exportaciones, deben achicarse también las importaciones.

Esta teoría fue expresada con toda claridad por los representantes de la elite política. Interesa especialmente cuando es el ministro Duhau quien la formula, por tratarse de un vocero directo de los hacendados más poderosos. Duhau era un gran “invernador” y llegó a la Presidencia de la Sociedad Rural Argentina cuando en ella consolida su dominio, a fines de la década del 20, el grupo de hacendados vinculados al frigorífico y por lo tanto al comercio internacional.

En un discurso pronunciado en diciembre de 1933, al ser inaugurada la Exposición Industrial organizada por la UIA, Duhau definió el nuevo ciclo que se abría para la economía argentina: “Ha concluido la etapa histórica de nuestro prodigioso desenvolvimiento bajo el estímulo directo de la economía europea”, dice. El punto de partida del cambio es la nueva situación del comercio mundial: “Somos demasiado

pequeños en el conjunto del mundo para torcer las corrientes de la política económica mundial, mientras las grandes potencias se empeñan en poner nuevas trabas al intercambio”. Refiriéndose al pasado, agrega: “La Argentina podía obtener buena parte de las manufacturas que requería ya sea produciéndolas directamente o ya obteniéndolas en los países extranjeros mediante el canje con sus productos agrarios. Lo más económico, lo más provechoso para el país, resultaba con frecuencia el último procedimiento, el procedimiento del intercambio”. Y luego de señalar la compresión de la capacidad de compra en el exterior “por razones ajenas a la voluntad de la Argentina”, concluía: “A la industria nacional le tocará, pues, resarcir a la economía argentina de las pérdidas incalculables que provienen de la brusca contracción de su comercio exterior”.³⁰

Será a partir de esta concepción cuando se forjará una base común de orientaciones entre los sectores agrarios dominantes y los industriales. Podría argumentarse —y se ha hecho— que la coincidencia sería meramente coyuntural: no es la necesidad de cierta industrialización el punto de confluencia sino, circunstancialmente, algunas medidas de tipo fiscal que interesan al gobierno y a los grupos agrarios para mantener el statu quo, sometido a fuertes presiones por el desmejoramiento de las relaciones comerciales, medidas que los industriales aprovechan para desarrollar sus propios intereses.

El punto central sería, siguiendo ese razonamiento, la posición del gobierno: necesidad de evitar el déficit de divisas, el déficit de la balanza de pagos. Los sectores agrarios aceptarían momentáneamente la nueva orientación, pero seguirían manteniendo su oposición a todo proceso que consolidara en forma permanente un crecimiento de la industria.

Nuestra hipótesis va más allá, aun aceptando el carácter de precipitante inicial de los cambios que pudiera tener dicha orientación tal como acabamos de resumirla: los grupos

agrarios más privilegiados, una vez resuelta su integración en el mercado mundial —y esto es lo que conseguirán a través del Pacto Roca-Runciman— se ven favorecidos por el proceso de sustitución de importaciones.

Ese beneficio compartido por los ganaderos más poderosos puede ser conceptualizado de distintas maneras, partiendo siempre del carácter limitado del proyecto industrializador:

- 1) en tanto hubiesen comenzado a invertir directamente en industrias o estuviesen vinculados a ellas a través de grupos financieros;
- 2) en tanto, aunque no tuviesen intereses directos en ese sector de la economía, advierten que la existencia de cierta industrialización permite un mejor funcionamiento del conjunto de la actividad económica, que permanece bajo su hegemonía.

La primera hipótesis provee, sin duda, un firme fundamento explicativo para la coincidencia entre ambos sectores, a través de una vinculación varias veces señalada y que merece mayor exploración para establecer su intensidad, es decir, para establecer hasta qué punto más que ante una alianza de clases nos hallaríamos ante una fusión. No obstante, la segunda hipótesis ofrece por sí sola base suficiente para explicar, en principio, la coherencia de una política gubernamental en manos de una elite conservadora de base agraria que, a partir de 1933, no sólo favorece a la industria indirectamente, sino que intenta hacerlo a través de sucesivos proyectos legislativos, reconociendo de tal modo que cierto grado de industrialización es funcional al sistema.

Y es importante destacar que, incluso, partiendo de la hipótesis de la vinculación directa o la fusión, la base de coincidencia explicitada en la segunda hipótesis sigue siendo relevante para caracterizar el proceso no como un caso en el

cual la existencia de un centro único de control de actividades diversas permite sacrificar utilidades en un sector para aumentarlas en otro, sino como un caso en el que resulta posible favorecer al mismo tiempo a ambos sectores.

Es probable que hasta 1933 las medidas proteccionistas que se adoptaron, como el control de cambios, no tuvieran otro fin que “la determinación de continuar escrupulosamente al servicio de la deuda pública externa”.

Pero a medida que la perspectiva de retrotraer la situación al esquema vigente con anterioridad a la crisis se alejaba, la promoción de la industrialización sustitutiva dejaba de ser una consecuencia secundaria de medidas tendientes a satisfacer otros fines, para transformarse en algo autónomo, pero integrante de un plan coherente.

Este plan encuentra su sistematización más completa en 1940, en oportunidad de las medidas elaboradas por Federico Pinedo en su segundo paso por el Ministerio de Hacienda, pero se halla anticipado por proyectos anteriores de otros representantes del oficialismo.

En 1933, por ejemplo, Matías Sánchez Sorondo propone un Plan de Reestructuración Nacional en el Senado. Se incluyen, entre otras medidas, éstas, referidas al régimen aduanero y a la producción industrial: “control de las importaciones, establecimiento de derechos adicionales que neutralicen el efecto de cualquier forma de dumping, normas de ‘draw back’, supresión de las liberaciones de derechos, preferencia en las licitaciones del gobierno al producto del país; creación del Banco Industrial”.³²

Punto por punto, este proyecto recoge todos los reclamos, demorados desde hacía décadas, de la UIA. Es, además, un anticipo casi textual del Plan Pinedo de 1940.

Ninguna de esas medidas parecía chocar con la oposición de los grandes ganaderos, si tomamos como buen indicador de las actitudes de éstos a la Sociedad Rural Argentina. En ju-

lio de 1933 el presidente de dicha institución, Horacio Bruzzone, declaraba, luego de señalar que no existían antagonismos entre el agro y la industria: “Es verdad que nosotros siempre hemos conceptualizado contraproducente el proteccionismo aduanero para ciertas clases de industrias que sólo pueden vivir en aquel invernáculo arancelario por cuanto carecen de condiciones propias de existencia sólida en el clima de nuestra economía, pero ahora nos encontramos todos de acuerdo en la necesidad de ayudar a la organización de industrias que puedan prosperar transformando las materias primas tan varias y cuantiosas que nuestra tierra produce y brinda generosamente”.³³

A partir de la década del 30 se advierte, pues, que las argumentaciones de proteccionistas y librecambistas pierden vigencia y como centro de la oposición entre industriales y agrarios. Por el contrario: una limitada industrialización tiende a formar parte de la estrategia de los sectores agrarios dominantes que, a través de sus representantes, tratan de articular políticas en esa dirección.

La crisis del comercio mundial y el descenso de la participación argentina en éste determinan un “vacío” en la oferta de bienes que puede ser cubierto por una industria nacional preexistente, lo que permite un mejor funcionamiento del sistema sin obligar a modificaciones profundas en la estructura económica. Esa industrialización, al menos en su primera etapa, bajo control “oligárquico”, no altera tampoco las estructuras de dominación tradicionales.

A esto se suma el carácter limitado de los reclamos de los sectores industriales, que no van más allá del mantenimiento de ciertas barreras proteccionistas. En los hechos, a ello se limitará el respaldo estatal pues, por diversas razones, los planes más integrales como el de Sánchez Sorondo en 1933 y el de Pinedo en 1940 no llegan a ser aprobados en el Parlamento.

Lo que interesa destacar, en principio, es que en la rees-

tructuración operada en la economía argentina, tras la crisis mundial de 1929, y como transición de una etapa de “crecimiento hacia afuera” a otra de “crecimiento hacia adentro”, son los grupos tradicionales quienes toman la iniciativa para el pasaje en el marco de una estrategia cuyo contenido traza con toda claridad Federico Pinedo en los debates de 1940: “La vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra, pero estamos en condiciones de crear, al lado de ese mecanismo, algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida del pueblo a cierta altura”.³⁴

Ni las organizaciones empresarias ni ningún partido político, dentro de las clases propietarias, asumirán otro proyecto industrialista que reformule o profundice ese programa de la elite dominante. Al contrario: como se verá con el principal partido opositor —el radicalismo— las discrepancias en este punto se fundamentarán a partir de los “excesos” de la industrialización propuesta por el oficialismo.

3. La diferenciación interna en el sector agropecuario y los grupos de oposición

Hemos diseñado la posibilidad de que, a partir de las nuevas condiciones asumidas por el comercio mundial, los intereses particulares de hacendados e industriales encuentren un plano de coincidencia en las orientaciones hacia una industrialización limitada, formuladas por el Estado.

¿Qué significación tiene esta posibilidad como causa de diferenciaciones internas dentro de las propias clases dominantes? Nuestra hipótesis es que, al menos hasta la segunda guerra mundial, no se producen fragmentaciones significativas en

el seno de los industriales y que, en caso de haberlas en germen, los industriales pequeños y medianos concentran tan poco poder económico y tan escasa fuerza de presión, que la hegemonía dentro del bloque industrial se mantiene, sin alteraciones, en poder de los industriales más grandes y tradicionales, vinculados con el capital financiero nacional e internacional, cuya representación corporativa inviste la UIA.³⁵ Es probable que esta unificación concluya a partir de la década del 40, lo que agregaría un dato de suma importancia para el reagrupamiento de fuerzas y la redefinición de las alianzas de clase que están en la base del surgimiento del peronismo.

El supuesto de una indiferenciación, durante la década considerada, explicaría la ausencia de un proyecto alternativo de industrialización, más radical que el contenido en las orientaciones del Estado, el cual, en todo caso, quedó a cargo de algunos grupos militares, de declaraciones programáticas de la izquierda, en especial del Partido Comunista, y de algunas voces políticas aisladas, y no de otro sector industrial postergado.³⁶ El pliego de reivindicaciones de los industriales es el que agita la UIA y tiende a conseguir que la legislación sancione más eficaces normas de protección, como reaseguro frente a la eventualidad de cambios en la conducción económica.³⁷

En el sector agrario, el panorama es otro. Allí sí se produce una diferenciación o, más adecuadamente, se acentúan los términos de una división de intereses ya anticipada en la década anterior. Algunos autores atribuirán a esa diferenciación directas repercusiones en el nivel de la política ya durante los años anteriores a la crisis: los hacendados “criadores” serán el respaldo social del yrigoyenismo y los “invernadores” rodearán al “antipersonalismo” alvearista.³⁸

La presentación clásica de los términos de esa diferenciación la realizó un ganadero, Horacio V. Pereda, en un libro destinado a asumir la defensa de los “criadores”.³⁹

Éstos son —según sus palabras— los ganaderos por excelencia, los auténticos productores. Los “invernadores”, en cambio, estarían mucho más cerca “del intermediario negociante que del verdadero ganadero”. Son quienes venden directamente a los frigoríficos y en ese sentido constituyen la capa privilegiada de los hacendados. Giberti comenta la nueva situación en estos términos: “Se erige entonces en casi dueño de la situación el invernador, que ya no es tal por encontrarse cerca de Buenos Aires, como en la época del saladero, sino por disponer de buenos pastos en invierno y en verano. Tal tipo de ganadero resulta esencial para el frigorífico por ser el único capaz de asegurarle entregas constantes y voluminosas. En consecuencia, los invernadores pasan a gozar de tratamiento especial y a diferenciarse netamente de los demás ganaderos (criadores) que vienen a quedar subordinados a ellos por constituir la única vía para llegar al frigorífico”.⁴⁰

En 1927, los “invernadores” logran el control de la Sociedad Rural Argentina, rubricando institucionalmente lo que ya era un dato de la realidad económica: el predominio de sus intereses sobre los de otras capas ganaderas.⁴¹

A partir de ese momento, la subordinación de los “criadores” no hará más que acentuarse. La crisis, y sus consecuencias para el comercio exterior argentino rubricadas en los Tratados de Ottawa y en el Pacto Roca-Runciman, agravarán todavía la diferenciación: mientras la cuota de exportación anual de “chilled” se estabilizará alrededor de las 350.000 toneladas, la exportación de carne congelada descenderá entre 1925-1929 y 1930-1934 de 269.000 toneladas a 56.000.⁴²

El supuesto principal que permitiría que los grandes hacendados agrupados en la Sociedad Rural Argentina apoyase —y aun promoviese, si tomamos como indicador de ello a las actitudes del ministro Duhau— el proyecto de industrialización limitada, era que ese grupo lograra una partici-

pación privilegiada en las restringidas cuotas de exportación ganadera.

Los “invernadores”, ligados al frigorífico y dependientes de la venta de “chilled” a Gran Bretaña, consiguen estos privilegios a través del Pacto Roca-Runciman, que les asegura una cuota estable de exportación y los mantiene así integrados a su tradicional fuente de recursos. Pero este reajuste —como hemos señalado— no se produce sin el brusco desplazamiento del grupo de los “criadores” que deben subordinarse totalmente a los acuerdos a que llegan los “invernadores” con los mercados tradicionales.⁴³

Un dirigente político opositor, que se convierte en vocero de este grupo desplazado, Lisandro de la Torre, resumiría así la posición del gobierno y de los grandes hacendados: “La teoría asume más o menos esta forma: tenemos una cuota limitada de exportación; guardémosla para las carnes más valiosas, es decir, guardemos la cuota y los relativamente altos precios que pueda representar, para los grandes productores de ‘chilled’ y que corran su suerte los pequeños productores que venden en Liniers la ganadería de Entre Ríos, la de Corrientes, la del norte de Santa Fe y la del Chaco”.⁴⁴

Estos intereses serán, dentro de las clases propietarias, los que más violentamente se enfrentarán con la política económica del gobierno, tal como lo ejemplifican las argumentaciones parlamentarias del citado De la Torre (en 1934 y 1936, especialmente), las de los legisladores de la UCR en 1940, como luego veremos al analizar los debates sobre el Plan Pinedo en 1940, y los memoriales presentados por la asociación que reunía a estos ganaderos desplazados, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y, en general, por las sociedades rurales del interior.

Ningún otro grupo, durante la época, expresa con más claridad que éste su rechazo a todo proyecto de crecimiento

industrial y su voluntad de mantener a toda costa el esquema del “crecimiento hacia afuera”.

Para ellos, la industria es un sector artificial, no dinámico, que no crea riqueza. Mientras la SRA, aun reconociendo la importancia decisiva que para la economía argentina tiene el comercio exterior, no se opone a una industrialización limitada, la CARBAP rechaza cualquier medida de tipo industrialista.

Esto se advertirá plenamente durante la discusión del Plan Pinedo, pero en el programa más general de quien aparece como principal vocero de este grupo ganadero, Nemesio de Olariaga, presidente de CARBAP, esos temas aparecen como una constante.

“El sistema de autarquía implantado como consecuencia de las obligaciones injustas impuestas por el Tratado de Versalles —dice— obligó a muchos países europeos a modificar su política económica reduciéndola a un circuito cerrado interno con la pretensión de bastarse a sí mismo, *para romper con las leyes naturales de los pueblos habitantes del mundo, por la cual lo lógico y racional era producir lo que la naturaleza le había obsequiado naturalmente y, con ello, pagar lo que otros pueblos producían económicamente y, a la vez, aquél necesitaba*”.⁴⁵

Esta reivindicación inflamada del libre cambio y del modelo de “crecimiento hacia afuera” —que puede ser contrastada, por ejemplo, con las citas del ministro Duhau transcritas en la sección anterior— coincidía con una orientación de tipo populista frente a los problemas internos y de tipo nacionalista en la relación con el exterior.

Es interesante acotar la coincidencia de argumentación entre algunos de los voceros principales de este grupo y ciertos ensayistas y políticos nacionalistas y radicales de la época. El plano de confluencia parece estar en una orientación de tipo tradicionalista, basada en la idealización de las relaciones sociales en la campaña, en la presentación de una ima-

gen del “viejo estanciero” paternalista como símbolo de la nacionalidad y en una visión eglógica de la vida argentina anterior al crecimiento industrial y a la división de los ganaderos por influencia de los frigoríficos extranjeros.

“El productor ganadero argentino —dice Olariaga— no tenía prácticamente problemas hasta poco después de la guerra mundial de 1914-1918. Vendía sus carnes y los subproductos a precios que compensaban ampliamente sus necesidades y, satisfechas las necesidades del consumo interno, lo exportaba en su totalidad a Gran Bretaña. El bajo costo de producción, influenciado por la radicación del ganadero en su estancia, el sistema de trabajo de medianería, los bajos salarios que en esa época tenían mayor poder adquisitivo que el de hoy, siendo actualmente el doble en la provincia de Buenos Aires, el bajo valor de los campos y los presupuestos públicos relativamente moderados facilitaban la explotación ganadera en forma conveniente para los intereses de los productores.”⁴⁶

La oposición a cualquier medida de fomento industrial por parte de estos hacendados es constante durante la década y esa orientación abarca, incluso, los años de la segunda guerra. “La política económica en los últimos años —comenta Olariaga en 1943— ha estado al servicio de los sectores rentísticos, comerciales, industriales y de la distribución de la producción que actúan en una permanente explotación financiera de la misma, con un total olvido de los productores.”⁴⁷

Conceptualizada así la política llevada a cabo por el gobierno, todos los congresos y asambleas realizadas por CARBAP y las sociedades rurales del interior insisten en la oposición a cualquier medida que pudiera constituirse en una traba para el comercio de exportación, en tanto éste es percibido como la salida natural para los productores, a quienes ellos representan corporativamente.

Desalojados de la posibilidad de comerciar con Gran Bretaña primero pujarán por tratar de modificar esa situación o, al menos, por asegurarse una participación restringida mediante la utilización a su favor de la cuota del 15% que el Pacto Roca-Runciman autoriza para ser administrada localmente.

Cuando fracasan en este objetivo, porque la CAP —instrumento creado para administrar esa parte restringida de la cuota— es dominada por los “invernadores”,⁴⁸ se abren nuevos mercados para la exportación de carnes congeladas y en conserva, como los Estados Unidos, Italia y Alemania, expandiéndose así la salida de sus productos.⁴⁹

Su orientación, entonces, es hacia una ampliación cada vez mayor de esas posibilidades de intercambio, cerrada para los productores de “chilled” porque los Estados Unidos no aceptan el ingreso de ese tipo de carne. Esa tendencia al aumento del intercambio obra como acelerador de su cerrada oposición a todo tipo de industrialización que sustituya importaciones.

En lugar de la vieja divisa de los grandes hacendados ligados a Inglaterra que definían los circuitos necesarios del comercio exterior argentino a partir del “comprar a quien nos compra”, el grupo subordinado de los ganaderos levanta una alternativa: “vender a quien nos vende”, poniendo el eje de sus objetivos en la ampliación del comercio a nuevos mercados, especialmente los Estados Unidos, que podría transformarse en el proveedor del consumo nacional de manufacturas.

“Hemos conceptualizado siempre un error —dictado por el egoísmo del privilegio— confundir la ganadería argentina con la producción de un solo tipo de carne vacuna, el ‘chilled’, excluyendo el tipo vacuno conserva y el ovino”, dice Olariaga.⁵⁰ Esas carnes pueden entrar en los Estados Unidos y, por lo tanto, la expansión del comercio con ese país se transforma en un objetivo central. La conclusión —obvia— es de alcance generalizador y está contenida en esta cita de Olariaga que define un modelo de crecimiento: “La Argentina, país productor ex-

traordinario con grandes saldos de exportación, debe mantener la política del libre cambio, hoy más que nunca, ante el proceso de los proteccionismos que se traducen en la guerra, económica primera y bélica después, entre los pueblos”.⁵¹

El principal enemigo para este flujo natural del comercio internacional es el crecimiento industrial. Refiriéndose a un proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, tendiente a impedir las prácticas del “dumping”, dice Olariaga: “Ésta es la legislación más avanzada que hemos visto, es un proyecto del más crudo proteccionismo industrial, que no podremos regularlo sin exponernos [...] a las grandes represalias de los países consumidores de carne y trigo y, a la vez, productores de artículos manufacturados. El problema siempre es el mismo: no teniendo capacidad de absorción de toda o la mayor parte de la producción rural en el orden interno [para lo cual] debemos tener poder adquisitivo y luego mayor población en nuestro territorio, *todo lo que se haga en el sentido de proteger limitadamente a la industria provocará la guerra comercial con los países que nos compran hoy y los posibles compradores de mañana*”.⁵²

En el juego de presiones económicas sobre el Estado, los hacendados subordinados individualizan a los industriales como sus principales rivales, quienes “tienen en la metrópoli la suficiente fuerza para pesar en las decisiones del gobierno”, provocando así el cierre de “los mercados extranjeros naturales y en potencia de la producción rural, a quienes no se les permitiría cobrar el precio de su trabajo, aunque fuera con artículos superfluos importados”.⁵³

A diferencia de los hacendados privilegiados en cuyas orientaciones parece central la idea de la funcionalidad de cierto crecimiento industrial, este grupo subordinado rechaza por completo toda expansión posible de la manufactura. Éste es, ciertamente, su único punto de diferenciación: ambos sectores siguen dependiendo del comercio exterior y eso

vincula, en última instancia, sus intereses; pero mientras los intereses particulares de unos —tras el estatus satisfactorio obtenido luego de los acuerdos con Inglaterra— no se contradicen básicamente con los proyectos de industrialización que propone la elite política en nombre del equilibrio general del sistema de dominio, los otros encuentran en esa perspectiva una oposición central a los suyos, orientados hacia una expansión sostenida de los intercambios.

Así, mientras el grupo más privilegiado —la “oligarquía” tradicional— acompaña, aunque con distintos grados de adhesión, las orientaciones más modernizantes, el grupo desplazado, que encontró eco político en los sectores más “progresistas” del Parlamento, se transformó en la fuerza más decididamente opositora a los cambios que se operaban en la estructura económica.

Esta diferenciación en sectores dentro de las clases dominantes rurales junto con el crecimiento y complejización de las funciones del Estado, serán los datos de mayor importancia, durante la década, para la caracterización de las relaciones de fuerza dentro de las clases dominantes y para la explicación de los estímulos institucionales al crecimiento económico que, creemos, no puede ser comprendido como mera “inadvertencia” o “descuido” de la elite tradicional.

4. Agrarios e industriales frente al “Plan Pinedo”

Hacia fines de 1937, los índices de la economía argentina, que parecían indicar un restablecimiento del equilibrio en el nuevo nivel propuesto por la elite hegemónica, comenzaron a caer nuevamente.

“Las cosechas excepcionalmente malas del verano 1937/1938 —comenta Beveraggi Allende— causaron una baja de

casí un 50% en el volumen físico de las exportaciones durante el año 1938 con relación al precedente, al mismo tiempo que los precios de los productos agropecuarios declinaban en el mercado tradicional en un 8,2% en relación con los de 1937. En síntesis, el valor total de las exportaciones argentinas disminuyó en más de 1.000 millones de pesos entre 1937 y 1938, o sea una declinación relativa del 44%.”⁵⁴

A fines de 1938 la balanza de pagos en cuenta corriente arrojó un déficit de 379 millones de pesos: las condiciones de la crisis parecían volver a repetirse. La respuesta elaborada entonces por la elite puede servir como un nuevo indicador del sentido de su estrategia.

Por un lado, se devalúa nuevamente el peso argentino y, en ese caso, la actitud se encuadra absolutamente dentro de los marcos de una orientación estrechamente “agroexportadora”. Pero, además, se establece, por primera vez, el requisito del permiso de cambio previo para las importaciones.

Esta expresa restricción cuantitativa a las importaciones significaba el paso más decidido dado por la elite dentro de una estrategia proteccionista. Para algunos autores, la agudización del sistema de control de cambios a fines de 1938 “representa la supresión de los últimos vestigios del comercio libre”.⁵⁵

Ahora bien, el punto de partida se halla nuevamente en una situación difícil en la balanza de pagos, en la necesidad oficial de arbitrar recursos para equilibrar un déficit. Pero cada vez era más advertible que esa política incluía la aceptación del crecimiento industrial. Una estrategia para la superación de las dificultades financieras suponía, en la intención de la elite hegemónica, cierto desarrollo industrial para llenar el vacío creado por la oferta extranjera.

Aceptar la industria no es, ciertamente, un fin en sí mismo sino una condición para otros fines, pero esa condición se hace expresa para el mantenimiento de la hegemonía “oligárquica”. La diferencia entre una orientación a la que sólo

le preocupa salvar los intereses “privados” de los hacendados y otra en la que se trata, conscientemente, de integrar esos intereses con los de los industriales, se halla en que el Estado ya no puede resolver, sino al precio de una recesión, de un “reajuste hacia abajo”, el problema de un déficit en la balanza de pagos con medidas puramente monetarias: necesita, a la vez, mantener la actividad económica interna en un cierto nivel, dentro de una sociedad cada vez más diferenciada, en la que la manufactura tiene un rol de creciente importancia. Salvar la industria, entonces, supone contribuir a mantener el sistema. Este carácter permisivo con que la elite ampara el crecimiento industrial, sin poner en discusión el control del proceso, es la base objetiva de la alianza en la que se integra una clase industrial que no reclama mucho más que su supervivencia.

Comentando las consecuencias deseadas por el Poder Ejecutivo de las medidas cambiarias de fines de 1938, el Banco Central traza así sus perspectivas: “Esta medida, aplicada con flexibilidad y eficacia permitirá adecuar las importaciones a la capacidad real de pagos del país y al empleo prudente de las reservas monetarias. *Es lógico esperar que, como está sucediendo, el poder adquisitivo que debido a ello no puede ya estimular desproporcionadamente a la importación se desviará en gran parte hacia la industria*”.⁵⁶

Tras una apreciable disminución del déficit en 1939, el año 40 se presentaba, otra vez, particularmente difícil por el cierre de los mercados europeos a las exportaciones argentinas, derivado de la guerra: en ese año, la balanza de pagos en cuenta corriente acusó un desequilibrio de 138 millones de pesos.

En esas condiciones —y cuando todo parecía indicar que la crisis se agravaría progresivamente— el Ministerio de Hacienda elabora un Plan de Reactivación Económica y lo presenta al Senado, en donde el oficialismo tenía mayoría.⁵⁷

Desde setiembre de ese año, Federico Pinedo, redactor del proyecto, ocupaba otra vez el ministerio.

En sus fundamentos, el plan hacía referencia a la situación del país y a la alarma que debían suscitar los “serios extremos” a que ella se aproximaba. “Grandes excedentes de productos invendibles —resumía Pinedo— significan intenso malestar en la campaña, crisis industrial, desocupación y zozobra en las ciudades, postración general en todas las actividades del país, con repercusiones sociales de imprevisible alcance.”⁵⁸

El plan articulaba una serie de medidas para superar la recesión. “Dirigido especialmente a contrarrestar los temidos efectos de la guerra —comentan Di Tella y Zymelman— contenía disposiciones para la defensa del sector industrial.”⁵⁹

En efecto, entre las medidas propuestas se hallaban, virtualmente, todos los proyectos legislativos reclamados desde hacía décadas por la UIA: leyes de “draw back”, disposiciones contra el “dumping” de los países centrales, créditos a largo plazo para la industria, reajuste de la anticuada legislación de tarifas.

El objetivo del plan era mantener a un nivel satisfactorio la actividad económica. Su punto de partida era la compra por el Estado de los excedentes agrícolas que no podían colocarse, medida reclamada unánimemente por las organizaciones de los propietarios rurales.

Pero no concluía allí, en la limitada frontera de los intereses corporativos agropecuarios. “Es indispensable agregar otros estímulos”, señalaba el proyecto en sus fundamentos, y esos estímulos eran los de la industria, cuya existencia era inequívocamente percibida por los redactores como requisito del statu quo.

En primer lugar, la industria de la construcción; luego, las actividades manufactureras. “Que la industrialización del país conspira contra nuestras exportaciones es un argumento que

se presenta con frecuencia en la discusión de esta materia”, dice el proyecto. Y agrega: “Es un hecho sabido que desde antes de la pasada depresión mundial, las exportaciones argentinas —medidas por su volumen físico— han permanecido en un nivel prácticamente estacionario. Nuestro país no ha tenido, pues, como en tiempos más favorables de su historia económica la alternativa de dedicarse preferentemente a la exportación de cantidades cada vez mayores de productos agrarios, importando en cambio productos manufacturados o la de desenvolver intensamente la industria sacrificando las posibilidades de su exportación”.⁶⁰

“Por el momento —agrega— el país no tiene esa opción en su política económica y no sabría decirse en este instante con alguna seguridad de acierto si la tendrá o no después de la guerra.” Y concluía: “Mientras llegue ese momento el país necesita recurrir decididamente a su industria para suplir en lo que sea posible lo que no puede importar o pagar y evitar el grave mal de la desocupación”.

Aquí vuelve a resumirse con suma precisión el sentido de una política, que manteniéndose dentro de los marcos hegemónicos de la “oligarquía” tradicional convocaba a una ampliación de sus límites para permitir la incorporación de la industria.

El “Plan Pinedo”, intentando legislar sobre todo aquello que el grupo representativo de los industriales reclamaba sin haber sido oído, aparece como el mejor testimonio de ese proceso de movilización de la manufactura bajo control de la elite tradicional que se produce entre 1933 y 1943.

El proyecto estaba absolutamente marcado por una orientación que tendía a salvaguardar, en primera instancia, los intereses de los grandes propietarios rurales. Su “radicalismo” residía en la percepción de que una adecuada defensa de esos intereses abarcaba, por imperio de las nuevas circunstancias mundiales y nacionales, la necesidad de que la industria no

fuera destruida. De tal modo este plan, que incluía las reivindicaciones largamente reclamadas por los industriales y que la UIA había de saludar como suyo, significaba en realidad un lúcido intento de reforzamiento de la hegemonía “oligárquica”. Formulado por la elite tradicional, el Plan no significaba el menor desplazamiento en los centros de decisión económica, social o política.

Su importancia radica en que permite ver, de un solo golpe, la complicada armazón de las alianzas de clase en ese momento; la limitada vocación hegemónica de la clase industrial y el contenido de las orientaciones del principal partido opositor, la UCR, que se ubican como respuesta aún más “tradicional” frente a la perspectiva de la crisis, que la sostenida por los grupos conservadores del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

El “Plan Pinedo” se discutió en el senado los días 17 y 18 de diciembre de 1940. Por el sector oficialista hablaron en su defensa Matías Sánchez Sorondo y José Heriberto Martínez. La oposición frontal al plan, por la minoría, estuvo en boca del representante de la UCR, Atanasio Eguiguren. Finalmente el plan fue aprobado por 17 votos contra tres, pero jamás llegó a ser siquiera tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo era minoría. “El Plan no se aprobó —dicen Di Tella y Zymelman— por considerárselo demasiado ‘radical’ por parte de los grupos terratenientes.”⁶¹

La actitud de las organizaciones económicas frente al proyecto reproduce un espectro ya anteriormente mencionado: sólo la UIA lo aprueba entusiastamente, mientras la SRA, sin rechazarlo, manifiesta algunas reticencias y la CARBAP y las sociedades rurales del interior lo rechazan agresivamente.

El 8 de diciembre de 1940, la UIA envía una nota a Pinedo otorgándole su más “caluroso aplauso” por el proyecto, en la que afirma: “En el plan de V.E. se contempla, quizás por primera vez, una orientación clara y definida en materia eco-

nómica. La UIA no puede sino sentirse complacida al observar la coincidencia de esa orientación con su prédica tesonera mantenida durante muchos años y que los hechos y las circunstancias actuales justifican plenamente”.⁶²

La Sociedad Rural Argentina, por su parte, no rechaza el plan, pero considera necesario reafirmar la premisa de que “la prosperidad de nuestro país está supeditada a la marcha de los negocios agropecuarios”. Lo principal entonces, para la SRA, es la compra de las cosechas. En cuanto a lo demás, “el fomento de las industrias transformadoras que utilicen materias primas del país puede contribuir a mantener la prosperidad económica, pero este fomento debe estar subordinado fundamentalmente a la consideración de nuestro intercambio; no debemos fomentar artificialmente industrias que en un momento de normalidad nos obliguen a recurrir a trabas artificiales para mantenerlas, trabas que dificultarán la reanudación de nuestro intercambio”.⁶³

En realidad, esta “reticencia” no se alejaba demasiado de la actitud de fondo del propio Poder Ejecutivo. El plan, que tanto entusiasmo motivó en la UIA y que, objetivamente, recogía los puntos fundamentales del programa de los industriales, concordaba en su valoración del margen concedido a la expansión de la manufactura, con la opinión que éste merecía de los hacendados más poderosos.

Efectivamente, el mensaje oficial aclaraba el sentido programático de las intenciones del Poder Ejecutivo en defensa de la industria, con estas palabras: “Ello no significa, desde luego, que toda industria deba ser fomentada. Debemos precavernos del error de promover aquellas producciones que tiendan a disminuir las importaciones de los países que sigan comprando nuestros productos en la medida suficiente para permitirnos pagar esas importaciones. De lo contrario crearemos nuevos obstáculos a las exportaciones: hay que importar mientras se pueda seguir exportando”.⁶⁴

Si los industriales aplaudían el proyecto y los grandes hacendados coincidían, finalmente, con él; si la Bolsa de Comercio opinaba que “el fomento industrial responde a una verdadera necesidad”,⁶⁵ ¿en qué grupos económicos de las clases propietarias radicaba la oposición? ¿Quiénes eran los que lo consideraban excesivamente “avanzado”?

Del mismo modo que frente a cada una de las medidas proyectadas desde 1933, eran esta vez las organizaciones representativas del sector ganadero subordinado las más enconadamente opositoras. Este grupo era el único que frente a cualquier intento de industrialización lo percibía como una valla para su supervivencia, en tanto perjudicaría el intercambio exterior, al que se postulaba como núcleo dinámico excluyente de la economía argentina. La orientación a favor del “crecimiento hacia afuera” tenía en estos ganaderos a sus defensores más ortodoxos.⁶⁶

Decía la CARBAP en un memorial de diciembre de 1940, referido al “Plan Pinedo” y a las medidas de protección a la industria que incluía: “Se dice en el informe que la industria nacional no conspira actualmente contra las exportaciones. Hacer esta afirmación es olvidarse de todo el daño que ha hecho a la producción rural con el cierre de mercados naturales como resultado de la política aduanera inconveniente, impuesta desde el año 32, a la que se agregaba el adicional del 10% para saciar las arcas fiscales del Estado. *Pretender, como dice el informe, estabilizar industrias surgidas en medio de soluciones de emergencia es plantear un problema trágico para el futuro del país después de la guerra*; es estimular una lucha que no la deseamos entre la industria y las fuentes básicas de la producción rural, pero si ello sucede debemos declarar que estamos resueltos a defendernos en todos los terrenos *porque tenemos la completa seguridad que mientras una mayor población no absorba los considerables saldos exportables agropecuarios, conspira contra la tranquilidad social del país cualquier medida que no los contemple como fundamentales*”.⁶⁷

Ni siquiera se trata, como en el caso de la SRA, de alertar contra la *promoción* deliberada de industrias “artificiales”; para los ganaderos subordinados la mera *estabilización* de las industrias ya existentes era vista como un perjuicio.

El diario *La Prensa* coincidía con este punto de vista. “La habilitación de empresas industriales es otra invención con pretexto de urgencia y que, con justa razón, alarma a los productores rurales por cuanto su resultado puede ser la adición de nuevas dificultades para nuestras exportaciones al reanudarse el intercambio después de la guerra”, afirma el 19 de diciembre en un editorial significativamente titulado “La reactivación económica radica en el campo”.⁶⁸

En el terreno de los grupos políticos, esta argumentación, ferozmente antiindustrial, será la base de la actitud de la UCR durante el debate.

En efecto, ¿cuáles son las razones que el radicalismo desarrolla contra los capítulos referidos a la industria del “Plan Pinedo”? No la insatisfacción por los límites que el proyecto se fijaba en cuanto apoyo a la manufactura, sino todo lo contrario. “Sin hacer análisis se puede afirmar que al país le cuesta mucho dinero el lujo vanidoso de muchos artículos llamados de la industria nacional que siempre tienen la consabida defensa de los brazos que se emplean”, expresa en un documento referido al proyecto oficialista el Comité Nacional de la UCR. “Podrán caerse todas las chimeneas —agrega— pero mientras el campo produzca y exporte, el país seguirá comprando lo que necesite, seguramente a precio inferior que el determinado por la Aduana para favorecer intereses creados.”⁶⁹

La respuesta de los radicales frente a la grave situación que creaba el descenso de las exportaciones no trasponía los límites de los más estrechos intereses rurales: la compra de las cosechas por el Estado. Pero si el papel del Estado se justificaba en ese caso, “no puede considerarse con igual criterio cuando la solución deja de abarcar ramas medulares e im-

portantes de la producción para extenderse en forma paulatina a otros aspectos de la economía general, sin tomar resoluciones por anticipado de modificar fundamentalmente los sistemas tradicionales clásicos, vamos a una economía dirigida totalmente por el Estado”.⁷⁰

En este sentido, la coincidencia con los grupos rurales desplazados es absoluta. Si el radicalismo intentaba expresar a sectores ajenos a la elite de poder, como lo señala una copiosa bibliografía, no serían éstos las capas medias urbanas ligadas al crecimiento industrial, sino los grupos rurales marginados violentamente por la “oligarquía” tradicional. Así, en relación con las medidas propuestas en el “Plan Pinedo” aceptan su preocupación por el problema de los excedentes pero, a diferencia de la elite hegemónica, no van ni un paso más allá. Todo lo que supere esa frontera sería “estatismo”, “emisionismo”, “inflación”.⁷¹

Frente a la tácita alianza entre los ganaderos privilegiados y los industriales, cuyos intereses el Estado intenta armonizar, la alternativa que parece promover la UCR es la de una alianza en la que participen los grupos agrarios subordinados y las capas medias urbanas no ligadas a la industria; sectores estos “consumidores” más que “productores”, cuyos ingresos no dependen de la industria, sino de los servicios, y a quienes la industrialización les encarecería las mercancías que demandan.

Así, el eje central de las críticas de la UCR al “Plan Pinedo” está centrado en lo que éste tiene de proteccionista. “Acentuamos —dice el documento del Comité Nacional— que el proyecto del Poder Ejecutivo, al hablar de financiación de industrias no se refiere a las del campo: tiene en cuenta solamente a las manufactureras y transformadoras.” Y para que no queden dudas, añade: “Ya sabemos lo que cuesta al pueblo consumidor el producto de la industria artificial que perdura a costa de un grosero proteccionismo que beneficia a uno para perjudicar a mil”.⁷²

Esta opinión no era sólo la de la más encumbrada elite dirigente del partido. Amadeo Sabattini, un heredero de la tradición yrigoyenista y líder del ala populista de la UCR, opinaba así sobre el inevitable destino rural de la Argentina: “País agrícola y ganadero, no dejará de serlo para convertirse en industrial hasta que la población y los años naturalmente lo exijan”.⁷³

Frente a la perspectiva de la crisis, la respuesta de los senadores radicales en la discusión parlamentaria de los proyectos oficialistas es simple: comprar las cosechas; construir caminos; intensificar un programa de obras públicas. En un plazo no inmediato, fomentar la construcción de viviendas. Y algo más: “Hay otro rumbo importante que nuestro plan, el de los legisladores radicales, lo contempla y que dejó completamente de lado el plan del Poder Ejecutivo: nosotros creemos que es necesario reactivar nuestras industrias madres, las dos grandes industrias vitales: la ganadería y la agricultura e intensificar la minería que va tomando un incremento digno de consideración”.⁷⁴

Hacia principios de la década del 40, el dilema en que se movían las clases propietarias acerca de los problemas económicos era éste: o estabilizar un cambio producido casi “espontáneamente” a fin de mantenerlo bajo el control hegemónico de los sectores más poderosos de la “oligarquía”, o rechazar todo cambio y promover el mantenimiento de la situación previa a la crisis. Si la primera alternativa era la que intentaba estructurar la elite conservadora, con dificultades internas y sin homogeneidad total, la segunda se transforma en el programa de los radicales. Una tercera alternativa, la del programa de crecimiento por iniciativa autónoma de sectores medios emergentes de origen industrial —es decir, el modelo clásico de condicionantes sociales del desarrollo— no alcanzó formas institucionales permanentes. Es esta falencia, según nuestra hipótesis, una de las causas que determi-

nará que los cambios hegemónicos en la estructura de poder en la Argentina asuman, pocos años después, formas en las que desempeñarán un rol privilegiado la burocracia estatal y el Ejército, dentro de un proceso al que se incorporarán las clases no propietarias.

5. El papel del Estado: alianza de clases y hegemonía

Uno de los rasgos salientes de la etapa es el crecimiento de los roles asumidos por el Estado en la estructura social. El Estado pasará a ser expresión de la creciente complejidad de las relaciones económicas, reflejando así la diferente articulación de la estructura de éstas, a partir del crecimiento de la industria.

La homogeneidad de la antigua estructura de poder, a través de la cual se expresaban los intereses de las capas agrarias dominantes, beneficiarias de la renta diferencial que proveía el comercio internacional, tiende a quebrarse después del 30, arrastrada por las modificaciones que el equilibrio del sistema requiere en el nivel de la estructura económica, como consecuencia de la crisis.

La complejidad desplegada en esta dimensión refuerza las tendencias del Estado hacia la autonomía, en tanto su rol principal no es ya traducir al nivel de las decisiones políticas los intereses de una clase dominante de origen agrario (o los intereses de una fracción de esa clase dominante), *sino la relación de esos intereses con los de las otras capas propietarias estructuradas alrededor de la acumulación de capital industrial.*

El Estado se realiza así como equilibrador dentro de un bloque de poder más complejo; como moderador de una *alianza* objetivamente estructurada alrededor de los intereses comunes de distintas clases.

Esta percepción de la existencia de intereses comunes, cuyo compromiso como tales surge a partir de los cambios que es necesario promover en la estructura económica, no se configura “espontáneamente”, sino a través de la mediación de un factor, en apariencia externa a esos intereses, que armoniza las orientaciones particularistas. Ese factor constitutivo de una orientación “universalista” que sintetiza tendencias parciales es el Estado, controlado por la elite política tradicional que sustituye el yrigoyenismo.

Los mecanismos de esa proyección “universalista” que puede soldar el bloque de poder operan en dos dimensiones: en primer lugar, a través de la instrumentación de políticas de corto plazo, reservadas a la iniciativa directa del Poder Ejecutivo y cuya dirección es hacia la viabilización de cierto crecimiento industrial, en tanto acentúa barreras de tipo proteccionista. En segundo lugar, por medio del intento de implementar políticas de largo plazo, más integrales (como el Plan Pinedo y sus antecedentes) que necesitan el complicado apoyo legislativo.

Este crecimiento del poder de iniciativa del Estado (que en la realidad económica asume formas intervencionistas no practicadas hasta entonces en la Argentina) le permite estructurar un área de actividad aparentemente autónoma, marcándose un “decalage” entre intereses económicos privados y políticas de gobierno, cuyo origen está en el hecho de que el Poder Público, como instrumentador de una política de largo plazo en salvaguarda del sistema, iba “más allá” de las orientaciones particularistas de cada sector de las clases propietarias.

El Estado deberá asumir la tutela de una alianza entre intereses particulares —que, aunque todavía opuestos parcialmente, han dejado ya de ser contradictorios— y buscará unificar en su seno los compromisos inestables entre clases, propios del tipo de crecimiento propuesto (propios, en ge-

neral, de todo proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, de industrialización sin revolución industrial) en el que un cierto crecimiento de la manufactura aparece jugando un rol importante como requisito del statu quo.

La posibilidad de percibir esos cambios no como disruptivos sino como integradores del sistema de dominio, queda radicada en la elite política, que se transforma en factor constitutivo, a nivel institucional, de una nueva hegemonía, cuya función es compatibilizar el desarrollo de las fuerzas productivas con las nuevas relaciones entre las clases propietarias.

El concepto de “clase dominante”, en la década del 30, debe ser, así, reformulado, en tanto la dominación ya no es ejercida en nombre de la unidad de intereses inmediatos y mediatos de una clase, sino de los intereses de una alianza de clases. Si le damos al término “oligarquía” su significado clásico de monopolio del poder en manos de una elite restringida, durante la década considerada se iniciará un lento proceso por el cual ese núcleo “oligárquico” ampliará sus bases: de una homogénea determinación agraria irá pasando a una combinatoria agro industrial en la que operará como factor aglutinante el capital financiero, nacional y extranjero.

Toda alianza de clases, todo nuevo bloque de poder, no supone indiferenciación entre sus partes. A partir de la percepción de una comunidad de intereses, la particularidad de éstos no se borra. La alianza, en la medida en que es tal cosa y no una fusión, supone la posición hegemónica por parte de uno de sus componentes. La hegemonía, así, sería la potencialidad legitimizada que adquiere un grupo para guiar un sistema de alianzas, para fijar los límites de las orientaciones del nuevo bloque de poder.

Las condiciones estructurales que presentó el desarrollo industrial durante esa década posibilitaron que el control del proceso se mantuviera, a nivel económico, en manos de los grandes hacendados y, a nivel político, en las de los miembros

de la elite tradicional. De tal modo, si el nuevo bloque de poder puede ser definido, en tanto objetivación de intereses, como una *alianza de clases* en la que comienza a participar el sector industrial, la *hegemonía* de éste se mantuvo como hegemonía de los hacendados. Recién al promediar la década del 40 esta relación de fuerzas entre las clases propietarias rurales e industriales se alterará, por la diferenciación que comenzará a operarse dentro de los propietarios industriales, por la movilización de las clases populares y por el fortalecimiento adquirido por el Estado, a través, especialmente, de su área más proclive a cierta autonomización: el Ejército. Sólo entonces la hegemonía de los hacendados se replegará y se abrirá la posibilidad para un movimiento como fue el peronista.

Pero la hegemonía que la oligarquía tradicional mantiene en el sistema de alianzas durante el período, no deriva, exclusivamente, de la mayor coherencia de su ideología, traducida en el predominio de determinados valores u orientaciones en el resto del bloque de poder, sino de una posición, todavía privilegiada, en la estructura económica y social. La posibilidad de los cambios está manejada por los intereses de los hacendados más poderosos, de modo que serán estos intereses los que marcarán los límites del proyecto, las fronteras que no puede traspasar: no habiéndose roto la dependencia radical de los centros externos, el comercio exterior sigue siendo la principal fuente de acumulación y las posibilidades de crecimiento del sistema se miden en los términos fijados por él, y por las clases que de él obtenían sus rentas.

Esto no significa, sin embargo, que los proyectos del Estado, aunque coincidentes con los intereses generales del grupo hegemónico, fueran siempre exactamente representativos de sus orientaciones ni tampoco de sus intereses económico corporativos más estrechos.

Esta discontinuidad explica el porqué de las dificultades que encontró la elite política para poner en práctica propuestas de

largo plazo. Mientras los proyectos económicos más integrales del Poder Ejecutivo encontraban, casi siempre, el apoyo entusiasta de la UIA, la SRA, sin rechazarlos —como lo hacía la CARBAP, por ejemplo—, manifestaba, en cambio, mayor reticencia.

Esta triple orientación —aceptación, reticencia, rechazo— dentro de las organizaciones corporativas de las clases propietarias, se manifestó claramente, como hemos visto, durante la discusión del Plan Pinedo.

Esquemáticamente, las líneas de representación política de las clases propietarias pueden ser rastreadas, durante ese período, en estas direcciones:

- 1) la Sociedad Rural coincide en general con la orientación de la elite política, cuya legitimidad, por otra parte, se funda en el apoyo que le concede, pero se reserva observaciones cuando presume que los proyectos van más allá de los límites fijados por el statu quo;
- 2) la Unión Industrial no manifiesta virtualmente reservas sobre los proyectos y, en todo caso, sus críticas se ejercen contra el Parlamento —en donde el oficialismo al discutirse el Plan Pinedo no tiene mayoría— al que acusan de trabar la “acción constructiva” del Poder Ejecutivo;
- 3) la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, o sea la organización que representa al grupo ganadero subordinado, rechaza las orientaciones del Estado, nutriendo las bases de las argumentaciones de la oposición, como se advierte en la actuación parlamentaria de Lisandro de la Torre y en las formulaciones de la UCR durante la discusión del Plan Pinedo.

Si un corte más o menos elemental que busque vincular intereses económicos con orientaciones políticas nos permi-

te compatibilizar a los hacendados más poderosos con los grupos conservadores y al grupo subordinado de los ganaderos con el radicalismo, la relación entre industriales y núcleos políticos será menos lineal.

En principio, durante todo el período es difícil encontrar reclamos de participación directa por parte de los industriales, quienes parecen, en cambio, aceptar la representación de sus intereses que les ofrece el gobierno. En su relación con el Estado tratan de utilizarlo como estrato protector más que efectuar reclamos de hegemonía.

Por otra parte, no se advierten intentos de estructurar una fuerza política independiente, claramente representativa de sus intereses. El objetivo central parece ser influir sobre personalidades de la elite tradicional a las que reiteradamente se hace participar de tribunas en las que se defiende el programa de los industriales. Otro intento de influencia era en dirección de los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes se visualizaba como los más probables partidarios de la industria dentro de la elite dominante.

También en esta falta de agresividad en relación con su autonomía política pueden ser advertidas las limitaciones de las expectativas de los industriales, que no iban más allá de la exigencia de garantías institucionales que ratificaran, por vía de la legislación, los beneficios del proteccionismo “espontáneo” con que el Poder Ejecutivo había facilitado su expansión. Y esto podía lograrse sin necesidad de desplazar a la elite política; antes bien, contribuyendo a reforzar sus posiciones frente a las trabas que, básicamente, le imponían los grupos opositores.

La elite política, por su parte, no intentaba contradecir las presiones de los industriales, porque ellas no significaban modificaciones en el statu quo. Al contrario: si el Estado intentaba expresar lúcidamente el nuevo punto de equilibrio social derivado de la mayor complejidad del sistema de domi-

nio, las orientaciones menos tradicionales de los industriales en relación con las de los hacendados, combinadas con el carácter no disruptivo de sus reclamos, se convertían en el eje posible del proyecto de cambios. Toda la actividad persuasiva de la elite política —y eso es particularmente claro en la discusión del Plan Pinedo— tiende a convencer al grupo de los hacendados que los cambios que se proponen —y que los industriales apoyan entusiastamente— no amenguarán su hegemonía en el bloque de poder. Pinedo lo dirá expresamente en los debates de 1940: “No creemos que sea posible ni conveniente cambiar las bases económicas del país. No pensamos en establecer la autarquía. Tengo dichas sobre el punto palabras clarísimas y categóricas: no creo que importar sea un mal, no tengo ninguna prevención por lo que se llama el carácter agrario de nuestro país; no creo que eso sea desdoro, aunque en alguna parte de la literatura económica universal se considere que las masas agrarias con respecto a las industriales están en una situación de inferioridad”. Y concluía: “No pensamos llegar a una industrialización total, masiva, del país, pero no hay por qué abandonar algunas producciones industriales totalmente sanas, tan sanas como la de fabricar trigo poniendo semillas en los surcos o fabricar carnes haciendo pacer los pastos por el ganado”.⁷⁵

Notas

- 1 La referencia central al crecimiento de la industria en la década del 30 no significa ignorar la existencia de un proceso previo de desarrollo de la manufactura, que en la Argentina arranca desde fines del siglo XIX. Un análisis de esta primera etapa podría iluminar también —como nos proponemos en este trabajo para el período 1930-1943— la particularidad de las relaciones entre grupos de propietarios rurales e industriales en términos de fusión, oposición o alianza de clases.
- 2 Un alejamiento más radical del modelo se advierte cuando, admitiendo la validez de la descripción de la orientación de los terratenientes, se supone que o no hay grupos burgueses en general o industriales en particular o son muy limitadas sus actividades y dependientes del sector terrateniente. En este caso, las orientaciones de los grupos burgueses o de los sectores medios locales se asimilan a las orientaciones de los terratenientes y se señala que todo cambio debe originarse en influencias externas. *Cfr.* Seymour Lipset, “Elites, educación y función empresarial en América Latina”, S. M. Lipset y A. E. Solari (compiladores), *Elites y desarrollo en América Latina*, Buenos Aires, 1967, y Bert Hoselitz, “El desarrollo económico en América Latina”, *Desarrollo Económico*, vol. 2, N° 3, octubre-diciembre 1962.
- 3 Véase, en especial, *Revolución y Contrarrevolución en la Argentina*, Buenos Aires, 1961.
- 4 Guido Di Tella y Manuel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, 1967; Walter Béveraggi Allende, *El servicio del capital extranjero y el control de cambios*, México, 1954; Aldo Ferrer, *La economía argentina*, México, 1963.
- 5 *Cfr. Argentina: su desarrollo capitalista*, Buenos Aires, 1965.
- 6 Véase, en especial, “Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina”, *Estrategia*, Buenos Aires, setiembre 1957. Las tesis de Peña se encuentran desarrolladas en *Fichas de investigación económica y social*, número dedicado a la “Evolución industrial y la clase empresaria argentina”, vol. 1, N° 1, abril de 1964.
- 7 En la expresión “clase dominante”, englobamos sólo a quienes controlan medios de producción, sean ellos terratenientes o industriales, y dejamos de lado a los propietarios de capital comercial y financiero, pese a que en nuestra hipótesis, durante la década del 30, el control que sobre la economía argentina ejerce el capital financiero, principalmente extranjero, es ya decisivo. Nuestro análisis simplificará, entonces, las relaciones de fuerza enfocando sólo a propietarios agrícolas e industriales y sus expresiones corporativas y políticas; esta simplificación nos lleva a no analizar todavía explícitamente las orientaciones de los grupos locales como función de la influencia de las potencias imperialistas o de los conflictos entre esas potencias, particularmente significativos, en el caso de Gran Bretaña y los Estados Unidos, a partir de 1930, para la Argentina.
- 8 Para los fines de nuestro trabajo, como se verá, sería más pertinente hablar de alianza entre sectores o fracciones de clase, dado el corte que se produce en el grupo agrario. A pesar de ello, mantenemos el término en su versión más genérica.
- 9 Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, pág. 436.
- 10 La versión clásica de este tipo de análisis sigue siendo el conocido libro de John J. Johnson, *La transformación política de América Latina*, Buenos Aires, 1962.
- 11 Un enfrentamiento abierto entre proyectos oficiales y aspiraciones de los industriales sólo parece producirse —como veremos más adelante— en los primeros meses del gobierno de Justo, antes de que Federico Pinedo desplazase del Ministerio de Hacienda a Alberto Hueyo. Pero aun en esa oportunidad la contradicción entre ambas perspectivas no durará mucho tiempo: los reclamos de la UIA encontrarán rápida coincidencia con los proyectos del sector de la elite política que asumirá la conducción de la economía a fines de 1933.
- 12 Utilizamos el concepto de “hegemonía” en la dirección que lo hace Antonio Gramsci. *Cfr.*, en especial, *Il Risorgimento*, Turín, 1954 y *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y el Estado moderno*, Buenos Aires, 1962, aun cuando nuestro uso en este trabajo se circunscribe a la hegemonía que una clase o fracción de clase ejerce en el interior de una alianza y no a la posibilidad de “consenso” mediante la cual la clase dominante integra en sus valores a la clase dominada.
- 13 De 58.000 establecimientos industriales inscriptos en 1941 en el Registro de la Dirección General de Estadística, las empresas industriales funda-

- das antes de 1930 ocupaban el 70% del total de la mano de obra empleada y fabricaban más del 80% del valor de la producción. Sobre un total de 23.000 empresas censadas, el 60% habían sido fundadas antes de 1930. *Cfr. Revista de Economía Argentina*, tomo 43, n° 307, enero de 1944.
- 14 Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, pág. 116.
- 15 *Cfr.* María Conceição Tavares, "Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones en Brasil", *Boletín Económico de América Latina*, CEPAL, vol. IX, N° 1, marzo de 1964.
16. En 1938 más del 50% del capital total de la industria estaba en manos de empresas extranjeras. "Estos capitales dominan en forma monopolista varias ramas de la actividad industrial del país como, por ejemplo, frigoríficos, usinas eléctricas, compañías de gas, cemento, armado de automotores, elaboración de artículos de caucho, seda artificial y otros, ejerciendo una influencia de peso en algunas otras como tabaco, petróleo, fabricación de conductores eléctricos, de aparatos para radiotelefonía, productos farmacéuticos, galvanización de chapas de hierro, ascensores, etc." Adolfo Dorfman, *La evolución industrial argentina*, Buenos Aires, 1938, p. 259. El mayor número de las inversiones privadas vino, durante la época, de los Estados Unidos. *Cfr.* Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, p. 443.
- 17 Hasta octubre de 1943 fue ministro de Hacienda del gobierno militar Jorge Santamarina, que durante los gobiernos conservadores ocupaba el cargo de titular del Banco de la Nación. Otro miembro del equipo que acompañó a Federico Pinedo, el doctor Ernesto Malaccorto, fue en los primeros meses del gobierno militar subsecretario de Hacienda.
- 18 *La Argentina en la depresión mundial*, Buenos Aires, 1938, p. 363.
- 19 *Una nueva Argentina*, Buenos Aires, 1940, p. 244.
- 20 *Ibid.*, p. 271. En 1940, Luis Colombo, presidente de la Unión Industrial, decía: "Reconocemos que desde 1931 los gobiernos que se han sucedido han procurado mejorar la situación industrial del país". *Revista de Economía Argentina*, tomo 39, N° 268, octubre de 1940.
- 21 El texto del convenio puede hallarse en *Tratados de Comercio de la República Argentina*, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1938, p. 25 y siguientes. En general, la literatura sobre este tema sólo hace hincapié en los aspectos leoninos del convenio, manifestados a través de las concesiones que la Argentina, como nación, hacía a Gran Bretaña para satisfacer los intereses de la elite de ganaderos. Sin desconocerlos, nos parece más significativo, en función de las relaciones de fuerza de las clases locales, analizarlo desde la perspectiva de la división que la firma del pacto produ-

- ce en el sector ganadero y, consiguientemente, de la posibilidad, aparentemente paradójica, que abre para una alianza, convocada desde el poder, que incluya a los industriales. Nuevamente tendríamos que repetir lo afirmado en páginas anteriores acerca de que la promoción del crecimiento industrial no adquiere, dentro del encuadre teórico en que está concebido este trabajo, una valoración históricamente positiva en sí misma, en tanto el dilema fundamental de la sociedad argentina no parece encerrarse en la estrecha alternativa de "modernización" o "tradicionalismo".
- 22 *Argentina en el callejón*, Montevideo, 1964, p. 31.
- 23 *Anales de la UIA*, N° 773, mayo de 1933, p. 23.
- 24 *Ibid.*, N° 774, p. 27.
- 25 *Ibid.*, p. 28.
- 26 *Ibid.*, p. 36.
- 27 *Ibid.*, p. 40.
- 28 Nota a Agustín P. Justo, en *Anales de la UIA*, N° 780, diciembre 1933, p. 4.
- 29 *Ibid.*, p. 9.
- 30 *Revista de Economía Argentina*, tomo 32, N° 187, enero 1934.
- 31 Beveraggi Allende, *op. cit.*, p. 157.
- 32 *Revista de Economía Argentina*, tomo 32, N° 187, enero 1934.
- 33 *Anales de la UIA*, N° 775, julio de 1933, p. 32.
- 34 *El Plan de Reactivación Económica ante el Honorable Senado*, Ministerio de Hacienda, Buenos Aires, 1940, p. 156.
- 35 Señala Dorfman: "El progreso industrial se ha hecho pasando sobre los cadáveres de las empresas más atrasadas, pero preparadas para afrontar la elevación del nivel productivo social, que han sucumbido para dejar el camino a las más grandes y mejor respaldadas por potencialidad financiera y conocimientos técnicos", *op. cit.*, p. 188. En 1937, el 57,6% del total de la producción industrial correspondía al 1,4% del total de las empresas. *Cfr.* Adolfo Dorfman, "El proceso de concentración en la industria argentina", *Revista de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas*, serie segunda, Universidad de La Plata, octubre 1940.
- 36 Entre esas voces incluimos, especialmente, a algunos integrantes de FORJA, núcleo disidente de la UCR de origen yrigoyenista. La opinión del Partido Comunista a favor de la industrialización puede encontrarse en un folleto programático, *Libertad e independencia de la patria*, Buenos Aires, 1941. Incluso con posterioridad a 1940 los planteos favorables al crecimiento industrial en las discusiones parlamentarias eran escasos. La excepción más notoria estaba dada por un diputado radical antiper-

sonalista por Santa Fe, Francisco Scarabino, que en todos los debates sobre política económica exigía, solitariamente, medidas de apoyo a la industria. *Cfr.*, entre otros, *Diario de Sesiones* de la Cámara de Diputados de la Nación, Tomo 2, 1941, p. 446 y ss.; Tomo 3, 1941, pp. 256 y 553; Tomo 2, 1942, p. 916 y ss.

37 Los reclamos de los industriales pueden hallarse en innumerables documentos, presentaciones y memoriales de la UIA, así como en los discursos anuales de Luis Colombo, pronunciados en ocasión del Día de la Industria. El 2 de setiembre de 1941 Colombo resume así las exigencias de los industriales: ley “antidumping”; “draw back”; ley de licitaciones, para favorecer a los empresarios nacionales frente a las industrias extranjeras; revisión de las tarifas aduaneras. En materia de legislación social se reclamaba la reforma de la ley 11.729 y de la ley 11.317, que prohibía el trabajo a los menores “para que puedan trabajar y hacerse hombres útiles, aportando salarios de aprendices en vez de pervertirse en las calles y convertirse en vagos o delincuentes”. *Cfr. Revista de Economía Argentina*, tomo 40, N° 279, setiembre 1941, p. 288.

38 Ricardo M. Ortiz, *Historia Económica Argentina*, tomo 2, Buenos Aires, 1954, p. 114.

39 *La ganadería Argentina es una sola*, Buenos Aires, 1939.

40 Horacio Giberti, *El desarrollo agrario argentino*, Buenos Aires, 1964, p. 12. La base tecnológica para el predominio de la capa de los “invernadores” es el progreso de la industria frigorífica que permite la exportación de carne enfriada (“chilled”), la que supera en calidad a la congelada, por ser virtualmente similar a la carne fresca. El nuevo sistema comenzó a aplicarse al finalizar la primera década del siglo, pero su gran expansión arranca de los años veinte, en el transcurso de los cuales el “chilled” desaloja de los primeros puestos de la exportación pecuaria a la carne congelada. La producción de “chilled” requiere animales de buena raza y especial preparación. Además, como debe consumirse entre los 40 o 45 días posteriores al sacrificio del ganado exige una oferta constante (de ahí la necesidad de contar con buenas pasturas todo el año, especialmente durante los meses de invierno) para satisfacer a la demanda, a diferencia del congelado, que puede abastecer a una demanda constante con una producción estacional. Esta especialización, esta división del trabajo entre los productores ganaderos, estructurará las bases de una diferenciación social, al posibilitarle al grupo “invernador” el virtual monopolio del comercio de carnes con Inglaterra.

41 En las elecciones realizadas ese año en la Sociedad Rural la lista con la que se identificaban los “criadores” era la encabezada por Pedro Pagés. La lista vencedora representativa de los intereses de los “invernadores” estaba encabezada por Luis Duhau y la integraban, además, Eduardo G. Drabble, Miguel Ángel Cárcano, Philip A. S. Dawney, Horacio Bruzzone, Héctor M. Guerrero, Carlos Pueyrredón, Enrique Santamarina, Federico Martínez de Hoz y Enrique Santamarina (h). Comenzando por Duhau, la mayoría ocupó cargos públicos después del 30. Sobre la actuación de Pagés, véase Peter H. Smith, “Los radicales y los intereses ganaderos”, *Desarrollo Económico*, vol. 7, N° 25, abril-junio de 1967.

42 Giberti, *op. cit.*, p. 47.

43 Sobre las consecuencias del pacto, opinaba así Pedro Pagés: “Ése ha sido el gran triunfo de los Dominios en Ottawa, que obtienen elevando los porcentajes de sus exportaciones a expensas nuestras, en ovino y congelado bovino. Puede observarse que en lo que nos afecta en mayor grado la Conferencia de Ottawa es en la carne congelada ovina y bovina y en menor grado la ‘chilled-beef’”, cit. en Nemesio de Olariaga, *El ruralismo argentino*, Buenos Aires, 1943, p. 137.

44 *Obras*, tomo II, Buenos Aires, 1952, p. 92.

45 Olariaga, *op. cit.*, p. 23 (el destacado es nuestro).

46 *Ibid*, p. 99.

47 *Ibid*, p. 338.

48 Acerca de la lucha por el control de la CAP puede consultarse, entre otros, Rodolfo Puiggrós, *Nacionalización y libre empresa en la industria de la carne*, Buenos Aires, 1957, y José V. Liceaga, *Las carnes en la economía argentina*, Buenos Aires, 1952.

49 Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, pp. 431 y 432.

50 Olariaga, *op. cit.*, p. 384.

51 *Ibid*, p. 389.

52 CARBAP, *Tercer Congreso Rural Argentino* (agosto de 1942), p. 57 (el destacado es nuestro).

53 CARBAP, *XX Congreso Rural*, La Plata, 1942, p. 10.

54 Beveraggi Allende, *op. cit.*, p. 186.

55 *Ibid.*, p. 196.

56 *Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual*, 1938, p. 22 (el destacado es nuestro).

57 En la Cámara de Diputados, sobre 158 legisladores, 76 pertenecían a la UCR, y 56 a la suma de conservadores y antipersonalistas. Los so-

- cialistas contaban con cinco representantes y había 21 representantes de núcleos radicales provinciales.
- 58 *Hechos e Ideas*, año VI, N° 38/39, Buenos Aires, enero de 1941, p. 251.
- 59 Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, p. 475.
- 60 *Hechos e Ideas*, cit., p. 258.
- 61 Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, p. 535.
- 62 *Argentina Fabril*, año LIII, N° 863, noviembre de 1940, p. 3. La *Revista de Economía Argentina* califica al plan como “acontecimiento histórico en la vida del país”, Tomo 39, N° 270, diciembre 1940.
- 63 *Anales de la Sociedad Rural Argentina*, N° 12, diciembre 1940, p. 979.
- 64 *Hechos e Ideas*, cit., p. 258.
- 65 *La Prensa*, 12 de diciembre de 1940.
- 66 Otro bastión del libre cambio era el Centro de Importadores. En un memorial elevado a la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 1941, reclama la derogación del impuesto del 10% a las importaciones establecido por el gobierno de Uriburu y mantenido posteriormente pese a que se lo había declarado “provisorio”. El mantenimiento de este impuesto, que en un principio halló justificación en meras razones de tipo fiscal pero que luego sobrevivió a pesar, incluso, de las expresas recomendaciones para su derogación contenidas en el Pacto Roca-Runciman, es un buen indicador del compromiso de la elite dominante con los industriales.
- 67 *El Plan de Reactivación Económica del Poder Ejecutivo Nacional*, Exposición de CARBAP en el VI Congreso de Sociedades Rurales de Concordia, diciembre 1940, p. 12 (los destacados son nuestros).
- 68 Edición del 19 de diciembre de 1940.
- 69 Informe de la Comisión Especial del Comité Nacional de la UCR dado a conocer el 19 de diciembre de 1940. *Hechos e Ideas*, ed. cit., p. 307.
- 70 Proyecto de ley de financiación de la cosecha presentado a la Cámara de Diputados por los representantes de la UCR. *Hechos e Ideas*, ed. cit., p. 285.
71. *Hechos e Ideas*, ed. cit., p. 285.
- 72 *Ibid*, p. 307.
- 73 *Ibid*, p. 329. Las opiniones de Sabattini pueden ser cotejadas con las de otros dirigentes radicales que participan de una encuesta: todos combaten al plan por su industrialismo o por su “estatismo”.
- 74 *Hechos e Ideas*, ed. cit., p. 413.
- 75 *El Plan de Reactivación Económica ante el Honorable Senado de la Nación*, Ministerio de Hacienda, Buenos Aires, 1940, pp. 143 y 156.

Segunda parte

EL MOVIMIENTO OBRERO EN LOS ORÍGENES DEL PERONISMO

1. Heterogeneidad obrera y nacionalismo popular

Uno de los temas centrales para la mayoría de los análisis acerca de los llamados movimientos nacional populares de América latina, particularmente en sus subtipos “peronista” y “varguista”, es el de las relaciones entre esas variantes del populismo y la clase trabajadora.

El problema se plantea en la medida en que se comprueba que esos movimientos —cuya ideología, según el modelo europeo, suele ser genéricamente calificada como “fascista”— obtienen el apoyo de vastos sectores de obreros industriales, siendo que esa adhesión no resultaría compatible con el modelo clásico de orientaciones de la clase obrera movilizada.

El punto de partida de ese modelo clásico de actitudes obreras está dado por una proposición según la cual la orientación propia de los trabajadores industriales debe conducir al apoyo a movimientos inspirados en postulados de clase, sean esos movimientos de tipo reformista o revolucionario, nutridos por ideologías de “izquierda” y fuertemente impregnados de tendencias hacia la defensa de su autonomía en relación con las elites políticas de otro origen social.¹

El apoyo obrero al populismo, frecuente en los países dependientes y periféricos, aparecería así como una desviación de ese modelo. Un modo típico de integrar conceptualmente el apoyo obrero a los movimientos nacional populares con la teoría clásica de las orientaciones obreras consiste en postular, para aquellos países que se industrializan tardíamente,

la existencia de un corte interno en la clase obrera, originado en los diferentes momentos de integración de los trabajadores a la industria.

Las conductas ajustadas al modelo se atribuyen entonces al sector de trabajadores “viejos” (aquellos que propiamente deben ser considerados como “obreros”) y las orientaciones desviadas a sectores que, aunque incorporados a la industria, de algún modo no serían plenamente obreros. El primer grupo estaría constituido por aquellos trabajadores, en su mayoría de origen europeo, formados a través de una larga experiencia dentro de la disciplina del trabajo industrial, y el segundo, en cambio, por los obreros más recientes, “nuevos” no sólo para el ámbito de la empresa industrial sino también para la vida urbana, pues se trataría, en su enorme mayoría, de migrantes provenientes de las zonas campesinas más atrasadas.

Esta distinción teórica entre “nueva” y “vieja” clase obrera de los países recientemente industrializados se vincula más genéricamente con una conceptualización que propone encontrar las bases sociales del “autoritarismo” y del “totalitarismo” en estratos y clases que, según la etapa del proceso de industrialización en que se hallen las sociedades a las que pertenecen, se transforman en masas “desplazadas” y por lo tanto “disponibles” para su manipulación por una elite.

En el caso del fascismo europeo se acepta que ese sector estuvo constituido por la baja clase media.² El “autoritarismo” de los movimientos populistas latinoamericanos, concretamente del “peronismo” y del “varguismo”, sería función del proceso de rápida industrialización posterior a 1930, el que tiene lugar “mientras las clases trabajadoras están relativamente mal organizadas en sindicatos y partidos y en las poblaciones rurales existen todavía reductos de conservadorismo tradicional”. “En el grado en que exista una

base social para la política extremista en esta etapa del desarrollo económico, la misma no reside en las clases medias sino en las clases trabajadoras en ascenso todavía desorganizadas, que sufren las tensiones inherentes a una rápida industrialización.”³

A partir de estos supuestos, la explicación de las relaciones entre movimientos populistas y clase obrera será especificada, entonces, como relación entre “totalitarismo” (entendido en sentido lato como fórmula de participación hostil a la democracia representativa de estilo occidental) y *nueva* clase obrera.

Los comportamientos de los “viejos” obreros incorporados a la fábrica durante la primera etapa de crecimiento industrial, y su relación con la génesis de los movimientos nacional populares o es relegada como punto de interés teórico o es conceptualizada explícitamente como opuesta al populismo, cuyo surgimiento queda explicado, por añadidura, como manifestación del fracaso de los “viejos” en sus tentativas de integrar a los “nuevos” en sus orientaciones y en sus estructuras organizacionales.⁴

Estos nuevos obreros, verdaderos y virtualmente únicos protagonistas del apoyo de masas al populismo, poseerían una serie de características distintivas que separarían radicalmente sus orientaciones de las de los obreros “viejos”. En primer lugar se trataría de masas populares atraídas más por la vida urbana que por el trabajo industrial, de modo que sus experiencias estarían preferentemente impregnadas por los valores de movilidad ascendente incluidos en su desplazamiento del campo a la ciudad, y no por las notas típicas de la “condición obrera” estructurada a partir del ingreso en la fábrica. Sobre esta base se diseñarían los siguientes rasgos distintivos en términos de orientaciones, centrales para definir su participación en el área política.⁵

- 1) predominio de un sistema de valores orientado hacia la búsqueda individual de ventajas económicas;
- 2) sentimiento de pertenencia a un grupo primario, en lugar de solidaridad de clase conducida por principios ideológicos;
- 3) conciencia social en términos de “pobres” y no de clases.

Esta orientación normativa, como indicadora de una fractura en el interior de la clase obrera definida en términos socioculturales pero estructurada a partir de características situacionales diversas, llega a tener una importancia decisiva para el análisis de las actitudes políticas, en tanto se traduce luego en una separación organizacional entre obreros “viejos” y “nuevos”, que no participan de organizaciones comunes, y convierte a los “nuevos” en “masas disponibles” cuya existencia da lugar a la formación de movimientos populistas que las canalizan.

Uno de los puntos centrales para la distinción entre “viejos” y “nuevos” es la dicotomía entre tendencias a la acción autónoma y tendencias a la acción heterónoma que caracterizarían sus respectivos comportamientos políticos. En general, las interpretaciones acerca del papel que los obreros “nuevos”, como expresión de las “masas desplazadas” de que habla Lipset, tienen en la génesis de los movimientos populistas va unida a la consideración de estos movimientos como casos de manipulación de masas pasivas o heterónomas, transicionalmente desorientadas. Dentro de ese enfoque se tiende a acentuar que la base fundamental para la participación de esas masas en el movimiento populista es la satisfacción de tipo *emotivo* que la participación en un movimiento globalizante les procura.⁶

En ese sentido, parece quedar descartada toda interpretación que explique la participación en el movimiento popu-

lista sobre la base de la coincidencia en un proyecto de desarrollo ligado a intereses de clase; la manipulación se convierte en el lazo básico entre “masas” y líder del movimiento.⁷

Dentro de un marco general en el cual la satisfacción emocional derivada de formas de participación masiva es considerada central, se admite a veces que también *intereses* o proyectos individuales pueden desempeñar un papel en la adhesión de los obreros “nuevos” al movimiento. Pero esos intereses son definidos como *inmediatos* y lo que queda descartado aparentemente en esos análisis es la ligazón entre esos intereses inmediatos y otros intereses propios de la situación de clase a mediano o largo plazo que pudieran configurar las bases para una alianza explícita entre los trabajadores y otras clases y grupos sociales.

Este énfasis puesto en el corte entre obreros “viejos” y obreros “nuevos” como condición del populismo, no aparece solamente en la literatura más estrictamente sociológica sobre el tema. La preocupación por buscar en un proceso de heterogeneización de la clase obrera las bases sobre las que se estructuró la viabilidad política del nacionalismo popular también orienta, por ejemplo, el cuadro de las proposiciones habituales que pueden reconstruirse en el examen de la literatura sociopolítica argentina dedicada al tema del peronismo.

Claro está que aun cuando el punto de partida sea el mismo, las consecuencias que se atribuyen al proceso difieren sustancialmente. Para la mayoría de los autores enrolados en una corriente que pretende enfatizar los significados revolucionarios que asumió el peronismo, el punto clave de su argumentación sigue siendo la distinción entre obreros viejos y obreros nuevos que se produce a mediados de la década del 40, pero los separa rotundamente de la literatura académica la valoración explícita que efectúan acerca de las características de dicho enfrentamiento.

En este modelo los nuevos, más espontáneos e incluso más cercanos a la naturaleza son, dentro de la clase obrera, quienes más capacitados se hallan para romper con el inmovilismo y la ligazón con intereses inmediatos propia de los viejos, alienados en una orientación reformista que conduce finalmente a la colaboración con las clases dominantes.

Uno de sus representantes señala al referirse a la división que se produce en el interior de la clase obrera en momentos de los orígenes del peronismo: “La otra ala del movimiento obrero del país está dada por el caudal de los jóvenes nativos, descendientes de los criollos y gauchos de las montoneras, que bajan a la ciudad-puerto. Son ellos los que se ven obligados a levantar las denominadas ‘villas miseria’ por la carencia de viviendas. Sus brazos fuertes se tornan hábiles al contacto con las máquinas y herramientas mecánicas. Poseen una mentalidad virgen sin mayor experiencia y conciencia de su ubicación como clase en la sociedad moderna. Hasta la tradición de sus antepasados se halla quebrada por el triunfo de la oligarquía porteña que había arrasado con el interior. Arrinconados en su terruño, puestos de espalda al país, olvidados, relegados por la minoría capitalina que monopolizaba todo, traen un resorte poderoso que, al ser puesto en libertad, configura el verdadero rostro de nuestro pueblo, amordazado desde hacía 80 años. La fuerza de estos hombres provenía de las mismas entrañas de la tierra y del pueblo argentino y ello los capacita a marcar un nuevo rumbo nacional”.⁸

Los mismos rasgos que para la literatura académica aparecen como condicionantes de pasividad, heteronomía e inmediatez en los reclamos, para los ensayos positivamente orientados hacia el peronismo surgen como causa de actividad dirigida hacia programas revolucionarios de largo plazo. “De las provincias mediterráneas bajaron los ‘cabecitas negras’ [...] Los rústicos pastores criollos descendientes del montonero

epónimo se trocaron en obreros industriales y constituyeron la espina dorsal de nuestro joven proletariado. Venían sin tradición sindical ni política, elevados en la escala de la civilización al pasar del campo a la ciudad, envueltos en un nacionalismo elemental, vernáculo, ingenuo y hondo, que debía chocar necesariamente con las formas políticas arcaicas y europeizantes de los partidos sobrevividos en la ciudad-puerto.”⁹

Estas referencias acerca del peso que la literatura política le otorga a los nuevos obreros en la configuración del peronismo, en coincidencia con otros análisis enmarcados dentro de la teoría sociológica, tienen la intención de ejemplificar cómo el papel privilegiado de los migrantes del interior parece ya un dato de sentido común para todo análisis.¹⁰

A partir de esta percepción generalizada, compartida por intérpretes de la más variada extracción, nuestro objetivo será poner en duda los supuestos que parecen más obvios como explicación eficiente del proceso de configuración de un movimiento nacional popular en las condiciones propias de la Argentina al promediar la década del 40.

El primer paso para ello debe consistir, necesariamente, en una explicitación de los supuestos más generales acerca de los alcances de dicha diferenciación entre obreros viejos y obreros nuevos, en sociedades en tránsito hacia la industrialización dentro de áreas periféricas, tal como ellos surgen de la literatura teórica más difundida.

Señalamos ya que dichas teorías, utilizadas para especificar la relación que se manifiesta entre clase obrera y movimiento populista, incluyen proposiciones acerca de:

- a) bases objetivas de la diferenciación entre “viejos” y “nuevos”;
- b) diferenciación en términos de orientaciones (especificada en algunos casos como diferenciación en términos de intereses).

Trataremos ahora de pasar revista a la teoría en estas dos áreas para ver, luego, en qué medida sus supuestos tienen aplicación en nuestro caso o bien se trata de una traslación a las condiciones de la sociedad argentina de hipótesis aplicables a otras sociedades de diferente grado de desarrollo.

En verdad, si bien dentro de esa literatura algunos autores han englobado distintos regímenes, tales como el peronismo y el varguismo, bajo la categoría de nacionales populares, homogeneizando así de algún modo sus características y sus causas, la mera presentación de las características de los regímenes y de las condiciones ligadas a su emergencia, hace necesario introducir diferenciaciones que pueden llegar incluso a poner en duda la presencia de un marco conceptual y de una teoría causal común que permita tratarlos como casos de la misma categoría.

En lo que sigue partiremos de aquellos aspectos que creemos aparecen como comunes en dos modelos, derivados del caso brasileño y del caso argentino, que, con el paso del tiempo, han ido consolidándose como descripciones teóricas de todos los regímenes nacionales populares. Luego mostraremos cómo ciertas dimensiones son manejadas por ambos tipos de modelos pero presentando ya distintos valores como propios de uno u otro régimen.

El nivel de las orientaciones

El punto de mayor coincidencia entre ambos enfoques se da en el nivel de las orientaciones que se atribuyen globalmente a los obreros viejos por contraste con las que se adjudican a los nuevos.

Los primeros, a diferencia de los recientemente incorporados a la industria, tendrían definido un marco normativo estable, dentro del cual se encontrarían en condiciones de definir intereses específicos propios y de buscar formas orga-

nizativas presumiblemente adecuadas a esos intereses. A partir de estos supuestos, sus conductas serán definidas conceptualmente en términos del modelo clásico de orientaciones obreras y no poseerán ningún interés teórico particular.

Los obreros nuevos por su parte serían incapaces de desarrollar un programa propio de reivindicaciones que incluya reclamos de autonomía, así como una programación de metas que fueran más allá del corto plazo.

Esta incapacidad de autonomía se proyectaría al plano institucional. Los comportamientos heterónomos de los nuevos obreros estarían motivados por su oscilación pendular entre dos polos de exigencias: por un lado, la necesidad de participación afectiva en un orden social; por el otro, la urgencia de resolver problemas muy inmediatos. La heteronomía y la inmediatez derivadas de la urgencia de un soporte integrador totalizante y de nivel emotivo, junto con la carencia de un marco normativo referencial, instrumentado sobre una racionalidad a mediano y largo plazo, sólo dejarían abierto el camino de la pasividad.

Si la imagen de la "situación normativa" de los nuevos implica cierta mezcla de desorganización anómica con restos de tradicionalidad, en el caso de los viejos, por el contrario, la posesión de un claro punto de referencia autónomo representado por un sistema normativo y una percepción clara de su ubicación dentro de la sociedad, les permitirá guiarse más por la búsqueda de satisfacción a mediano y largo plazo y a autoorganizarse para ello, en encuadres asociativos propios, de tipo político o gremial.

El comportamiento político de los nuevos, en cambio, orientados por su esquema normativo hacia la satisfacción de una necesidad convergente de participación emotiva y de soluciones para problemas inmediatos e individuales, los alejará de las tradiciones de autonomía sostenidas por los viejos obreros, llevándolos a integrarse en un movimiento nacional

popular, dirigido por una elite ajena a la clase obrera, que, desde el poder, les proporcionará los canales para la participación social y política, aunque ella sea finalmente ilusoria y por lo cual deban sacrificar su posibilidad de autonomía.

El populismo se define así a partir de la situación de desplazamiento en que llegan a encontrarse grandes contingentes humanos, lo que los transforma en masas manipulables.

Ahora bien, en este nivel es necesario destacar una diferencia significativa en los dos modelos en cuanto a la génesis de este carácter manipulable, heterónimo, inmediateista atribuido a las nuevas masas obreras. Ciertamente, el esquema explicativo derivado del caso brasileño supone, del mismo modo que el elaborado a partir de la situación argentina, que el factor fundamental para la emergencia de este tipo de orientación es el cambio reciente a que están sometidos grandes contingentes humanos, pero ambos divergen en cuanto al alcance que se atribuye al mismo proceso.

En el caso argentino, los obreros carecerían de ese marco normativo en tanto su situación de cambio reciente, con entrada en un “medio moderno”, habría destruido sus raíces tradicionales sin permitirles aún encontrar nuevos anclajes normativo emotivos.

Se supone entonces que tal situación crea una tensión generalizada que los lleva a buscar, no ya soluciones específicas para problemas claramente definidos, sino más bien una oportunidad de adhesión que les permita reconstruir, aunque sea vicariamente, un marco normativo.

Hablamos precisamente de reconstrucción de un marco normativo, porque de acuerdo con la teoría, no se operaría una modificación sustancial de los valores latentes en sus actitudes: los restos de tradicionalidad aún vigentes en ellos harán a estos obreros inclinados a aceptar aquellas normas avalladas por un tipo de autoridad paternalista, como la que ejercerán los caudillos populistas.

El otro modelo, ejemplificado a partir del caso brasileño, enfatiza, en lugar del estado de anomia, una continuidad de los valores tradicionales que orientan la conducta de los nuevos, lo que los impulsa a buscar una integración con la sociedad y con el poder a través de lazos de tipo primario.

El nivel de la situación

Cuando pasamos al nivel de las condiciones objetivas, tal como aparecen reseñadas en la literatura corriente como base para la diferenciación entre obreros viejos y obreros nuevos, nos encontramos con que el cambio de situación es caracterizado mediante la utilización de tres dimensiones: trabajo, consumo y participación política.

A) *Relación con el trabajo industrial.* En esta dimensión hallamos coincidencia entre ambos enfoques, coincidencia que, por añadidura, se extiende a las descripciones más corrientes de la situación de las masas obreras en los períodos clásicos de industrialización.

En efecto, uno y otro modelo parecen suponer diferencias entre viejos y nuevos en varios niveles:

- 1) en términos de *calificación*, conceptuando a los nuevos como menos calificados;
- 2) en términos de pertenencia a uno u otro sistema de trabajo industrial, como base para la calificación, lo que daría un *tipo de experiencia* obrera productiva distinta. Los viejos habrían obtenido su calificación dentro de un sistema en el cual el trabajo no está lejos del típico del productor artesanal, mientras que los nuevos tendrían experiencia sólo con la etapa de especialización como “apéndice de la máquina”. Esto traería apareja-

do para los viejos la vigencia de una más fuerte tradición en cuanto a intentos de controlar las propias condiciones de existencia, es decir, tendencias hacia una mayor autonomía. En esa dimensión, los nuevos, por su tipo de experiencia en cuanto a participación en el sistema de trabajo, se hallarían en el polo opuesto;

- 3) en términos del *volumen de experiencia*, entendido como tiempo de vinculación con el trabajo industrial;
- 4) en términos del *tipo de trabajo* desempeñado por el obrero antes de su ingreso a la industria. Los nuevos serían agrarios muy recientes, habituados a una tarea rutinaria;
- 5) en términos de *estabilidad* en el trabajo. Se supone a los viejos como más fijados en un oficio y en una empresa.

Es de hacer notar que estos dos enfoques cuyo referente empírico son situaciones de industrialización, las que tuvieron lugar en Buenos Aires y San Pablo, prestan menos atención, en cambio, a una diferenciación muy corriente en la literatura general sobre urbanización en países dependientes: la carencia de relaciones con el trabajo industrial por parte de los nuevos, o sea el caso de los recientemente migrados que hallan ocupación en servicios.

De todos modos, en la medida en que en este campo no se señalan diferencias muy marcadas con el caso clásico, las esferas del consumo y la vida urbana, por un lado y la de la participación política, por el otro, toman un papel crucial para explicar la causación de las nuevas orientaciones.

- B) *Relación con el consumo y con la vida urbana*. En este aspecto se especifica que la entrada al mercado de los nuevos se haría en un momento en que se encuentra más desarrollado el consumo de masas, con mayor participación en esa área de distintos estratos sociales. La experiencia

de los viejos en ese aspecto habría sido la de su segregación como consumidores o, quizás, la de un ascenso gradual. La distinción operaría centralmente para la formación de una “conciencia de movilidad” distinta: los nuevos percibirían una posibilidad de ascenso social ligada a estructuras ajenas a su propia condición obrera (el Estado, por ejemplo) y los viejos, en cambio, vincularían mucho más la posibilidad del ascenso a sus propias luchas, sean éstas a través de su propia organización de clase (sindicatos, partidos) o incluso a través de su propio esfuerzo personal. En cualquiera de estas dos últimas formas —aunque ellas puedan dar lugar a comportamientos políticos muy disímiles— los viejos se diferenciarían en conjunto de los nuevos en tanto enfatizarían mucho más su autonomía en relación con estructuras ajenas a su experiencia social o personal. En términos generales, la “conciencia de movilidad” de los nuevos funcionaría como obstáculo para su conciencia de clase.¹¹

- C) *Relación con el sistema político*. Éste es un punto central y sobre él la literatura teórica suele discriminar dos situaciones posibles:

a) Una versión sostiene que lo decisivo en esa área para operar un refuerzo del corte entre viejos y nuevos es que el ingreso de estos últimos a la vida urbana se produce sin que reciban ningún tipo de convocatoria política desde el Estado o sin que haya canales institucionalizados en los que puedan participar o, en otro caso, que reciban convocatorias ajenas a su interés o a su capacidad de respuesta. Por lo tanto, las organizaciones donde se agrupan los obreros viejos (sindicatos, partidos, cooperativas, etc.) no asimilan a los nuevos en la continuidad de una tradición de autonomía, quedando así éstos como “masas disponibles” susceptibles de ser manipuladas por una elite ajena a la clase y/o por el Estado.¹²

b) Otra versión sostiene que lo decisivo para el corte es, precisamente, un proceso de signo opuesto: los nuevos entran en la vida urbana en un momento de “intervencionismo social” y de expansión de los consumos, lo que favorece una pronta canalización hacia formas de participación subordinada, las que no son aceptadas por los obreros viejos. Ya no se trata de inexistencia de canales, sino de que éstos forman parte del Estado, por lo que la autonomía obrera desaparece.¹³

En los dos casos, el punto de partida del razonamiento es la dificultad que encuentran los sindicatos y los dirigentes tradicionales para organizar a los nuevos contingentes de trabajadores. Y el punto de llegada, la organización de éstos a través del aparato estatal.

Para configurar esa dificultad objetiva de homogeneización de la clase obrera operan, en los dos momentos, factores situacionales distintos.

En efecto, las distinciones analíticas resumidas suponen tener *in mente*, como ya hemos señalado, dos procesos históricos concretos: en el primer caso el del peronismo y en el segundo el del varguismo, sólo diferenciables entre sí en cuanto a que en la Argentina se dio la presencia de un *momento inicial*, ubicable en la década del 30 y principios de la del 40, cuyos rasgos hicieron que el “estado de disponibilidad” en que entrarían posteriormente las masas obreras pueda ser definido como producto de una falta de coincidencia previa entre movilización e intervencionismo social, manteniendo a pesar de esta distinción su similitud con el caso brasileño en el punto de llegada: la heteronomía de las conductas obreras expresada en su adhesión al nacionalismo popular.

Nuestros interrogantes, sin embargo, se orientan a plantear hasta qué punto la existencia o no de ese momento inicial cambia el carácter de la relación que se establecerá entre

movimiento obrero y populismo. Las hipótesis que manejaremos nos inducen a pensar que la presencia de un período previo de asincronía entre desarrollo económico y participación resulta decisiva para la apreciación de los rasgos específicos que asumirán algunos movimientos populistas, en especial el peronismo, tal cual lo discutiremos en la segunda parte de este trabajo.

Así, mientras en el caso brasileño se destaca la continuidad entre la situación tradicional del punto de partida y la “recepción” paternalista en la ciudad, donde regiría ya el intervencionismo social, en el caso argentino queda en claro la existencia de un período de explotación desnuda. En el caso brasileño, por lo tanto, lo importante parece ser la continuidad de las orientaciones, la entrada súbita al mundo del consumo y de la organización, mientras que para el caso argentino se enfatiza la etapa de anomia, la etapa de pobreza, la etapa de carencia de organización. Entre una situación en la cual los nuevos son organizados por los viejos y otra en que los nuevos son organizados directamente por el Estado, aparece una tercera en la que los nuevos quedan disponibles durante un período.

Creemos que tanto la descripción del caso brasileño como su “explicación” se alejan decididamente del caso argentino y que, por lo tanto, en términos de la dimensión central en nuestro análisis, es decir, la forma de participación de la clase obrera y de sus organizaciones en el régimen nacional popular, presenta diferencias tales que hacen aconsejable dejar de lado tal modelo.

Diferenciado el modelo referido a la Argentina de su análogo brasileño, queremos entonces pasar a discutir su adecuación al objeto de análisis, partiendo del supuesto de que efectivamente trata de conceptualizar el mismo fenómeno que nosotros queremos analizar, o sea un proceso de industrialización sin intervencionismo social y la posterior emergencia de un régimen nacional popular. Pero trataremos de mostrar

que tanto en la descripción como en el análisis de este fenómeno el modelo deja de lado elementos básicos, de modo tal que no sólo no da cuenta de éste, sino que lo deforma.

Uno de los aspectos centrales que deja de lado es la relación entre nuevas organizaciones obreras y movimiento sindical preexistente.

Pero no sólo ello. El hecho fundamental de que los trabajadores nuevos pasen por un período de explotación sin participación, a pesar de ser recogido como dato en la descripción situacional, no es luego asumido en todas sus consecuencias posibles al construirse el modelo explicativo del peronismo como forma particular de nacionalismo popular.

En consecuencia, si de los enfoques referidos al varguismo decimos que se alejan de nuestra perspectiva pues describen una situación distinta de la que queremos analizar, de los modelos elaborados para el peronismo —inicialmente contruidos por Gino Germani y completados luego por otros autores— señalamos que parten de una caracterización incompleta del punto de partida situacional, negando incluso la existencia de procesos que se dieron en la realidad, y que otorgan luego un peso, a nuestro juicio excesivo, a uno solo de los procesos participantes: la incorporación de contingentes de obreros nuevos.

El punto central de los dos análisis sigue siendo un intento de reformular la relación genérica clase obrera-populismo en términos de *nueva* clase obrera-populismo. Poco parece importar que el proceso en sí mismo atravesase por circunstancias históricas desiguales derivadas de la existencia o no de un momento inicial en el que se ha producido ya la movilización sin que el populismo se halle aún en el poder.¹⁴

De ese modo —y éste es el punto al que interesa llegar— la teoría descarta o considera irrelevante el papel que los viejos obreros y sus organizaciones pueden llegar a tener en la estructuración de un movimiento populista como salida política pa-

ra una situación particular, en tanto éste es expresamente definido como antagónico a sus tradiciones sindicales y políticas.

Utilizando como punto de referencia esta teoría generalizada, el objeto de nuestro informe es presentar un panorama del papel de los sectores obreros en el surgimiento del peronismo que girará, básicamente, alrededor de tres hipótesis:

- 1) que en el surgimiento del peronismo tuvieron una intensa participación organizaciones y dirigentes del sector de obreros “viejos”;
- 2) que es difícil otorgar la caracterización de pasiva, heterónoma y con miras de corto alcance a la participación obrera en el proceso de constitución del movimiento nacional popular;
- 3) que la participación conjunta de viejos y nuevos implicaba un proyecto social de cierto alcance y tenía como componente importante la continuidad programática con reclamos previos de las organizaciones obreras, del mismo modo que la posibilidad de participación obrera en una alianza policlasista era ya una tendencia con importantes antecedentes en el sindicalismo anterior al peronismo.

La caracterización del momento inicial del peronismo la haremos, entonces, entroncándola con la misma preocupación que nos guió en un trabajo anterior sobre sectores propietarios en la década del 30:¹⁵ su interpretación como forma más compleja de alianza de clases, lo que supone esclarecer qué tipo de intereses confluyeron en el movimiento, frente a otras interpretaciones que ponen el énfasis sobre los elementos normativos que operan como condición del populismo, entendido como manifestación de heteronomía obrera para las sociedades en que se produce un rápido crecimiento industrial en una etapa tardía de desarrollo del capitalismo.

Este trabajo no irá más allá del punto en que esas tres hipótesis acerca de las formas y el contenido de la participación de los obreros “viejos” en el origen del peronismo quedan presentadas. Quedará planteado el problema de la comunidad de intereses y orientaciones entre viejos y nuevos, así como la participación que la clase obrera como tal adquiere, junto con otras clases, en el peronismo, definido como un tipo particular de alianza interclase entre sectores propietarios y no propietarios.

2. Clase obrera y sindicatos en la génesis del peronismo

Al analizar los orígenes del peronismo, el primer rasgo distintivo que aparece, en relación con otros procesos germinativos de movimientos populistas, es la importancia que el sindicalismo tiene en él como factor constituyente. Este dato es tácitamente reconocido por todos los observadores pero en lugar de ser utilizado en la medida de sus posibilidades —analíticamente muy ricas, pues marca, precisamente, la distinción esencial entre el peronismo y otros regímenes nacional populares— se lo deja de lado, prefiriendo poner el énfasis en otros niveles de análisis para las conductas obreras, como las diferencias psicosociales que separan a los nuevos trabajadores de los viejos.

Al minimizar el papel jugado por la organización sindical se le quita de hecho al peronismo el elemento más nítido de especificación dentro del conjunto de los movimientos populistas y se acepta, como consecuencia necesaria de ese desinterés, el doble supuesto que se halla habitualmente detrás de los estudios de participación obrera en el nacionalismo popular.

En primer lugar, la tendencia a remarcar la debilidad del sindicalismo en el período anterior al populismo, su escasa representatividad y su aislamiento social. En segundo lugar,

la inclinación a explicar la adhesión sindical en el momento de consolidación del populismo como el resultado de un vertiginoso crecimiento de las organizaciones gremiales hecho al amparo del Estado, mediante un proceso por el cual los viejos sindicatos y sus dirigentes tradicionales —que de acuerdo con la teoría aparecen como naturalmente opuestos a la manipulación de las masas por el líder demagógico— son desbordados por dirigentes sin experiencia que organizan a enormes contingentes de nuevos trabajadores, recientemente urbanizados, sin tradición asociativa anterior ni por lo tanto conciencia de autonomía.

En realidad, la primera y la segunda imagen se encadenan, transformándose una en condición de la otra: el proceso de manipulación de las masas obreras por una elite ajena a la clase crece y se desarrolla sobre un vacío de organización proletaria autónoma. El apoyo de masas al populismo, pues, sería función de la inexistencia (o existencia poco significativa) de una organización sindical previa y de un rápido crecimiento de la nueva clase obrera que, con sus nuevos dirigentes y sus nuevas organizaciones, desborda los estrechos marcos asociativos existentes y se expresa a través de otros, creados por el Estado.

Nuestra intención es contrastar estas hipótesis habituales, a partir de un intento de particularización de aquel dato que marcábamos como peculiar para los orígenes del peronismo: la importancia que el sindicalismo organizado adquiere durante su proceso de gestación.

Este punto de partida supondrá, en primer término, destacar la importancia relativa de las organizaciones gremiales en la Argentina a comienzos de la década del 40 y, en segundo lugar, determinar hasta qué punto se dio entre nosotros entre 1943 y 1946 —momento en que el populismo es gestado— un proceso tan vertiginoso de crecimiento en los sindicatos como para suponer que en ese período de gestación se produjera una ruptura entre tradiciones ideológicas, organi-

zaciones y dirigentes capaz de explicar al populismo como resultado de un corte interno en la clase trabajadora.

Nuestra conclusión es que en el proceso de génesis del peronismo tuvieron una intensa participación dirigentes y organizaciones gremiales viejas, participación que llegó a ser fundamental a nivel de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo y muy importante en el Partido Laborista.

Este acento puesto en la actividad de los dirigentes y organizaciones tradicionales en los orígenes del peronismo no significa descartar en absoluto el papel jugado por los obreros recién incorporados a la industria y por los gremios que efectivamente recién se organizan después de 1943, sino relativizarlo en favor de una aproximación alternativa al problema de la participación obrera en el peronismo que, *más que destacar la división interna de la clase obrera, toma como punto de partida su opuesto: la unidad de ésta, como sector social sometido a un proceso de acumulación capitalista sin distribución del ingreso, durante el proceso de industrialización bajo control conservador que tiene lugar durante la década del 30.*

El supuesto que se halla detrás de este enfoque es que, previo al populismo, se desarrolló en la sociedad argentina un proceso de crecimiento capitalista sin intervencionismo social y que esta situación determinó la configuración de un monto crecido de reivindicaciones típicamente obreras que abarcaban al conjunto de la clase trabajadora, demandas que el sindicalismo trató de satisfacer sin éxito hasta que, entre 1944 y 1946, por acción de definidas políticas estatales, esa serie reivindicativa va encontrando solución, lo que se traduce en una inversión de las tendencias de distribución del ingreso nacional. Sobre esta base, la mayoría de los sindicatos —viejos y nuevos— articulan una política de alianzas con un sector del aparato del Estado, sin abdicar durante ese proceso y por el contrario reforzando —tal como lo indica la creación del Partido Laborista— sus pretensiones tradicionales de autonomía e independencia frente a otros sectores sociales.

La fuerza sindical antes del peronismo

Como ya lo hemos señalado, la tendencia general en los análisis acerca de la participación obrera en los movimientos populistas y específicamente en el peronismo se orienta hacia minimizar el rol de los sindicatos en el período previo y a destacar, en cambio, el vertiginoso crecimiento organizativo bajo el amparo del Estado. La experiencia argentina entre 1940 y 1946 no parece confirmar esa imagen.

El número total de organizaciones gremiales y afiliados en la Argentina en 1941, última fecha previa al surgimiento del peronismo para la que se tienen estadísticas relativamente completas, discriminado por las confederaciones en que se hallaban agrupados, es el siguiente:

Número de sindicatos adheridos a la

CGT	USA	Face	Autónomos	Total
217	31	25	83	356

Número de afiliados

CGT	USA	Face	Autónomos	Total
320.681	14.543	13.550	82.638	441.412

FUENTE: Dirección Nacional del Trabajo, *Organización Sindical*, 1941.

En lo que respecta al número de afiliados, las organizaciones gremiales se hallaban en un proceso de crecimiento continuo desde 1936 (con un leve descenso en 1941).

Afiliación sindical

1936	369.969	100
1937	418.902	113,23
1939	436.609	118,01
1940	472.828	127,80
1941	441.412	119,31

La cifra de 356 sindicatos con cerca de 450.000 afiliados no parece insignificante, sobre todo si se la compara con el crecimiento que se producirá entre ese año y finales de 1945, cuando el movimiento nacional popular culmine su proceso de gestación.

El Censo de Asociaciones Profesionales que consigna los datos para 1941 los distribuye según ramas de actividad. Sobre el total de 441.412 afiliados, 144.922 pertenecen a ramas que podemos llamar industriales; 154.907 a trabajadores de transportes terrestres, aéreos, marítimos fluviales y portuarios y 117.709 al sector típicamente de servicios.¹⁶ Dejamos fuera de la clasificación a Actividades Primarias, Profesiones Liberales y Varios, con un total de 29.674 afiliados.

En lo que hace al número de sindicatos, en el sector industrial se hallaban organizadas 103 asociaciones; en Servicios 137 y entre los trabajadores de Transportes y Puertos, 44. Desde el punto de vista del número de afiliados el sector numéricamente más poderoso era el de Transportes y Puertos (los afiliados en la rama de Transportes Terrestres virtualmente equiparan a los de todas las ramas industriales sumadas), seguidos por Industria y Servicios. En lo que hace a las ramas, el primer lugar en cuanto a número de afiliados es ocupado por los ya citados trabajadores de Transportes Terrestres (básicamente integrado por ferroviarios), seguido por Construcción y luego por la rama que agrupa Comercio, Bancos, Oficinas y Seguros.

No resulta fácil calcular el grado de representatividad que en relación con el conjunto de los asalariados tenía el movimiento sindical a comienzos de la década del 40. Pero un observador, reticente en cuanto a enfatizar el poder de los sindicatos, calcula que, para 1939, alrededor del 30% de los obreros industriales está afiliado a organizaciones gremiales y es cotizante de éstas.¹⁷

Otro autor coincide con esa estimación para la misma época: “Por otro lado, menos de una tercera parte de los tra-

bajadores industriales del país y alrededor del 10% del conjunto de los asalariados estaban organizados, la enorme mayoría concentrados en Buenos Aires y Rosario”.¹⁸

Partiendo, para 1941, de la gruesa clasificación en sectores que hemos realizado a partir de las cifras agrupadas en ramas por el Censo Profesional realizado ese año, la que nos otorga un total de 144.902 trabajadores industriales afiliados a sindicatos, y considerando un total de ocupados en ese sector para ese año de 729.731,¹⁹ la proporción de sindicalizados en la industria alcanzaría a alrededor del 20%. Un porcentaje oscilante entre el 20 y el 30% de obreros industriales organizados no parece excesivamente bajo para un momento en que la afiliación y la militancia sindical debían luchar contra innumerables obstáculos.

Hacia finales de 1945, la situación del movimiento obrero, desde el punto de vista de sus organizaciones, no había variado sustancialmente. En este aspecto y considerando el peso que el sindicalismo tuviera en el proceso de génesis del peronismo —proceso que en diciembre de 1945 ya había madurado— las cifras de crecimiento a partir de 1941 nos indican que, en líneas generales, el apoyo gremial al populismo fue instrumentado por una estructura sindical en lo esencial preexistente, sin que pueda hablarse de una discontinuidad marcada con el pasado inmediato.

Tal cual lo indica el cuadro comparativo, si bien desde el punto de vista del número de organizaciones el crecimiento fue muy grande —de 356 a 969, es decir, una suba del 172,9%— en lo que hace al número de afiliados el incremento fue mucho menor: de 441.412 se pasa a 528.523, es decir, un aumento del 19,73%, virtualmente similar al que se produjo entre 1936 y 1941.

El gran salto en el número de afiliados se producirá recién hacia finales de 1947 en que la CGT congregará, según estimaciones, 1.500.000 afiliados, para llegar a alrededor de tres millones hacia 1951.

Durante 1943/1945, que es el período que nos interesa en este momento, la estructura interna del sindicalismo no se modificó sustancialmente, pues pese a que se fundan entonces algunos importantes sindicatos —la mayoría de ellos paralelos a otros preexistentes— no llegaron a jugar institucionalmente con demasiado peso propio. Por el contrario, en algunos casos la creación de sindicatos paralelos debilitó en un primer momento el número total de afiliados sindicales en aquellas ramas en que este proceso tuvo lugar.

Si reagrupamos en sectores de actividad, como lo hicimos con los datos por ramas de 1941, las cifras de afiliación sindical y de organizaciones de 1945, podremos advertir que la composición interna de la organización obrera se mantenía, en líneas generales, dentro de las mismas proporciones.

Del total de 528.000 obreros organizados, 151.269 pertenecían al sector industrial, 118.634 al de Transportes y Puertos y 103.384 a Servicios. El descenso que se advierte en el número de afiliados en estos dos sectores se vio compensado con creces por una suba vertical de lo que el Código utilizado agrupa como Varios, que aumenta de 23.000 afiliados en 1941 a 142.000 en 1945. El cuadro comparativo sería éste:

	1941	1945
Industrias	144.922	151.269
Transportes	154.907	118.364
Servicios	117.709	103.384
Otros	29.674	155.236

Considerando como criterio de reagrupamiento a los sectores, Industria desplaza a Transportes, aunque por rama de actividad los sindicatos que agrupan a estos últimos trabajadores siguen siendo los más poderosos.

En lo que hace al número de sindicatos, el crecimiento por sectores es el siguiente:

	1941	1945
Industria	103	425
Transportes	44	122
Servicios	137	267

Los sindicatos de ramas industriales son los que proporcionalmente crecen más, desplazando a los correspondientes a Servicios, que eran los más numerosos a principios de la década.

El número de sindicatos aumenta entre 1941 y 1945 en todas las ramas; en donde el crecimiento es mayor es en la industria química y en Gráficas, Prensa y Papel.

En cuanto al número de afiliados, aumenta en Actividades Primarias, Alimentación, Químicas, Confección, Electricidad, Espectáculos Públicos, Hostelería, Metales, Madera, Servicios Sanitarios, Actividades del Estado y Varios.

Desciende, según las estadísticas oficiales, el número de contingentes en ramas muy importantes para la estructura sindical como Comercio, Construcción, Transportes Terrestres, Textiles, Transportes Marítimos y Puertos, Gráficos, Prensa y Papel y Comunicaciones. En todos estos casos, crece, como hemos visto, el número de sindicatos, por lo que una de las explicaciones para este descenso en el monto total de afiliados podría hallarse en el desajuste que provocó la fundación de sindicatos paralelos (casos de los Textiles y de la Construcción) o las divisiones internas que se produjeron en los gremios de tranviarios, portuarios y empleados de comercio durante el período de estructuración del peronismo.

Características del sindicalismo preperonista

Desde el punto de vista de las orientaciones predominantes en el sindicalismo, todos los análisis coinciden en señalar el año 1943 como un momento de ruptura, como el punto en el cual finaliza la etapa del sindicalismo tradicional, mino-

ritario, orientado hacia posiciones izquierdistas y más basado en el oficio que en la industria y nace el sindicalismo de masas, ligado al aparato del Estado, generado a través de un proceso de disolución de toda la experiencia pasada.

Sin embargo, esa discontinuidad recién tomará forma (y sin los drásticos rasgos que se le atribuyen) hacia finales de 1947. La diferencia de cuatro años que establecemos con la fecha habitual no es secundaria sino significativa a los efectos de evaluar el peso que el sindicalismo tradicional adquirió en los orígenes del peronismo y aun el impacto que esa influencia inicial tuvo sobre todo el proceso de participación obrera en el nacionalismo popular, durante el paso de éste por el gobierno y después de su derrocamiento.

En realidad, hasta 1946/1947 las orientaciones del movimiento obrero se hallarán fuertemente ligadas con la secuencia anterior —cuyo origen ubicaríamos alrededor de 1930— de modo tal que para la articulación del apoyo sindical al populismo es más relevante el conflicto planteado en el seno mismo de los dirigentes tradicionales —como expresión de dos concepciones distintas acerca de las alianzas del movimiento obrero con otras clases y grupos sociales— que un supuesto corte entre éstos y sus organizaciones tomadas en conjunto, frente a dirigentes y sindicatos nuevos.

Más aún: un repaso a la lucha de tendencias que tuvo lugar en el movimiento sindical a partir de 1930 nos permitirá advertir la preexistencia de una corriente disponible para una alianza con sectores estatales y con un grupo de propietarios industriales, en la medida en que ese acuerdo fuera capaz de revertir una política de crecimiento económico basada hasta ese momento en un proceso de explotación creciente de la fuerza de trabajo.

El ciclo de industrialización bajo control conservador abierto en la Argentina en la década del 30 supuso consecuencias sociales sobre la fuerza de trabajo más asimilables a las condicio-

Número de asociaciones obreras y contingente de afiliados inscriptos en julio de 1941 y diciembre de 1945

GRUPOS DE ACTIVIDAD	AÑO 1941		AÑO 1945	
	ENTIDADES	AFILIADOS	ENTIDADES	AFILIADOS
Actividades Primarias	10	4.287	44	9.203
Alimentación	39	29.171	205	97.426
Comercio, Bancos, Oficinas y Seguros	69	60.841	77	29.849
Comunicaciones	2	3.200	32	2.889
Confección	10	12.906	37	14.410
Construcción y materiales	34	74.283	79	14.346
Electricidad	4	650	8	812
Espectáculos Públicos	14	8.589	32	15.873
Gráficas, Prensa y Papel	2	5.045	29	3.713
Hostelería	25	3.470	46	6.139
Madera	10	6.304	17	6.885
Metales	4	4.459	21	5.992
Profesiones Liberales	5	1.821	14	3.047
Químicas	2	250	29	5.884
Servicios Sanitarios de Higiene y Limpieza	8	3.679	30	6.351
Textiles	2	12.504	8	2.613
Transportes aéreos, marít., fluviales y serv. portuarios	14	14.306	31	9.611
Transportes Terrestres	30	140.601	91	109.023
Varios	57	23.566	97	142.986
Actividades del Estado	15	31.480	42	41.471
	356	441.412	969	528.523

FUENTE: Dirección de Estadística Social, Investigaciones Sociales, 1943, 1945, p. 29.

nes de los procesos de industrialización clásicos que a los que se adjudican a los países dependientes. Es decir, que en la Argentina no se produjo un simultáneo proceso de industrialización y distribución, sino un clásico proceso de acumulación basado sobre la explotación obrera.

La historia interna del sindicalismo testimonia con bastante claridad las repercusiones que ese proceso adquirió sobre las orientaciones obreras.

Entre 1930 y 1935, la capacidad negociadora del sindicalismo se vio duramente golpeada por la doble incidencia de las políticas que el capitalismo posee para disciplinar la fuerza de trabajo: el mantenimiento de una alta tasa de desocupación y la vigencia de medidas represivas. Es un momento de extrema debilidad para el movimiento obrero, que se manifiesta incapaz de enfrentar las consecuencias de la crisis económica. Un dirigente sindical de entonces comenta así la situación: “Con la desocupación obrera, total en unos casos, parcial en otros, el movimiento sindical que estaba resentido por luchas internas agudizadas en su última década, había venido a menos. Disminuido, tornábasele ilusoria toda actividad y desde 1930 a 1935 escasas eran las que reunían condiciones de realizar acción alguna en defensa de sus afiliados. Los ferroviarios, cuya organización mantenían intacta, viéronse obligados a aceptar serias reducciones en sus jornadas de trabajo con la consiguiente merma de sus salarios; los trabajadores de la industria habían perdido muchas ventajas logradas en años anteriores. Las pocas organizaciones que se arriesgaban a la acción sólo obtenían limitados resultados. Destacáronse en ese sentido las de los obreros de la madera, del calzado, del servicio telefónico y de la construcción”.²⁰

Hacia 1935 esa situación comienza a cambiar. El ritmo de la ocupación creció a partir de ese momento de manera sostenida y la capacidad negociadora del sindicalismo se robusteció. La primera consecuencia en el nivel institucional de

esos cambios fue una modificación en la dirección de la CGT, producto de una crisis.

A fines de ese año los delegados de la Unión Ferroviaria, de La Fraternidad, de la Confederación General de Empleados de Comercio, de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión Obreros y Empleados Municipales —en esos momentos los gremios más importantes— declararon la caducidad de las autoridades de la CGT y nombraron una Junta Provisoria, con la principal tarea de convocar a un congreso constituyente de la central obrera.

Pero el principal argumento manejado por los dirigentes de las organizaciones sindicales más poderosas —controladas por afiliados o simpatizantes del Partido Socialista— era que la CGT había encubierto con la consigna de “prescindencia política” una actitud conciliadora frente a los gobiernos de Uriburu y de Justo. “La palabra de orden —dice el manifiesto dado a conocer por los nuevos dirigentes— no puede ni debe ser para los trabajadores la de prescindencia.”²¹

De esta crisis de finales de 1935 quedará, por un lado, la CGT, desde entonces controlada por los socialistas y la Unión Sindical Argentina, reconstituida tras su disolución a mediados de la década anterior, en la que participarán los sindicatos desalojados de la dirección de la CGT y otros gremios, sobre todo del anterior, que no aceptaban la supremacía socialista, propugnando en cambio una orientación de tipo sindicalista, deslindando la acción de las organizaciones gremiales de la de las agrupaciones políticas. La USA irá perdiendo paulatinamente importancia y a principios de la década del 40 sólo contará con 14.000 afiliados contra más de 300.000 de la CGT.

Ésta, por el contrario, comenzará a crecer sostenidamente. El cambio en las condiciones económicas facilitó la posibilidad de la movilización obrera. La desocupación comienza a descender, robusteciendo la capacidad de negociación

del sindicalismo, mientras que los salarios reales, en cambio, se estancan o aun bajan, aumentando el monto de reivindicaciones insatisfechas.

Nivel de ocupación y salario real en Buenos Aires 1929 = 100

	Ocupación	Salario real
1929	100	100
1930	100,92	91
1931	97,83	98
1932	94,18	104
1933	98,22	96
1934	104,40	99
1935	113,21	101
1936	119,51	95
1937	126,11	96
1938	129,51	96
1939	132,10	97
1940	129,18	98
1941	135,01	98
1942	140,63	101

FUENTE: Dirección Nacional del Trabajo, *Investigaciones Sociales*, años 1940 y 1943/1945.

El momento es, además, desde un punto de vista organizativo, favorable a la creación o robustecimiento de nuevos sindicatos en ramas de la industria, así como al paso de la organización por oficio a la organización por industria y a la organización de federaciones nacionales.

Esta nueva situación favorable especialmente a los comunistas que comienzan a coparticipar de la dirección de la CGT, a partir de su influencia en nuevas federaciones nacionales, como la de los obreros de la construcción y en nuevos sindicatos como metalúrgicos y textiles.²²

Hacia comienzos de la década del 40, la situación del sindicalismo desde el punto de vista de las tendencias predominantes, era la siguiente:

- la CGT, que abarcaba a la mayoría de los trabajadores sindicalizados, en cuya dirección participaban socialistas, comunistas y sindicalistas;
- la USA, liderada por dirigentes sindicalistas;
- sindicatos autónomos, también de orientación sindicalista.

Las luchas obreras en el período previo al peronismo

Ya hemos hecho referencia a las características del proceso de acumulación capitalista durante la década del 30 y a las consecuencias más generales de éste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esta situación aparece reflejada en los memoriales y petitorios presentados periódicamente por las organizaciones gremiales a la Cámara de Diputados y en las intervenciones de los dirigentes obreros en las reuniones de la CGT.²³ En abril de 1943 el Departamento Nacional del Trabajo reconocía, en un informe elevado al Ministerio del Interior, que la situación del obrero se había deteriorado pese al auge industrial: “En tanto se logran diariamente descomunales ganancias la mayoría de la población se ve forzada a reducir su nivel de vida”.²⁴

Esta tendencia se advierte en las series sobre distribución del ingreso para ese período, que van marcando un deterioro creciente de los asalariados en la riqueza nacional.

Pero como hemos señalado, la explotación de la fuerza de trabajo estaba acompañada por un aumento constante del nivel de ocupación que se acentúa en el período inmediatamente anterior al cambio de gobierno en 1943. La coincidencia de ambos factores, crecido monto de reivindicaciones gremiales y alta tasa de ocupación, reforzó las posibilidades de acción sindical, lo que se manifestó en el crecimiento sostenido de las organizaciones gremiales y en su capacidad de movilización.

Volcando los datos oficiales sobre huelguistas y huelgas en números índice y agrupándolos por períodos, se puede

apreciar el repunte de la movilización obrera operada con posterioridad a 1935:

	Huelgas	Huelguistas
1926/1930	100	100
1931/1935	62,45	86,36
1936/1939	71,29	146,63

FUENTE: Dirección Nacional del Trabajo, *Estadística de las huelgas*, 1940, p. 32

El aumento en el número de huelguistas que se opera a partir de 1935 —y que alcanzará, como veremos, dimensiones aun mayores en 1942— significó, además, una extensión de la movilización hacia los grupos de trabajadores peor retribuidos: sucesivamente el salario real de los huelguistas se distancia más del salario real del conjunto de los trabajadores, tal como lo indica el cuadro:

	Salario real de los trabajadores	Salario real de los huelguistas
1929	100	100
1930	91	96,43
1931	98	104,33
1932	104	104,78
1933	96	89,91
1934	99	79,91
1935	101	71,40
1936	95	63,66
1937	96	77,90
1938	96	78,71
1939	97	67,82

FUENTE: *Estadística de las huelgas*, cit.

Simultáneamente, se acentúa la reivindicación salarial como motivación de la mayoría de las huelgas:

en %

	Salarios	Jornadas	Mejoras	Despido	Solidaridad
1934	42,86	—	11,90	42,86	2,38
1935	56,52	—	8,70	23,19	10,14
1936	58,72	2,75	5,50	27,52	5,51
1937	64,64	1,22	1,22	28,05	4,87
1938	43,19	2,27	18,18	31,82	2,27
1939	81,63	2,04	—	12,25	4,08

FUENTE: *Estadística de las huelgas*, cit, p. 45.

Desde el punto de vista de los huelguistas involucrados según cada una de las causas, el predominio de las reivindicaciones salariales es aún más notorio:

	Salarios	Jornadas	Mejoras	Despido	Solidaridad
1934	75,91	—	20,20	3,76	—
1935	97,85	—	0,69	0,89	0,08
1936	94,62	0,05	0,05	2,32	—
1937	93,65	0,03	0,37	4,49	—
1938	80,83	1,63	5,59	11,66	—
1939	94,77	0,17	—	3,80	—

FUENTE: *Estadística de las huelgas*, cit.

Esta creciente movilización obrera no encuentra, sin embargo, los resultados buscados: un alto porcentaje de las huelgas se pierde o se transa y la menor proporción es la de triunfos. El porcentaje de huelguistas involucrados en los conflictos que obtiene las reivindicaciones reclamadas es bajo, lo que, obviamente, acentúa la insatisfacción y las tensiones.

Resultados obtenidos por los huelguistas sobre el total de obreros en huelga

	Obreros en huelgas ganadas	Perdidas	Transigidas
1934	2,41	55,93	41,66
1935	55,81	7,76	36,18
1936	14,72	11,15	74,07
1937	8,23	3,57	88,20
1938	11,33	13,81	74,68
1939	18,39	6,30	75,31

FUENTE: *Estadística de las huelgas*, cit., p. 47.

El número de obreros favorecidos por la firma de convenios colectivos tiende a descender permanentemente:

Convenios colectivos elaborados, renovados o modificados

	Convenios	Establecimientos afectados	Trabajadores
1936	13	1.535	67.811
1937	11	209	62.194
1938	4	29	25.850
1939	11	1.446	25.535
1940	7	439	20.750

FUENTE: Dirección Nacional del Trabajo, *Investigaciones Sociales*, 1940, p.49.

En líneas generales, este proceso tiende a acentuarse al comenzar la década del 40 para alcanzar su cima en 1942. Interesa detenerse especialmente en ese año, pues se trata del último previo al proceso de estructuración del nacionalismo popular, de modo tal que puede servirnos como ejemplo para apreciar la capacidad de movilización del sindicalismo en la Argentina.

Todo el período que arranca desde 1939 —año en que a

raíz de la Segunda Guerra Mundial el proceso de industrialización sustitutiva adquiere nuevos impulsos— se caracteriza por un aumento sostenido de los niveles de ocupación, mientras el salario real se mantiene estancado o crece muy poco. Esto lleva a una agudización de los conflictos y de la movilización obrera hasta llegar en 1942 a cifras topes:

N.I. = 1939 = 100

	Huelgas		Jornadas perdidas		Huelguistas	
	N	N.I.	N	N.I.	N	N.I.
1939	49	100	241.099	100	19.718	100
1940	53	108,16	224.599	93,16	12.721	64,51
1941	54	110,20	247.598	102,70	6.606	33,50
1942	113	230,61	634.339	263,10	39.865	202,18

FUENTE: Dirección de Estadística Social, *Investigaciones Sociales*, 1943/45, p. 55.

En cuanto hace a participación obrera en la vida sindical, mientras el número de reuniones tiende a descender —descenso atribuible a las restricciones emanadas del estado de sitio— el número de concurrentes, si bien también desciende con respecto a 1939, lo hace en proporción menor que el de reuniones.

N.I. 1939 = 100

	Reuniones		Concurrentes	
	N	N.I.	N	N.I.
1939	7.089	100	389.588	100
1940	6.178	87,15	308.939	79,29
1941	3.776	53,26	210.500	54,04
1942	3.610	50,92	283.147	72,67

FUENTE: *Investigaciones Sociales*, 1943/45, p. 13.

El año 1942 alcanzó valores en materia de número de huelgas y de jornadas perdidas que no fueron superados en los años sucesivos; ni aun en 1945. El total de huelgas fue de 113 y abarcaron a 39.685 huelguistas, alrededor del 60% del total de trabajadores de las empresas en conflicto. La distribución de las huelgas según ramas de actividad y la proporción de huelguistas sobre el total de trabajadores fue la siguiente:

Rama	Número de huelgas	Personal	Huelguistas	%
Madera	23	872	840	96,33
Construcción	20	5.342	3.854	72,15
Confección	19	2.837	2.664	93,90
Gráficos	12	1.041	688	66,09
Metales	12	41.416	25.225	60,91
Químicas	10	1.795	1.550	86,35
Textiles	10	4.426	1.021	23,07
Alimentación	4	5.197	458	8,81
Sanitarios	2	3.521	3.511	99,72
T. Marítimos	1	120	54	45
	113	66.657	39.685	59,89

FUENTE: Departamento Nacional del Trabajo, *Investigaciones Sociales*, 1942, p. 92.

De las 113 huelgas, setenta fueron motivadas por reivindicaciones salariales, tres por problemas relativos a la jornada de trabajo, nueve referidas a mejoras en las condiciones de trabajo, veintinueve a problemas de despido, multas, suspensiones, cumplimiento de leyes y dos a solidaridad. En cuanto al total de los huelguistas involucrados, el 89,42% tuvo como motivación reclamos de tipo salarial.

Desde el punto de vista de la experiencia obrera, en 1942 como en años anteriores, el crecimiento de la combatividad no trajo aparejado éxitos inmediatos: sólo un 10% de los huelguistas triunfaron en sus demandas.

Resultado de las huelgas

	N° de huelgas	%	N° de huelguistas	%
Ganadas	45	39,82	4.098	10,28
Perdidas	30	26,55	2.418	6,07
Transigidas	38	33,63	33.349	83,65

FUENTE: *Investigaciones Sociales*, 1942, p. 101.

La orientación del sindicalismo en los orígenes del peronismo

El golpe militar de junio de 1943 encuentra, pues, a una clase trabajadora que, pese a haber intensificado la movilización en defensa de intereses propios, no ha resuelto a su favor, en la mayoría de los casos, las reivindicaciones planteadas. El crecimiento de la combatividad y de la organización sindical —atribuible a la mejor situación para la lucha reivindicativa facilitada por niveles de ocupación muy altos— era tan grande como el monto de reivindicaciones insatisfechas.

Institucionalmente, en ese año de 1943 la CGT se halla nuevamente dividida en dos sectores. Los términos de ese fraccionamiento repiten, de alguna manera, las motivaciones que llevaron en 1935 a su división y consecuentemente a la resurrección de la USA.

Por un lado, un sector —el que formará la CGT N° 1— que, aunque encabezado por un afiliado socialista, José Domenech, secretario de la Unión Ferroviaria, buscaba la máxima independencia de la CGT con respecto a los partidos políticos. Por el otro la CGT N° 2, integrada por los gremios dirigidos por aquellos afiliados socialistas más integrados a la estructura partidaria —como Francisco Pérez Leirós, dirigente de los trabajadores municipales que era diputado nacional— y por los sindicatos orientados por los comunistas.

Ambas CGT tienen en principio frente al gobierno surgido de los sucesos de junio una actitud expectante, de ninguna manera opositora. Así, pese a que el 8 de junio el presidente del Departamento Nacional del Trabajo citaba a los representantes sindicales para exigirles “absoluta prescindencia en materia política tanto interna como internacional, ciñendo su programa a lo estrictamente gremial”,²⁵ una delegación de la CGT N° 2 entrevistaba el día 21 de junio al ministro del Interior y le señalaba que “la clase trabajadora había sentido un verdadero alivio al ver caer a los mandatarios depuestos y que apoyaba los propósitos del actual gobierno de hacer cumplir la Constitución, depurar la Administración Pública y la Justicia, así como también por las medidas adoptadas y las que se decidieron para abaratar la vida y los alquileres”.²⁶

A pesar de ello, un mes después, el 21 de julio de 1943, la sede de la CGT N° 2 es clausurada por el gobierno. La CGT N° 1, por su parte, recibirá un duro golpe al ser intervenida, el 24 de agosto, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Por disposición de los interventores —dos capitanes de fragata— ambas organizaciones se retiran de la CGT, lo que significaba, por el poder relativo que poseían, la virtual acefalía de la central obrera.

En setiembre de 1943 los sindicatos no intervenidos de la CGT N° 1 deciden continuar con la organización y sesionar en la sede de la Unión Tranviarios, reconstruyendo el secretariado nacional de la CGT.

El 27 de octubre el coronel Juan Perón es designado director del Departamento Nacional del Trabajo. Exactamente un mes después un decreto oficial crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, con Perón como titular, pero ya a fines de octubre los interventores en la Unión Ferroviaria y en La Fraternidad habían cesado en sus funciones siendo reemplazados por un miembro del equipo cercano a Perón: el teniente coronel Domingo Mercante, que asumió el control de los dos sindicatos.

A partir de ese momento se iniciaría una nueva etapa en las relaciones entre sindicalismo y Estado; en términos políticos, se abría el proceso de orígenes del peronismo que, en el plano gremial, se centraría básicamente en las organizaciones que constituyeron la CGT N° 1 y la USA, con aportes importantes de algunos gremios enrolados en la CGT N° 2 y la mayoría de los sindicatos autónomos.

De este proceso de génesis del peronismo nos interesará sólo un aspecto: el referido a las relaciones entre el sector político militar populista que coparticipa del aparato estatal y el movimiento obrero organizado. Y dentro de esas relaciones nuestro interés se centrará específicamente en dos aspectos que nos parecen significativos para la discusión más general acerca de la participación obrera en los movimientos nacional populares: el papel que jugarán —no sólo en el aspecto gremial sino también en su articulación política— un sector importante de la vieja elite sindical y la percepción, en términos de lo que podríamos llamar autonomía reformista, con que elabora ese sector su alianza con un grupo gubernamental.

Si recién a finales de 1943 el grupo que rodea a Perón comienza a estructurar una estrategia tendiente a lograr un pacto con el sindicalismo, la primera prueba pública acerca de los avances realizados en esa dirección tendrá lugar en julio de 1945.

El 16 de junio de 1945, 319 entidades patronales encabezadas por la Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, Bolsa de Cereales, Cámara de Grandes Tiendas y Anexos y Cámara de Exportadores, dan a conocer un “manifiesto de las Fuerzas Vivas” en protesta contra la política social del gobierno.

Cuatro días después comienzan las respuestas sindicales, y la primera organización que reacciona es la Confederación

General de Empleados de Comercio, uno de los gremios numéricamente más importantes de la ex CGT N° 2. Los empleados de comercio invitaban a las otras organizaciones gremiales a una acción conjunta. Un día después se conoce una declaración de la Asociación de Trabajadores del Estado. En los días sucesivos se pronunciarán otros sindicatos y federaciones, todos de importancia y representativos de las dos CGT, de la USA y autónomos: la Unión Ferroviaria, la Federación de Obreros Panaderos, la Unión Tranviarios, la Asociación Bancaria, la Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Anexos, la Confederación de Empleados Recibidores de Granos y Anexos, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares, los sindicatos de obreros de los frigoríficos La Negra, Anglo, Ciabasa y Los Cuatrerros, el Sindicato Autónomo de Luz y Fuerza, el Sindicato Obrero de la Industria Aceitera, el Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, la Federación de Obreros Ladrilleros y la Unión Obrera Textil.²⁷

A estos sindicatos y federaciones con sede en la capital se sumaron gremios de Tucumán, Corrientes, San Juan, Salta, Jujuy y Chubut.

La movilización obrera a favor de la política estatal y en contra de la actitud de las organizaciones patronales culminó con un mitin callejero que tuvo lugar el 12 de julio, organizado por la Comisión de Unidad Sindical, la CGT, la Unión Ferroviaria, la Confederación de Empleados de Comercio, la Asociación de Obreros y Empleados del Estado y la Unión Tranviarios. El lema de la concentración era “en defensa de las mejoras obtenidas por los trabajadores por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión”. Fue orador central el representante de empleados de comercio, Ángel Borlenghi. Defendiendo la actitud asumida por el sindicalismo, dijo: “No estamos conformes en que se hable en nuestro nombre; va-

mos a hablar por nosotros mismos. Y nosotros hemos resuelto que el movimiento sindical argentino, colocándose a la altura de los más adelantados del mundo, grave en la solución de los problemas políticos, económicos e institucionales de la República y va a gravitar con absoluta independencia”.²⁸ El tono del discurso de Borlenghi no difería de la actitud que, frente a la relación entre política y sindicatos, tendía a predominar en el gremialismo a comienzos de la década del 40, amparada por el creciente poderío relativo de la organización obrera, que aspiraba a no depender de agrupaciones partidarias.

En todo este proceso —que culminará con los sucesos de octubre de 1945 y con la fundación del Partido Laborista— el punto central sobre el que converge la actividad sindical es el reclamo de participación obrera en las decisiones políticas. La CGT, la USA y los sindicatos autónomos se movilizaron para obtener el derecho de ejercer actividades políticas, lo que obtuvieron a principios de octubre de 1945, a través de la ley 23.852, cuyo artículo 33, inciso 6°, establecía como derecho de las organizaciones gremiales el de “participar circunstancialmente en actividades políticas, siempre que así lo resuelva una asamblea general o congreso. Sólo en caso de que la asociación profesional decidiera una participación permanente y continuada en la actividad política, deberá ajustarse además a las leyes, decretos y reglamentaciones que rijan los partidos políticos”.²⁹

Desde el punto de vista organizativo, esta voluntad encontrará su expresión hacia fines de octubre —luego de la prueba de fuerza dada por los sindicatos el 17 y 18 de ese mes— en la fundación del Partido Laborista, percibido por la mayoría de los dirigentes gremiales como la realización de sus reclamos de autonomía en el nivel político.

El proceso que lleva a la creación del Partido Laborista ha sido descuidado por la mayoría de los investigadores, siendo,

sin embargo, clave para cualquier análisis acerca de las características diferenciales que asume el nacionalismo popular en la Argentina con respecto a otras manifestaciones políticas similares —caso del varguismo— en tanto la participación obrera en éste es vehiculizada por un partido autónomo en el que se expresan las viejas tradiciones reformistas del sindicalismo.

El esquema organizativo del PL —cuya influencia en la victoria electoral de Perón en febrero de 1946 fue decisiva— trataba de articular la participación autónoma de los sindicatos en la esfera política. De acuerdo con su Carta Orgánica, aprobada en una reunión de la que participaron más de 200 dirigentes sindicales, el PL estaría integrado por: 1) sindicatos; 2) agrupaciones gremiales; 3) centros políticos; 4) afiliados individuales. En este último caso se colocaba como cláusula expresa que no se aceptaría “el ingreso [...] de personas de ideas reaccionarias o totalitarias ni de integrantes de la oligarquía”. En el caso de tratarse de trabajadores que hubiesen pertenecido a “partidos de tendencia conservadora”, podrían ser aceptados como afiliados del laborismo, siempre que “no hayan actuado como dirigentes de los mismos”.

El programa del partido, votado en la misma reunión, era de tipo nacionalista democrático en sus puntos referidos a organización política y orientación económica y claramente distribucionista en materia social. La percepción del corte de clases en la sociedad argentina y por lo tanto de las alianzas que eran necesarias a la clase trabajadora, incluía por un lado a la “minoría constituida por latifundistas, hacendados, industriales, comerciantes, banqueros y rentistas y todas las variedades del gran capitalismo nacional o extranjero”.

Enfrentada a esa coalición se encontrarían los “obreros, empleados y campesinos, conjuntamente con profesionales, artistas o intelectuales asalariados, así como pequeños comerciantes, industriales y agricultores”, formando lo que la Declaración

de Principios califica como “la clase laborista que necesita unirse en su propia defensa y en bien del progreso del país”, a la que el partido se proponía organizar en su totalidad, aun cuando “sus columnas principales serán las grandes masas integrantes de los auténticos sindicatos de trabajadores”.³⁰

La Comisión Provisional del Partido Laborista reflejaba esa situación, así como testimoniaba el carácter de vehículo para la unidad de los nucleamientos sindicales preexistentes; antes de proponer una alianza con otros sectores sociales, el PL era, en sí mismo, el producto de un pacto entre viejos y nuevos dirigentes, entre organizaciones tradicionales y nuevas, aunque con predominio de los primeros, determinado por el mero hecho —ya señalado— del mantenimiento de la influencia decisiva de las estructuras sindicales anteriores a 1943.³¹

¿Cómo era visualizada por la elite sindical que controlaba la CGT en 1945 y que constituyó el PL, la relación planteada con un sector del Estado? Dos documentos difundidos por la CGT, en septiembre de 1945 y en febrero de 1946, nos pueden ayudar a reconstruir esa percepción.

El primero de ellos se titula “La CGT frente al confusionismo político”. Aparece en un momento particularmente crucial para el proceso de participación sindical en los orígenes del peronismo, el vivido entre los meses de julio y octubre de 1945.

El acto de adhesión a la política de la Secretaría de Trabajo, motivado por la inquietud sindical de enfrentar a lo que se presentaba como una ofensiva patronal contra las conquistas obreras ya obtenidas, abrió una etapa de dificultades internas en la CGT. Algunos sindicatos, encabezados por La Fraternidad, en los que la influencia socialista era poderosa, comenzaron a atacar a la dirección de la CGT, calificándola como “colaboracionista”.

La dirección cegetista reacciona contra estas acusaciones y contra los argumentos que se desplegaban detrás de ellas, en el documento mencionado. “Se arguye —dice— que la

conducta [de la CGT] es de colaboración con el gobierno de facto, haciendo una intencional confusión de partidos políticos e instituciones obreras. Como si ignorasen, quienes tal confusión promueven, que los partidos son entidades de opinión con referencia al desarrollo del ejercicio del poder gubernativo; coaliciones destinadas especialmente a la toma del poder o, en su defecto, ejercer la oposición o ser colaboradoras de quienes lo desempeñan y que las organizaciones sindicales son coaliciones económicas fundadas en naturaleza de clase, frente a las cuales todos los gobiernos son lo mismo, representantes más o menos genuinos de la clase capitalista.”

A partir de esta caracterización, la CGT define los alcances de su acercamiento al gobierno, en términos que vinculan su actitud con tradiciones anteriores del sindicalismo en la Argentina: “La CGT no puede presentarse ante el actual gobierno, como no lo hizo ante otros, en la para ella impropia actitud de partido. Cumplió su función específica de defensa de los intereses de la clase trabajadora; vio con agrado sus decisiones cuando resultaron concordantes con sus objetivos y reprobó sin hesitación las que los dañaron y las que en cualquier forma pudieran menoscabar su independencia de entidad sindical. Del mismo modo lo efectuó diariamente frente a los patrones o instituciones patronales, sin que a nadie se le ocurriera el despropósito de ver en esta conducta una colaboración con la clase capitalista”.

Este intento de explicar su actitud como una continuidad con la tradición del sindicalismo en materia de relaciones con la patronal y con el Estado a propósito de sus reivindicaciones categoriales, se extiende también a un tema ideológico que predominó en el movimiento obrero durante la segunda guerra mundial: el del fascismo; precisamente el punto sobre el que se centró la acusación política más directa de la alianza opositora al peronismo.

“La CGT —dice la declaración mencionada— se ha de-

senuelto y seguirá desenvolviéndose dentro de la más absoluta independencia frente a los partidos políticos y los gobiernos [...] Tal disposición no es otra que la consecuencia inevitable del carácter representativo de la clase obrera y de su fuerza de gravitación en el escenario económico-social de la república. Entidad que agrupa prácticamente a medio millón de obreros, la fuerza más auténtica de una democracia auténtica, no puede quedar indiferente ante la discusión de problemas que afectan a la médula misma de la vida institucional del país. Fue la nuestra la primera voz que se levantó contra el fascismo interno y externo y contra los desmanes de las bandas desorbitadas; en suelo argentino, en perjuicio de la clase obrera, amparada por tolerancias inexplicables.”

La otra declaración significativa de la CGT fue publicada como respuesta a un documento difundido por el gobierno de los Estados Unidos el 12 de febrero de 1946: *El Libro Azul sobre la Argentina*, en el que se acusaba al gobierno argentino y en especial a Perón de vinculaciones con los gobiernos del Eje.

Se insiste allí en el argumento ideológico del antifascismo de las organizaciones sindicales vinculadas al peronismo: “Por nuestro fervor democrático fuimos y somos antifascistas y anti-totalitarios y por eso luchamos denodadamente contra Hitler y Mussolini cuando Wall Street, coaligado con otros sectores del capitalismo mundial alimentaba con sus dineros robados a las necesidades de los proletarios a la bestia nazifascista, para utilizarla como fuerza de choque tendiente a aplastar las aspiraciones de mejoramiento de los trabajadores de Europa”.

Y nuevamente se plantea en este documento la visión con que la CGT explica su vinculación con el peronismo, a partir de la obtención —a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión— de reivindicaciones obreras largamente demoradas. “Las organizaciones obreras —enfatisa— en estos últimos años no han hecho más que repetir su gestión anterior, con una sola diferencia, una enorme diferencia. Mientras que en

años anteriores tropezaron con el egoísmo frío y la indiferencia de los gobiernos de la oligarquía, que Braden quiere nuevamente imponernos, en los hombres del gobierno revolucionario la clase obrera encontró el acogimiento favorable que sólo dispensan quienes quieren realizar justicia. Fue así como el proletariado argentino ha podido superar en lo económico y social todo el atraso proveniente de los gobiernos del fraude y la venalidad.”

El análisis nos ha llevado a marcar, simultáneamente con el peso objetivo de los dirigentes y las estructuras sindicales tradicionales en el proceso de orígenes del peronismo, la percepción que éstos tenían acerca del contenido que asumían las alianzas con un sector estatal, percepción que se resume en el balance trazado por la dirección de la CGT entre las reivindicaciones tradicionales del sindicalismo y la satisfacción de los reclamos a través de medidas oficiales.

Esta visión de las relaciones entre sindicalismo y Estado se enlaza con una tradición vigente en el gremialismo por lo menos desde 1930 y coincidente con un proceso general de crecimiento de la intervención del Estado en todos los órdenes sociales. El sector gremial que apuntalará el surgimiento del peronismo no hizo más que profundizar esa tendencia preexistente, avalado para ello por la objetiva receptividad que sus planteos encontraron en los círculos gubernamentales.

En el trasfondo de las sucesivas crisis de conducción que vive la CGT durante la década del 30, se halla la complicada trama que regula las relaciones entre la actividad sindical y la actividad política. La manifestación más expresiva de ese conflicto giró alrededor de la discusión de la actitud a asumir frente al Partido Socialista que era, precisamente, la agrupación política con mayor influencia gremial. Frente a la injerencia del socialismo y, en general, a toda tentativa que pudiera ser calificada como una forma de instrumentar al sindicalismo a favor de los objetivos de un grupo partidario cualquiera, sur-

gía una y otra vez, con fuerza creciente entre numerosos dirigentes, una orientación contrapuesta: la de transformar al movimiento sindical en un grupo de presión que, además de operar autónomamente los partidos en aquellas áreas específicamente gremiales, tendiera a transformarse, él mismo, en eje de un nucleamiento político nacional.

Un dirigente obrero y a la vez diputado socialista, Jacinto Oddone, hace referencia a estos conflictos en el sindicalismo, anteriores al peronismo. Dice: “La CGT era una institución cuya importancia crecía día a día. Agrupaba a gremios que en cualquier momento podían paralizar la vida económica del país [...] Por esa razón, quienes estaban a su frente se habían convertido en hombres de gran importancia, que tenían que habérselas con las más altas autoridades de los municipios, de las provincias y de la nación [...] Y se acercaron a la Casa Rosada. Y fueron amigos de todos los gobiernos, aun antes de que se constituyera la CGT”.

Oddone hace referencia a la aparición, en la década del 30, del “dirigente gremial, especie de caudillo desconocido hasta entonces” que a partir del poder de los sindicatos intentaba invadir esferas de acción de los políticos, como, por ejemplo, las movilizaciones callejeras por causas no específicamente gremiales. “Autosugestionados —dice— vieron crecer sus figuras al punto de creer que podían dirigir desde afuera los destinos del país, es decir, sin ser gobierno; o cuando menos constituir un peso tal que hiciera inclinar la balanza gubernamental hacia el lado que ellos decidieran que se inclinase.” Y agrega: “Perturbada ya su cabeza, no pocos entrevieron la posibilidad de convertir la Central en una poderosa organización política que reemplazara al Partido Socialista, cuyos pocos millares de adherentes les resultaban una cosa despreciable frente a los centenares de miles que reunía la CGT”.³²

El testimonio, pese a su carácter parcial, vale históricamente. Si la reconstrucción de la USA en 1935 puede ser juzgada

como formando parte de esta perspectiva; si el crecimiento de los sindicatos autónomos durante el período forma parte de un proceso similar, en tanto la reafirmación de la autonomía equivalía a la voluntad de no integrarse en una central en cuya dirección predominaba una alianza entre militantes socialistas y comunistas; la propia crisis interna de la CGT en 1942/1943 y la actitud asumida entonces por quienes constituyeron la CGT N° 1, también puede ser enfocada en esta dirección.

Y precisamente, la estructura sindical que conformó la base de sustentación del peronismo fue la resultante de una alianza entre los sindicatos que habían formado la CGT N° 1, los que integraban la USA y los autónomos, a los que se sumaron los gremios nuevos y aquellos organizados paralelamente a los sindicatos que habían dado vida a la CGT N° 2 y que mantenían una vinculación estrecha con el comunismo y el socialismo. Estos grupos gremiales se unificarán en la CGT en 1944/1945 y organizarán el Partido Laborista, en el que verán la realización de la autonomía frente a los partidos políticos del sindicalismo, larvadamente manifestada, como orientación, en las crisis de 1935 y 1942.

A medida que se acercaba la fecha para las elecciones presidenciales, las fuerzas políticas opuestas a la orientación que, a través de Perón, predominaba en el gobierno militar, entraron en aceleradas tratativas para una coalición que finalmente cristalizaría en la Unión Democrática. Hacia 1942, la constitución de la Unión Democrática había tenido como eje impulsor a la CGT, tal como lo expresa la resolución aprobada entonces por el segundo congreso de la central.³³ Tres años después sólo una minoría sindical se alinearía con los viejos partidos detrás de ese proyecto de alianza. El resto del sindicalismo —su mayoría— optará por contribuir a la estructuración de otra coalición.

La influencia que mantenían los socialistas en el sindicalismo se advierte en la ofensiva llevada a cabo a partir de sep-

tiembre de 1945 para obtener la desafiliación de varios gremios de la CGT. El 6 de ese mes La Fraternidad abandona la central, acusando a su dirección de haber “permanecido indiferente ante la clausura e intervención de sindicatos, detención de dirigentes, asaltos a locales obreros, creación colateral de sindicatos con propósitos divisionistas, proscripción de la libertad sindical y democrática, aislamiento internacional, carestía de la vida, inflación y armamentismo que resiente el nivel de vida de nuestro pueblo y compromete seriamente el porvenir de nuestro país”.³⁴

A La Fraternidad se agregan, sucesivamente, la Unión Obrera Textil y el Sindicato de la Industria del Calzado, en coincidencia con una decisión de la Comisión Gremial del Partido Socialista, recomendando la desafiliación de los sindicatos a la CGT.³⁵

El impacto fue absorbido por la central, que por esa fecha reorganizó su Comisión Administrativa y su Comité Central Confederal y comenzó a incorporar a muchos sindicatos autónomos y a casi todos los que integraban la USA. En una declaración referida al problema, señala: “Impacientes en la obediencia de sus mentores políticos, se apresuran a materializar dictatorialmente la división. No llaman previamente, como corresponde, a los afiliados para que decidan sobre su propuesta separación, ni consultan al gremio en ninguna forma con antelación a ella”.³⁶

Salvo en el caso de La Fraternidad, la respuesta de la CGT fue impulsar la creación de gremios paralelos, que se incorporaron a la serie de sindicatos de ese tipo ya constituidos, casi todos en áreas en las que existía influencia comunista, como construcción, madera, metalúrgicos.

El enfrentamiento entre las dos corrientes sindicales alcanza su culminación en el mes de octubre, en vinculación con el agravamiento de la crisis política general.

El choque entre ambas significaba la contradicción entre

dos proyectos políticamente contrapuestos de alianza entre clases. La imagen de un enfrentamiento entre grupos que apoyarían una orientación heterónoma, expresada por el nacionalismo popular y otros que, por el contrario, encabezarían una línea de autonomía obrera, no parece responder a la realidad. Tanto el peronismo cuanto la Unión Democrática representaban alternativas de alianzas entre distintas clases y grupos sociales. Si la participación de sectores propietarios y de una elite político militar ligada a ellos en la coalición peronista hizo que la participación sindical en ésta fuera conceptuada como de tipo heterónomo, lo mismo podría decirse (y quizás con mayor propiedad por el carácter de los grupos propietarios que participaron) de la presencia sindical en la Unión Democrática.

El vuelco final de las corrientes mayoritarias del sindicalismo hacia el peronismo, que tiene lugar en octubre de 1945, se precipita, como había sucedido en el mes de julio, como reacción obrera frente a una ofensiva contra sus conquistas reivindicativas por parte de los grupos de grandes propietarios industriales, agrícolas y comerciales.

Ése es el sentido que la CGT le otorga a los acontecimientos político-militares que comienzan el 9 de octubre con la renuncia de Perón a sus cargos en el gobierno y que culminan con el paro general y la movilización callejera del día 17.

Y efectivamente, los cambios en el nivel gubernamental parecían tomar esa dirección. El discurso del nuevo secretario de Trabajo y Previsión, Juan Fentanes, anunciaba una brusca modificación en las orientaciones del Estado frente a los sindicatos. "El progreso de las masas trabajadoras debe seguir el mismo ritmo de la economía general del país. No puede ser estancado por fuerzas regresivas ni puede ser acelerado con audaces improvisaciones. A los patrones les anticipo que no se impondrán medidas que no hayan con-

tribuido a estudiar, ni remedios drásticos con desconocimiento del derecho legítimo de los que constituyen un factor ponderable de la producción, porque su espíritu de empresa es tan importante para el progreso como lo es el esfuerzo del trabajador. El Estado no debe sustituirse a las fuerzas vivas en la dirección de la economía general; tampoco está para imponer las normas del trabajo que las propias partes interesadas no han analizado y cuya discusión entre éstas no ha sido agotada".³⁷

Estos cambios de orientación anunciados desde el gobierno fueron percibidos como el final de una política de reformas con las que el sindicalismo había logrado satisfacer una serie de reivindicaciones postergadas y a partir de la cual la CGT había elaborado su estrategia de apoyo a un sector gubernamental. Analizando esas conquistas ya obtenidas, la CGT resumía, en un documento ya citado: "Fueron positivamente mejorados en sus condiciones de trabajo, vivienda, salubridad, jornada y retribuciones, grandes masas de trabajadores de los ingenios azucareros y forestales de las provincias y territorios norteros; muchos millares de obreros de las distintas industrias de la Capital y sus alrededores obtuvieron con el tesonero apoyo de la Confederación General del Trabajo sustanciales mejoras para una vida de mayor bienestar y dignidad; asimismo, con su apoyo eficiente una considerable cantidad de gremios esparcidos por todo el país solucionó beneficiosamente gran número de problemas".³⁸

Si en el período anterior el crecimiento de la ocupación obrera como producto del proceso de industrialización no había traído aparejado una suba de los ingresos reales sino su estancamiento o aun su descenso, en el período 1943/1945 esta tendencia cambiará: a la par del crecimiento de la tasa de ocupación se operó, progresivamente, el del índice de los salarios reales, tal como lo indica la tabla:

Nivel de ocupación y salario real en Buenos Aires 1929 = 100

	Salario real	Ocupación
1940	98	129,18
1941	98	135,01
1942	101	140,63
1943	107	147,02
1944	118	155,24
1945	118	155,08

FUENTE: *Investigaciones Sociales*, 1943/1945, pp. 61 y 258.

Es importante destacar que la tendencia hacia la suba de salarios reales en una situación de aumento constante de la ocupación, alcanzó especialmente a aquellos sectores obreros menos calificados. Tomando como punto de partida el año 1939, la serie de los salarios reales de los obreros calificados y no calificados en la ciudad de Buenos Aires es la siguiente:

Salario real de obreros calificados y no calificados 1939 = 100

	Calificado	No calificado
1939	100	100
1940	100,89	100,40
1941	101,26	100
1942	104,18	103,69
1943	109,50	115,34
1944	120,89	135,18
1945	120,89	134,82

FUENTE: Dirección de Estadística Social, *Condiciones de vida de la familia obrera*, 1943/1945, p. 74.

El aumento de los ingresos reales de los trabajadores, luego de una década de expansión productiva sin mayor distribución, se vio respaldado, además, por un mejoramiento en

las condiciones de trabajo, traducido en la firma de gran cantidad de convenios colectivos y en la aprobación de un cuerpo legal en el que se incluían virtualmente todas las reivindicaciones propuestas por la CGT desde su constitución y por las otras entidades gremiales.

El saldo de reformas que avalaba la posición de la CGT a favor de la alianza populista y en contra de la alianza opositora de la que participó la minoría del sindicalismo, era enorme y constituía la base objetiva sobre la cual podía instrumentarse la coalición con participación sindical que triunfó en las elecciones de febrero de 1946. Fue esa percepción reformista, reforzada por la posibilidad de autonomía organizativa que en el plano político expresó el Partido Laborista, lo que llevó a la mayoría de los viejos dirigentes sindicales a instrumentar las formas políticas más importantes del nacionalismo popular en la Argentina.

3. Desarrollo industrial y orientaciones obreras

Los datos presentados hasta ahora, referidos a la situación del movimiento obrero en el período previo al peronismo, nos han permitido poner en duda el peso habitualmente atribuido a la distinción entre obreros viejos y obreros nuevos como variable independiente que explica el desarrollo de todo movimiento nacional-popular en sociedades capitalistas dependientes, cuando en éstas tiene lugar un proceso de industrialización. En la Argentina, aceptando para el caso del peronismo su inclusión en el conjunto de los movimientos nacional-populares, resulta claro que, al menos en el momento de su gestación, el corte en el interior de la clase obrera es insuficiente para remitir a él como explicación de su surgimiento.

En tanto el predominio de trabajadores y organizaciones

nuevas sobre tradicionales, aparece, en las teorías que hemos reseñado en la primera parte de este trabajo, como condición necesaria para la génesis del populismo, y dado que las características que tuvieron los participantes en el peronismo no coinciden con las postuladas por la teoría, ella expresará, en todo caso, condiciones suficientes pero no necesarias para el surgimiento de experiencias políticas nacionalistas populares. Ésa es nuestra hipótesis.

Efectivamente, el examen de los datos sobre el movimiento obrero en la Argentina en el período previo al peronismo nos llevó a estimar que algunas de las características más importantes señaladas por la teoría no se hallaban presentes. Pero nuestro objetivo no supone, solamente, la constatación de la incongruencia entre los datos manejados para la Argentina y los supuestos de la teoría, sino algo más: que la teoría que describe a las conductas obreras en el populismo como absolutamente heterónomas y manipuladas no se aplicaría exactamente en aquellas situaciones en las que, a la estructuración política del movimiento y a su ascenso al poder, antecede un momento inicial en el proceso de industrialización en el que tiene lugar un intenso ritmo de acumulación capitalista, sin la vigencia simultánea de políticas distribucionistas que puedan operar una integración rápida de la clase obrera en el sistema.

En estos casos —del cual la Argentina en la década del 30 sería un ejemplo— los comportamientos obreros resultantes no divergirían esencialmente de los marcados por el modelo clásico de industrialización en los países centrales y la explicación de las peculiaridades del nacionalismo popular no podría atribuirse a rasgos exclusivamente radicados en el proceso de formación de la clase obrera, sino a las modificaciones operadas por un crecimiento industrial desplegado en la estrechez marcada por la dependencia externa, sobre las relaciones de fuerza del conjunto de las clases y a una redefinición de los objetivos de la sociedad nacional, expresada en

nuevos reagrupamientos y alianzas entre sectores y clases, estos sí radicalmente distintos de los que tuvieron lugar bajo el modelo clásico de industrialización en los países centrales.

En este último sentido, establecer un corte entre los procesos tempranos de crecimiento de la sociedad industrial y los que tuvieron lugar en el siglo XX en los países dependientes, parece legítimo y es ya un principio vigente en casi todos los análisis. Las consecuencias sociales no son las mismas en cada caso y exigen, por lo tanto, un encuadramiento especial que respete sus diferencias.

Pero el intento de no asimilar mecánicamente la experiencia europea a la explicación de las consecuencias sociales del desarrollo industrial en sociedades que advienen a él tardíamente, no podría llevar legítimamente a otras generalizaciones que aspiren a abarcar a cada uno de los movimientos nacional populares como si se tratara de meras ejemplificaciones de una totalidad.

Para el caso del peronismo creemos poder hablar de una situación en la cual, desde el punto de vista de las conductas obreras, el corte con el modelo clásico no es radical, aunque la alianza de clases en que se expresará ese comportamiento se acerque más a los modelos elaborados por la sociología política para expresar la participación popular en sociedades de industrialización tardía.

La similitud con el modelo clásico estará dada por la presencia en ambos casos de un momento inicial en el que el crecimiento capitalista se realiza sobre la base de un aumento de la explotación de la mano de obra y de una sistemática marginación obrera de las decisiones políticas, lo que provoca un montón crecido de reivindicaciones particulares.

La diferencia habrá que indagarla en el hecho de que la búsqueda de participación obrera se cruzó con fragmentaciones y reagrupamientos en el interior de las clases propietarias y de los grupos que tendían a representarlas, de modo tal que

la alternativa para una alianza interclases se abrió rápidamente. Las formas en que se produjo el crecimiento industrial en la Argentina, dadas las condiciones de dependencia frente a los centros imperialistas que lo enmarcaron y al control que sobre éste ejercieron capas sociales y grupos políticos ligados a la renta de la tierra, trajeron como consecuencia el desarrollo de fuerzas internas no obreras, marginadas también por el sistema de dominación, cuya presencia obligó a cambiar, en el nivel político social, el plano de las coaliciones clásicas y a desplazar momentáneamente el eje de las contradicciones sociales, de una situación de enfrentamiento directo entre trabajadores y propietarios de los medios de producción a un realineamiento de fuerzas que cortó verticalmente a la sociedad y que cristalizó en nuevas formas de alianza de clases, elaboradas a partir de la coincidencia en un proyecto más amplio de política nacional, proyecto que supondría cambios en el sistema.

Si en los casos clásicos de desarrollo capitalista éste significó crecimiento dentro de un sistema claramente establecido, con más o menos rígidas “reglas de juego” para el enfrentamiento interno de clases, “en el que el conflicto abierto de dos clases antagónicas acompañe necesariamente la implantación de una economía industrial en la cual las nuevas categorías de trabajadores industriales participan únicamente a través de su trabajo”,³⁹ en los casos de desarrollo capitalista dependiente el crecimiento traerá aparejado no un desarrollo lineal, con perdurable hegemonía de un sector social que en el momento conveniente para sus intereses convoca la participación de los sectores populares, sino un proceso de crecimiento que, a medida que se desarrolla, provoca cambios y rupturas en los propios sectores dominantes y obliga, por lo tanto, a sucesivos replanteos en el interior del sistema hegemónico.

Ahora bien, dentro de esa peculiaridad del crecimiento industrial en las áreas dependientes —peculiaridad que es posible generalizar como sustrato del conjunto de los movimien-

tos populistas— pueden, a la vez, suscitarse modificaciones pasibles de una especificación teórica.

Un punto central a especificar es, a nuestro juicio, la forma de participación obrera, según se haya dado o no un momento inicial en el ciclo industrializador, caracterizado por la asincronía entre acumulación y distribución.

En esas condiciones, al proceso de cambios en los sectores dominantes de la sociedad y en el tipo de relaciones con el exterior que caracterizan a los movimientos populares, habrá que sumar el antecedente de un rechazo obrero a las consecuencias primeras del crecimiento capitalista que se manifiesta, en la génesis del nacionalismo popular, a través de la decisiva influencia que tuvieron sobre éste las organizaciones sindicales.

En otros casos —quizá los más utilizados para la concepción teórica— ese momento inicial no tiene lugar por lo que la industrialización aparece como consecuencia de los cambios en el sistema expresados por el nacionalismo popular, y por lo tanto coincide virtualmente con el intervencionismo social y con la ausencia de una fuerte tradición sindical reformista autónoma.

Ambas situaciones, aunque diferenciadas del modelo clásico por el contexto de dependencia nacional que rodea a la industrialización, darán lugar entre sí a procesos de participación popular disímiles. En el primer ejemplo intentamos resumir las características que, a través del peronismo, asumió el nacionalismo popular en la Argentina; en el segundo, las del varguismo en Brasil, dos casos que, sin embargo, a menudo se asimilan integralmente.

Efectivamente, tanto para la Argentina como para el Brasil el punto de llegada en cuanto se refiere a conductas obreras parece ser el mismo: su movilización es canalizada por movimientos de tipo nacional popular, en lugar de ser integrada a través de canales del tipo “democracia representativa”, al estilo de lo sucedido en Europa.

Pero si el punto de llegada parece, en general, el mismo y se expresa en las similitudes que emparentan al varguismo con el peronismo, un análisis más pormenorizado del proceso que llevó en ambos casos a la mayoría de la clase obrera a adherir a un movimiento nacional popular, permitiría identificar una serie de características diferenciales en cuanto a las formas de articulación del movimiento obrero en ambas experiencias.

Incluso en lo que llamamos el punto de llegada —es decir, el momento en que el movimiento populista ya se halla en el poder— pueden advertirse diferencias significativas entre los casos brasileño y argentino. En el varguismo la clase obrera es integrada al régimen directamente, a través de las organizaciones estatales; no son los sindicatos sino las oficinas del Ministerio de Trabajo el canal directo para las relaciones entre trabajadores y Estado. La secuencia que lleva a los obreros a participar del movimiento nacional popular es intermediada primero por el Estado que, desde un principio, controla la movilización y organiza desde arriba a los sindicatos, los que funcionan como un mero apéndice del poder.⁴⁰

En el peronismo la situación no es equivalente ni siquiera en el punto de llegada. Si bien el movimiento obrero es integrado en el Estado; si bien, incluso, el poder que asumen los organismos públicos para la efectivización de ese proceso es decisiva, los sindicatos, en la medida en que como aparato institucional son preexistentes al gobierno populista, cumplen con una función de mediación entre trabajadores y poder político que les es abiertamente reconocida.

Estas diferencias, que pueden medirse a través del peso institucional que en cada una de las situaciones descriptas mantiene el movimiento obrero cuando la elite populista ya controla el aparato del Estado, marcan, a pesar de sus rasgos particulares, el punto mayor de coincidencia entre peronismo y varguismo. Los momentos previo y posterior a la consolidación en el poder del movimiento nacional popular darán

cuenta de una diferenciación aún más neta entre ambas formas de relación entre la clase obrera y una elite orientada hacia el populismo.

La inconveniencia de generalizar para la Argentina hipótesis acerca de comportamientos obreros que pueden ser fructíferas para otros contextos, se manifiesta al analizar las tres etapas posibles en que puede periodizarse la historia de cualquier movimiento nacional popular:

- 1) la etapa de su estructuración;
- 2) la etapa del control del poder;
- 3) la etapa de la pérdida del control del poder.

Para la primera etapa, la situación argentina permite definir una situación en la que la nueva elite que propone un proyecto populista se encuentra con una clase obrera ya organizada, también poseedora de un proyecto social, a la que expresamente le propone una alianza.

En la segunda etapa, el populismo se consolida en el poder gracias a esa coincidencia de proyectos sociales y si luego la clase obrera irá perdiendo paulatinamente autonomía, esa pérdida —como ya hemos señalado— no significará el abandono del reconocimiento de la independencia institucional de los sindicatos, aunque ciertamente dicho reconocimiento haya podido ser en cierta medida formal. De todas maneras, la CGT bajo el peronismo integraba como tal el aparato del Estado en paridad con otras fuerzas y mantenía sus estructuras institucionales autónomas.

Este reconocimiento encontraría su significación más clara en la tercera etapa, cuando el peronismo ha sido ya desalojado del poder y son los sindicatos la única forma organizativa ligada a él que permanece en pie, hasta el punto de transformarse, de ahí en más y hasta el presente, en la estructura principal del populismo en el llano y en la vanguardia

de todo intento de reconquista del poder. La continuidad del movimiento nacional popular no queda radicada, como en el caso brasileño, en la burocracia política, sino en las organizaciones gremiales, que se transforman en la columna vertebral del movimiento, mientras que la primera sólo llega a investir una representatividad formal, invirtiéndose así los papeles que habrían jugado ambas estructuras —la política y la sindical— en la segunda etapa.

Este esquemático listado de la dinámica que relaciona sindicatos y populismo en las tres etapas, anotado a partir de las consecuencias más notorias que la intensidad de la participación obrera en el desarrollo de los movimientos populistas ha traído aparejada, hasta la actualidad, es decir, justificado como un análisis que va del presente hacia el pasado para tratar de identificar una causación estructural del primero, nos remite a un examen mucho más detallado de ciertos contextos sociales que se hallan detrás de los procesos de desarrollo de cada comunidad nacional.

En primer lugar, del contenido que asumió la industrialización sustitutiva generada durante la década del 30, definido a partir del análisis del bloque de poder que controló económica, social y políticamente el “despegue” de la manufactura.

Es decir, que la pregunta inicial que proponemos para poder internarnos en la especificidad del caso peronista nos induce a responder acerca de los rasgos que asumió en la Argentina el ciclo de industrialización sustitutiva *desde el punto de vista de la alianza de clases que, entre 1930 y 1943, lo llevó adelante*.

Y es en esta dirección donde el interés teórico que plantea el peronismo se acrecienta, pues *se trata de una experiencia de nacionalismo popular que llega al poder cuando lo sustancial del proceso de sustitución de importaciones está ya realizado*.

En un trabajo anterior ya citado hemos analizado los rasgos centrales que desde un punto de vista social y político asumió ese proceso durante la década del 30 en la Argentina. Si

en otras sociedades dependientes la crisis del 30 contribuyó a desplazar del control absoluto del poder político a las viejas elites ligadas a la producción de bienes primarios, en la Argentina, por el contrario, la crisis trajo aparejada una restauración de la oligarquía tradicional a través de su ala más privilegiada. Se trató por lo tanto de un proceso de industrialización no dirigido desde el Estado por sectores medios industriales, sino por una elite representativa de los grupos más poderosos de los hacendados ligados al comercio de exportación, elite que procuró establecer, a través de políticas estatales, las bases para una coincidencia de intereses con los grandes industriales.

No abundaremos en detalles acerca de los rasgos que asumió ese proceso de movilización de la manufactura bajo control conservador que ya hemos descrito en el trabajo citado. Interesa, en cambio, resumir sus consecuencias sociales más importantes, como suma de condiciones que permitirán conceptualizar luego al peronismo como nueva forma de alianza de clases que implica, a su vez, el nacimiento de una nueva política:

- a) en primer lugar, la caracterización del bloque de poder previo al peronismo no como oligárquico tradicional “puro” sino como resultado de una alianza entre un sector —el más privilegiado— de la oligarquía ganadera y los propietarios industriales, éstos en una primera etapa escasamente diferenciados internamente;
- b) la fragmentación que se opera, en cambio, en el sector de propietarios agrarios, de especial significación en el nivel de la política, ya que las orientaciones de los ganaderos desplazados —encarnizadamente antiindustrialistas— gobernarán el tono ideológico de los principales partidos de oposición, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista;

- c) el crecimiento en el monto de la mano de obra ocupada en la industria, es decir, lo que en principio podríamos definir como surgimiento de un “nuevo” proletariado, cuyo ingreso no se efectúa en momentos de “intervencionismo social” sino, por el contrario, de represión política y de restricciones en los consumos, lo que acentúa la oposición obrera al sistema, y el crecimiento de la organización sindical;
- d) el desarrollo, sobre todo a partir de la guerra, de una capa numéricamente poderosa de industrias subsidiarias y de mantenimiento, cuyos propietarios se enriquecieron velozmente al amparo del “proteccionismo automático”. Si en una primera etapa la sustitución de importaciones se basó en la expansión de viejas industrias y en la radicación de nuevas empresas extranjeras o en la ampliación y transformación de las plantas que muchas ya poseían y que estaban dedicadas a la comercialización de productos importados, en una segunda etapa la industrialización sustitutiva se completa a través de estos nuevos industriales que proliferan a partir de la circunstancia excepcional de la guerra, pero que requieren que el Estado siga protegiéndolos una vez finalizada ésta. El grado de organización de esos industriales para la defensa de sus intereses inmediatos era mínimo, así como el eco que pudieron encontrar en los partidos políticos tradicionales;
- e) el crecimiento hasta límites nuevos de las funciones del Estado en el área económica, así como la asunción de un papel equilibrador de los intereses particulares de las clases que constituían la alianza de poder, lo que tendía a acentuar su autonomía relativa.

Esta constelación de fuerzas sociales —a las que habría que sumar, por el papel desencadenante que jugarían en el proceso, a las Fuerzas Armadas— que caracteriza en líneas generales a la situación previa al surgimiento del peronismo, hace referencia a una estructura social particularmente compleja, es decir, a un punto de partida del que despegará el nacionalismo popular considerablemente más plural y, a la vez, más articulado en alianzas entre clases y sectores de clases, en cuyo fondo operan los datos de un crecimiento industrial considerable que ya había llegado, al promediar la década del 40, a transformarse en el polo más dinámico de la estructura económica.

Visto dentro de este marco ¿qué significados adquiere el peronismo, entendido en uno de sus planos, es decir, como política de un sector de las clases propietarias cuyo rasgo diferencial consiste en ofrecerle canales de participación a las clases populares, promoviendo una apertura en las estructuras de poder?

A nuestro entender, y como hipótesis que será necesario desarrollar, la participación obrera era condición necesaria para llevar a cabo el proyecto hegemónico de un sector de las clases propietarias —principalmente el que agrupaba a los industriales menos poderosos— y de la burocracia militar y política que tendía a representarlos, en un doble plano:

- En primer lugar, en el de los obreros concebidos en su función de consumidores para una industria cuyo futuro sólo podía depender de la ampliación del mercado interno. Esto planteaba abiertamente la necesidad de intervencionismo social que no había surgido en la primera etapa del ciclo de sustitución de importaciones, porque en ella a la industria le había bastado con llenar el vacío, en un mercado preexistente, dejado por las manufacturas extranjeras, y que tampoco había surgido durante la guerra por el insospechado crecimiento de la exportación de productos industriales.⁴¹

- En segundo lugar, por las propias necesidades de legitimación política que tenía la elite estructurada alrededor del movimiento militar de junio de 1943 que, tras una serie de intentos fracasados por lograr el apoyo de agrupaciones tradicionales (especialmente del radicalismo), sólo pudo encontrar como base de su legitimidad la movilización de las clases populares.

Lo importante a señalar, de cualquier manera, es el hecho, absolutamente nuevo y, como se vio rápidamente, circunstancial, de que la satisfacción de las reivindicaciones obreras acumuladas en la primera fase del crecimiento sustitutivo coincidía con el proyecto de desarrollo económico de un sector propietario. Esta situación es la que hace viable una alianza interclases como la expresada en el peronismo.

Ahora bien, si la existencia de un proceso de diferenciación en el interior de las clases propietarias puede ser planteada como una de las condiciones que propiciaron el surgimiento del nacionalismo popular a mediados de la década del 40 en la Argentina, ¿qué papel puede haber jugado en el mismo proceso una eventual diferenciación interna en la clase obrera, tal como lo enfatiza la literatura sociológica corriente?

Es evidente que en el trasfondo del proceso de movilización popular que se opera durante la década del 30 y que estallará en el peronismo, se encuentra el crecimiento del monto de la mano de obra ocupada en la industria. Sería posible, en ese sentido, aceptar como una base general para el análisis de los cambios de la composición interna del proletariado originados en ese proceso de crecimiento, una gruesa distinción entre obreros “viejos” y obreros “nuevos”. Pero el camino analítico hacia una discriminación entre los “nuevos” surgidos como obreros industriales a partir de mediados de la década del 30, obliga a asociarlos, en tanto fuerza de trabajo, con el proceso mismo de industrialización, si lo que interesa

es conceptualizarlos en términos estructurales y no psicosociales. Ese proceso supone, básicamente, y en la medida en que trae aparejada una expansión que puede medirse a través de la aparición de nuevas fábricas dentro de las viejas ramas y en el desarrollo de nuevas ramas industriales, un crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en el mercado.

La oferta, estimulada por las posibilidades de crecimiento de la manufactura, agruparía a quienes, genéricamente, se considera como los “nuevos” obreros. ¿Cómo desglosar en el interior de esa categoría? Un listado más o menos elemental nos indica que el crecimiento de la mano de obra ocupada pudo estar integrado por:

- 1) migrantes de zonas rurales atrasadas, sin experiencia de control de sus propias condiciones de existencia, sin hábitos de trabajo industrial, socializados dentro de valores tradicionales y sin ninguna experiencia de participación autónoma en el área política, pese al proceso de sufragio universal abierto en 1912 y al ciclo de apogeo y declinación del radicalismo;
- 2) migrantes de zonas rurales con desarrollo capitalista, expulsados por la crisis agraria;
- 3) jóvenes, hijos de obreros urbanos;
- 4) mujeres de origen urbano;
- 5) obreros industriales, desocupados durante la crisis del 30 que sólo comienzan a obtener otra vez trabajo permanente a partir de la expansión posterior a 1935.

De estos cinco subtipos sólo los agrupados en 1) coincidirían, a priori, en términos de orientaciones, con las características que habitualmente son adjudicadas en un sentido lato a la nueva clase obrera. Es decir, que aun aceptando colocar “entre paréntesis” a los viejos trabajadores, desconociendo así su efectiva participación en la génesis del populismo,

se hace necesario, para poder otorgarle jerarquía explicativa suficiente a la presencia de los nuevos, especificar mucho más el concepto. El primer reclamo contra su uso habitual es, pues, el de su bajo nivel de especificidad. Si el punto de partida para la explicación del populismo es la heterogeneidad obrera, ella debe ser particularizada mejor.

Nuestro punto de vista es que la participación de los trabajadores en los orígenes del peronismo debe ser explicada fundamentalmente por su contrario, es decir, por la homogeneidad de la clase obrera como fuerza de trabajo explotada, en un momento en el que culmina un largo ciclo de acumulación sin distribución.

Peor aún en el caso en que se decida partir de la heterogeneidad, ésta, manteniéndonos en el nivel de los actores, debería ser precisada de una manera menos gruesa que la que propone la división entre viejos y nuevos.

En esa dirección, se daría entonces un paso analítico al discriminar, dentro de los nuevos, según su origen, de modo tal que las características tradicionales o anómicas supuestas para la totalidad quedarían, en todo caso, reservadas sólo para un sector, el de los migrantes provenientes de zonas agrarias atrasadas, cuya adhesión al populismo, por masiva que ella fuere, no alcanzaría para explicar el monto total de la participación obrera.

Más pertinente resultaría categorizar la heterogeneidad según *tipos de experiencia industrial*, lo que permitiría cortar en el interior de las otras categorías propuestas.

Podría hablarse, en ese caso, de obreros con experiencia exitosa en la lucha por el control de sus propias condiciones de existencia; de otros, ubicados en el polo opuesto, sin ninguna experiencia política ni sindical y, finalmente de un tercer estrato, cuya importancia en el análisis de los orígenes del peronismo nos parece decisiva, en el que podríamos agrupar a aquellos trabajadores con una experiencia de lucha autónoma fracasada.

Nos referimos, en este caso, a un núcleo de trabajadores, de origen urbano o rural, “viejos o nuevos”, cuya experiencia en la industria —hasta 1943-1944— de enfrentamiento con el Estado y con los patrones no obtiene resultados tangibles, lo que crea en ellos una “conciencia de oposición” y un estado de disponibilidad para encarar la satisfacción de sus reivindicaciones gremiales o políticas por canales distintos que los puestos a prueba en el período anterior.

Se trataría, por lo tanto, de una heterogeneidad cuyos indicadores surgirían de la estructura misma de las relaciones de los actores, como obreros, enfrentados al Estado y a los empresarios por reivindicaciones de clase, y no de su experiencia anterior o del choque entre ella y un genérico “mundo urbano”. Su alcance no daría para cortar en dos las orientaciones obreras globales frente al populismo, pero sí para discriminar *formas o tipos de participación* predominantes dentro de una mayoría obrera que colabora activamente en la constitución de una alianza nacionalista popular, como salida política frente a otra alternativa de alianza, a fin de satisfacer así las reivindicaciones acumuladas durante más de una década de expansión capitalista.

En efecto, a medida que el razonamiento acerca de las peculiaridades de los trabajadores surgidos en las condiciones creadas por la industrialización con control conservador tiende a complicarse, adquiere, a su vez, nuevas dimensiones el problema de las *formas de participación* de la clase obrera en un movimiento nacional popular: la hipótesis relativa a una mera ligazón de tipo irracional, espontánea y puramente inmediateista en término de reclamos, parece comenzar a perder consistencia por imposición de su simplicidad, que no se corresponde con la articulación más diferenciada del mundo obrero.

Es así como, tratando de seguir una dirección analítica más refinada, la heterogeneidad obrera se proyecta al plano de una mayor diversidad posible de formas de participación en el movimiento nacional popular y por ello, el privilegiar

una sobre las otras se transforma en una cuestión empírica, no teórica, salvo que se parta de un estereotipo.

Las formas de participación de la clase obrera en el populismo se despliegan en un arco que puede ir desde las formas más pasivas hasta las más activas. En primer término, como proyecto autónomo menos estructurado, puede pensarse en el mero apoyo electoral; luego en el apoyo a través de movilizaciones callejeras o en las fábricas; en la participación a través de organizaciones políticas; en la participación política a través de organizaciones gremiales, lo que supone una previa identificación de clase, como escalón hacia la integración en un movimiento más vasto.

Dentro de la tipología de movimientos nacional populares, el peronismo ofrece la particularidad de que en él la participación obrera a través de organizaciones sindicales, ya sea en el momento de su apogeo como en el de su estructuración o su caída, tiene un peso propio en relación con las otras formas posibles de participación, como no lo alcanzó en ninguna experiencia nacional popular contemporánea a ella en América latina.

Por ello, ese plano, el que permite discriminar la participación obrera en el nivel de las organizaciones, es el que nos interesa en primer lugar. Y además, porque es a partir del examen del peso de las organizaciones en la constitución de una alianza que es posible transferir el análisis político del nivel de los actores al de los grupos y remitir el problema de la especificación de las conductas al plano de la descripción de los intereses.

Desde ese punto de vista encontramos, a nivel organizacional, en el período peronista, la coexistencia de tres tipos de organizaciones gremiales:

- 1) sindicatos “viejos”;
- 2) sindicatos “nuevos”;
- 3) sindicatos “paralelos”.

En los primeros agrupamos a aquellos sindicatos tradicionales, del tipo de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Gráficos, Trabajadores del Estado, fundados con anterioridad a la década del 30, que agrupaban preferentemente a los trabajadores de servicios y que controlaban, a comienzos del peronismo, a la Confederación General del Trabajo y a las federaciones gremiales menores como la Unión Sindical Argentina.

En los segundos agrupamos a los sindicatos fundados con posterioridad a 1943, representativos de ramas de la economía en la que se produce un intenso crecimiento industrial posterior a la década del 30 y en las que sus trabajadores no habían sido organizados por los dirigentes “viejos”. Ejemplos de ello serían químicos, trabajadores de la industria eléctrica, obreros del tabaco, etcétera.

Los terceros, finalmente, serían aquellos sindicatos, “nuevos” en cuanto a fecha de fundación, pero que surgen como alternativas organizativas en ramas de la producción en las que ya existían sindicatos estructurados por los “viejos”. Los ejemplos más notorios serían los casos de textiles y metalúrgicos.

Partiendo de esta complejidad organizacional del movimiento obrero, la etapa siguiente llevaría a tratar de especificar el peso relativo, en cuanto a participación, que cada una de estas categorías en que hemos agrupado a los sindicatos tuvieron en el momento de la génesis del peronismo. Una rápida observación de los datos disponibles nos reveló que la articulación gremial del nacionalismo popular tomó la forma de una coincidencia entre sindicatos viejos, sindicatos nuevos y sindicatos paralelos. El punto de partida para el análisis de la participación sindical nos remite a la escasa significación del corte organizacional como núcleo básico para una explicación del apoyo inicial de la clase trabajadora al peronismo.

No podría afirmarse, de ningún modo, que en momentos de la configuración del nacionalismo popular las organizaciones viejas, en bloque o siquiera mayoritariamente, man-

tuvieron una actitud de oposición frente a las actitudes favorables al peronismo por parte de las nuevas. Lo que sí podría discriminarse, en todo caso, son las áreas en que la participación de unas y otras fue más o menos intensa.

Hemos visto ya que en el plano de la articulación formal de la alianza entre la elite política y la clase obrera fueron los sindicatos viejos y los dirigentes tradicionales quienes más peso institucional tuvieron, por haber mantenido bajo su control las organizaciones gremiales más importantes, lo que resultaba decisivo dado el carácter explícito que adquirieron los acuerdos.

Si en el *área de la dirección organizativa* fueron éstos quienes operaron con mayor posibilidad de influencia, podría afirmarse, a modo de hipótesis, que en lo que se refiere a la *actividad callejera*, que tanta importancia política adquirió en los momentos cruciales para la estructuración del peronismo —el 17 de octubre de 1945, por ejemplo— el papel de los sindicatos nuevos y paralelos adquirió un volumen relativo mayor como factor de movilización.

Ahora bien, del mismo modo que podrían distinguirse grados de participación según tipos de sindicatos, sería posible, desde el punto de vista de la composición interna de la clase obrera como fuerza de trabajo, discriminar también formas de participación en el populismo según tipos de experiencia industrial vividos por los actores, combinando, incluso, ambos criterios.

Mientras los trabajadores con experiencia exitosa de lucha sindical autónoma entenderían las relaciones con la elite política como un acuerdo con una fuerza externa a la clase obrera, mediante el cual obtienen satisfacción para sus antiguos reclamos, aquellos obreros con reclamos derivados de una experiencia industrial pero no satisfechos por la actividad desplegada por el sindicalismo y por los partidos tradicionales de izquierda en el momento anterior, serían más

proclives a disminuir la mediación sindical para instrumentar su participación y a enfatizar, en cambio, su condición de adherentes a un movimiento político, al que habrán de integrarse con reivindicaciones propias, pero sin el grado de condicionalidad otorgado por la intermediación del aparato gremial, por lo que finalmente dependerían más de las decisiones de la elite política. Todavía más se acercaría a este extremo, obviamente, aquellos trabajadores sin ninguna experiencia de lucha a través de los trabajadores.

Siguiendo esta dirección de análisis, según la cual la heterogeneidad se define desde dentro de la experiencia industrial, sería lícito derivar que la mayor o menor probabilidad de heteronomía obrera en un movimiento de tipo populista se relaciona con el peso que los trabajadores le otorgan, en tanto fuerza mediadora, al sindicalismo, en función de los resultados que ese instrumento de lucha ha tenido para ellos en el pasado.

Efectivamente, en la medida en que la participación obrera en el populismo sea fuertemente mediada por el canal de la organización sindical, operando ésta como eslabón entre los trabajadores y una fuerza con la que se coincide, pero a la que se percibe como ajena, la posibilidad de una orientación autónoma es mayor. Si ese papel intermediador no es reconocido por los obreros, sea por carencia de experiencia en esa dirección o por una experiencia fallida, es más alta la probabilidad de subordinación a intereses ajenos a los de la clase.

Estas categorías de trabajadores podrían, desde luego, encontrarse dispersas en los tres tipos de sindicatos, pero es probable que la mayor frecuencia a favor de una valoración positiva del papel mediador del sindicalismo y de la necesidad de mantener una independencia relativa frente a las instituciones ajenas a la clase se encuentre en las organizaciones y en los dirigentes tradicionales y que, por lo tanto, fueran éstos quienes reivindicaran con mayor vigor la defensa de una autonomía sindical de tipo reformista, frente al poder político del Estado.

En el caso de la participación obrera en el peronismo nos hemos encontrado con un significativo peso de organizaciones sindicales con larga tradición anterior que durante todo el proceso de estructuración del nacionalismo popular mantuvieron fuertes reclamos de autonomía y que, incluso, los llevaron al nivel de la política mediante la organización del Partido Laborista.

No habría, en ese sentido, una disolución de la autonomía en favor de la heteronomía obrera en el momento inicial del peronismo en la Argentina, sino, en todo caso, en una etapa posterior. Es posible postular, incluso, que en una primera etapa de la relación entre organización sindical y elite política populista, aun cuando ésta ya coparticipaba del poder (como sucedió entre 1943 y 1946) la primera mantenía, a los efectos de una alianza, un peso relativo mayor en la relación de fuerzas que la segunda.

En ese primer momento la elite busca la negociación con los sindicatos, ofreciendo expresamente un pacto que éstos aceptan en términos de un acuerdo de intereses. Hay luego una etapa intermedia en la que merced al apoyo orgánico del sindicalismo la elite puede articular su aparato político y, con el apoyo de la mayoría de la clase obrera, llega a controlar de manera total el aparato del Estado. Finalmente se abriría un tercer momento, cuyo nudo estaría en la disolución por orden oficial del Partido Laborista, en el que la elite política, ya controlando el Estado, tiende gradualmente a liquidar la autonomía de los sindicatos pero sin poder, pese a todo, eliminar por completo su rol institucional, hasta el punto que, al producirse el derrocamiento violento del populismo, el sindicalismo pasa a ser su columna vertebral, tal como ya lo hemos señalado.

Desde el punto de vista de los comportamientos obreros, su adhesión al populismo en el momento de su estructuración podría ser, entonces, legítimamente percibido como la elección más adecuada, dentro de las alternativas ofrecidas

por la realidad, de una alianza política que pudiera servir de salida a un proceso de industrialización que se llevaba a cabo bajo el control de una elite tradicional, sin, por lo tanto, ninguna participación obrera ni ningún tipo de intervencionismo social. Y esta percepción no debía implicar, necesariamente, una ruptura con lo que constituía la tradición reformista del movimiento obrero argentino —al menos claramente desde los años treinta—, la que incluía la posibilidad de negociaciones y acuerdos con el Estado.

Así, cualquier análisis de un movimiento nacional popular, surgido como respuesta política a un proceso de rápida industrialización, necesita tener en cuenta el grado alto o bajo de complejidad de la estructura social en el momento previo al populismo, uno de cuyos indicadores más significativos para el análisis de la relación entre clase obrera y nacionalismo popular es el nivel de desarrollo de la organización sindical. Las teorías en cuyos puntos de partida se enfatiza el grado de tradicionalidad previo al despegue industrializador, tienden necesariamente a extender a límites absolutos la caracterización de la clase obrera en su conjunto como integrada por nuevos contingentes atraídos hacia la ciudad desde polos de atraso rural. Si el desarrollo industrial es *paralelo* con el ascenso al poder de una elite populista, como en el Brasil, las conductas obreras pueden ser explicadas como resultado de una supervivencia de restos de tradicionalidad normativa combinada con un marco situacional que favorece, a través de los consumos urbanos, proyectos de movilidad. En el caso contrario, si hay una etapa en que el desarrollo económico no coincide con el intervencionismo social, los nuevos obreros quedarían disponibles para ser integrados por el populismo, porque su ingreso en el mundo urbano les acarrea la pérdida de sus viejos anclajes normativos sin que una integración adecuada les proporcione un sistema de valores “moderno” como remplazo del encuadre perdido, por lo que entran en

un estado de desintegración anómica. En ambas versiones el resultado obtenido es heteronomía, pasividad e incapacidad de proyectarse más allá de la zona de intereses inmediatos, como componentes esenciales de la conducta obrera.

Como hemos intentado ejemplificarlo, el análisis del peronismo en una de sus etapas pone en cuestión el modelo de la heteronomía obrera como condición principal para el surgimiento de todo movimiento nacional popular. El sentido del presente trabajo no avanza mucho más lejos de este punto, en el que se plantea el cuestionamiento de los esquemas explicativos más habituales, a partir del peso notorio de obreros y organizaciones viejas y de tradiciones reformistas, que encontramos en los orígenes del peronismo. Esto no significa, desde ya, postular un modelo exactamente inverso al anterior sino, en todo caso, relativizar las proposiciones centrales de éste en la explicación del momento genético del populismo, intentar otorgarles un marco histórico por medio de un análisis que busque la periodización de las relaciones entre clase obrera y populismo según distintas etapas de ésta y proponer un encuadre teórico para el estudio de los movimientos nacional populares que incluya como preocupación fundamental una discriminación sobre las formas sociopolíticas que adquirió en cada contexto nacional el proceso de industrialización y que trate de definir las conductas de los actores de dicho proceso en términos que acentúen sus intereses de clase por encima de sus orientaciones normativas.

Notas

- 1 “La proposición general que puede formularse [...] en base a la evidencia acumulada en distintas investigaciones, ya sea sobre resultados electorales, ya sea en base a estudios y encuestas de opinión pública es que, mientras las clases populares tienden a orientarse hacia los partidos y las ideologías consideradas de ‘izquierda’, las clases medias y altas se orientan hacia el polo opuesto, a saber, hacia partidos e ideologías consideradas de derecha.” Gino Germani, *Política y Sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, 1962, p. 131.
- 2 *Cfr.*, entre otros, Germani, *op. cit.*; S. M. Lipset, *El hombre político*, Buenos Aires, 1964 y la versión más difundida de esa interpretación, Eric Fromm, *El miedo a la libertad*, Buenos Aires, 1958.
- 3 Lipset, *op. cit.*, p. 119.
- 4 *Cfr.* Alain Touraine, “Industrialización y conciencia obrera en San Pablo”, Alain Touraine y Gino Germani, *América del sur: un proletariado nuevo*, Barcelona, 1965, p. 10.
- 5 Touraine, *op. cit.*, p. 15.
- 6 Germani, *Política y sociedad...*, pp. 244 y 250.
- 7 Germani, *op. cit.*, p. 248.
- 8 Alberto Belloni, *Peronismo y socialismo nacional*, Buenos Aires, 1962, p. 13. Del mismo autor, *Del Anarquismo al Peronismo*, Buenos Aires, 1960, p. 59.
- 9 Jorge Abelardo Ramos, *De Octubre a Septiembre*, Buenos Aires, p. 342.
- 10 Así como los ensayistas políticos partidarios del peronismo adscriben valores positivos al origen rural-tradicional de la nueva clase obrera, para otros, ubicados en el antiperonismo, la perspectiva es la opuesta, más cercana a las hipótesis corrientes en teoría sociológica. También para éstos el corte es el punto central para la explicación de la participación obrera en el movimiento populista. “La mayor parte de la nueva mano de obra provenía del campo. Se trataba, en general, de sectores sin antecedentes sindicales y bajo nivel político. Esta

- irrupción de trabajadores del interior rebasó los viejos cuadros sindicales.” Benito Marianetti, *Argentina, realidad y perspectivas*, Buenos Aires, 1964, p. 328. En la campaña electoral de 1945/1946 los candidatos de la alianza antiperonista, apoyados por los partidos de izquierda, hacían permanente hincapié en la diferencia entre viejos y nuevos trabajadores, adjudicándose para sí el favor de los primeros, a los que se calificaba como “auténticos obreros”. Cfr. Enrique Mosca, *Unión, Democracia y Libertad*, Buenos Aires, 1946, p. 128.
- 11 Octavio Ianni, “Condições institucionais do comportamento político operário”, *Revista Brasileira*, 36, 1961, p. 29. Esta descripción acerca del ingreso en el consumo se aplica en el momento en que el populismo ya está en el poder. Requeriría especial atención —pues marcaría una diferencia entre la situación brasileña y la argentina— un proceso en el cual antes del acceso a un mercado urbano de masas se opera un período, también urbano, de segregación y bajo nivel de consumo.
- 12 Germani, *op. cit.* p. 231.
- 13 Alain Touraine, “Movilidad social, relaciones de clase y nacionalismo en América Latina”, *América Latina*, año 8, N° 1, enero-marzo de 1965, p. 37.
- 14 Sin embargo, la existencia de ese proceso de movilización sin participación es el núcleo central con que la teoría distingue las situaciones de industrialización en países centrales y en países periféricos. “La industrialización europea se produjo cuando los obreros eran aún tenidos al margen de toda forma de participación política. Por el contrario, los trabajadores latinoamericanos han sido admitidos muy pronto a diversas formas de participación, lo cual les ha permitido, al mismo tiempo, mayores posibilidades de influencia. Este adelanto de la participación política en relación con la industrialización se ha manifestado a través de los movimientos nacional-populares analizados por Gino Germani; se ha concretado en el desarrollo precoz de una legislación social que indica menos la intervención del Estado en la vida económica que la influencia de las nuevas masas urbanas; y finalmente ha sido acompañada de referencias anticipadas a los modelos culturales y de consumo de las sociedades industrializadas”, Alain Touraine y Daniel Pécaud, “Conciencia obrera y desarrollo económico en América Latina”, *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. II, n° 2, julio 1966.
- 15 Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, “Crecimiento industrial y

- alianza de clases en la Argentina (1930-1940)”, Documento de Trabajo del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella, 1968; incluido en el presente volumen.
- 16 Englobamos dentro de trabajadores industriales a los ocupados en Alimentación, Confección, Construcción, Metales, Textiles, Gráfica, Madera y Químicas. En Servicios agrupamos a Comercio, Comunicaciones, Actividades del Estado, Electricidad, Hostelería, Servicios Sanitarios y Espectáculos Públicos.
- 17 Felix Weil, *Argentine Riddle*, Nueva York, 1945, p. 85.
- 18 Samuel L. Baily, *Labor, Nationalism and Politics in Argentina*, Rutgers University Press, 1957, p. 70. Hubo posteriormente una traducción al castellano: *Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina*, Buenos Aires, 1984.
- 19 IV Censo General de la Nación, Tomo III, Censo Industrial.
- 20 Sebastián Marotta, *Argentina 1930-1960*, Sur, Buenos Aires, 1961.
- 21 Jacinto Oddone, *Gremialismo Proletario Argentino*, Buenos Aires, 1949, p. 335.
- 22 Rubens Iscaro, *Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino*, Buenos Aires, 1958, p. 169.
- 23 Véase, en especial, Confederación General del Trabajo, Actas del Primer Congreso Ordinario Confederado, Buenos Aires, 1940.
- 24 Carlos Fayt, *La Naturaleza del Peronismo*, Buenos Aires, 1967, p. 95.
- 25 Oddone, *op. cit.*, p. 402.
- 26 Luis B. Cerruti Costa, *El sindicalismo, las masas y el poder*, Buenos Aires, 1957, p. 132.
- 27 *La Prensa*, ediciones del 24 y 26 de junio de 1945. La declaración de la Unión Obrera Textil, firmada por Cándido Gregorio, señalaba: “el aparente ataque a la Secretaría de Trabajo y Previsión y a sus actuales autoridades refleja en las fuerzas vivas el deseo de mantener el estado de cosas con el concepto arbitrario que siempre han tenido”.
- 28 *La Prensa*, 12 de julio de 1945.
- 29 Alejandro M. Unsain, *Ordenamiento de las leyes obreras argentinas*, Buenos Aires, 1952, p. 389.
- 30 La Declaración de Principios y demás documentos relacionados con la fundación del Partido Laborista son transcritos en Carlos Fayt, *op. cit.*, pp. 118 a 154.
- 31 Fayt, *op. cit.*, p. 132. De quince miembros del Comité Provisional del Partido Laborista, tres eran ferroviarios, dos trabajadores de frigorí-

- ficos, dos de la industrial del vidrio y los ocho restantes metalúrgicos, telefónicos, espectáculos públicos, cervecero, tranviarios, municipales, periodistas y madereros.
- 32 Oddone, *op. cit.*, pp. 376 y 377.
- 33 Confederación General del Trabajo, Actas del 2^{do} Congreso Ordinario, Buenos Aires, 1943, p. 134.
- 34 Iscaro, *op. cit.*, p. 229.
- 35 *La Prensa*, edición del 10 de septiembre de 1945.
- 36 Cerruti Costa, *op. cit.*, p. 178.
- 37 Ministerio del Interior, *Las Fuerzas Armadas restablecen el imperio de la soberanía popular*; Buenos Aires, 1946, Tomo II, p. 80.
- 38 Cerruti Costa, *op. cit.*, p. 171.
- 39 Alain Touraine, "Movilidad social, relaciones de clase...", *op. cit.*, p. 37.
- 40 *Cfr.* Leoncio Martins Rodrigues, "Sindicalismo y desarrollo en Brasil", *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. II, n^o 1, marzo 1966, pp. 27 a 42.
- 41 El porcentaje de las exportaciones de productos terminados ascendió, sobre el total de las exportaciones, entre 1939 y 1943 del 1 al 11%, el de semielaborados del 3 al 14% y el de industrializados primarios del 32 al 44%. Ello, mientras las exportaciones de materias primas en el mismo lapso descendían del 64 al 31 % del total. En cuanto al destino de las exportaciones, América latina absorbió, en 1943, el 47% del total embarcado. *Cfr.* Unión Industrial Argentina, *Memoria*, 1943.